

CUESTIONARIOS PROPOSICIONES DEBATE DE CONTROL POLÍTICO OCTUBRE 2024

Nota aclaratoria: la Consejería Comisionada de Paz recibió las proposiciones No. 006, 013, 015, 025, 033, 039, 074, 088, 102, 121 y 139 con cuestionarios específicos para el debate de control político. En este documento, damos respuesta a estos cuestionarios de forma conjunta. El objetivo es unificar la información y así mejorar la respuesta institucional y contribuir al adecuado control político por parte del Congreso. Las proposiciones 013, 015, 074 y 088 no incluían preguntas hacia el Consejero Comisionado, por lo que se excluyen de este documento.

PROPOSICIÓN 6:	<u>1</u>
PROPOSICIÓN 25:	<u>27</u>
PROPOSICIÓN 33:	<u>30</u>
PROPOSICIÓN 39:	<u>47</u>
PROPOSICIÓN 102:	<u>55</u>
PROPOSICIÓN 121:	<u>69</u>
PROPOSICIÓN 139:	<u>84</u>

Proposición 6:

- 1. ¿Cuántas órdenes de captura han solicitado suspender durante los diálogos, acercamientos o negociaciones con grupos al margen de la ley, estructuras criminales y grupos armados organizados? Sírvase especificar el número de medidas por grupo armado organizado, la fecha de solicitud y la vigencia de estas.***

El Gobierno Nacional, desde la Oficina del Consejero Comisionado de Paz ha solicitado la suspensión de órdenes de captura de 68 personas, las cuales corresponden a los Miembros Representantes reconocidos por el señor Presidente de la República:

ROL	MESA DE DIÁLOGOS O ESPACIO SOCIOJURÍCO
MIEMBRO REPRESENTANTE A LA MDP	DIALOGOS EMC FARC-EP
MIEMBRO REPRESENTANTE A LA MDP	DIALOGOS EMC FARC-EP
MIEMBRO REPRESENTANTE A LA MDP	DIALOGOS EMC FARC-EP
MIEMBRO REPRESENTANTE A LA MDP	DIALOGOS EMC FARC-EP
MIEMBRO REPRESENTANTE A LA MDP	DIALOGOS EMC FARC-EP
MIEMBRO REPRESENTANTE A LA MDP	EMC
MIEMBRO REPRESENTANTE A LA MDP	EMC
MIEMBRO REPRESENTANTE A LA MDP	EMC
MIEMBRO REPRESENTANTE A LA MDP	EMC
MIEMBRO REPRESENTANTE A LA MDP	MANDOS
MIEMBRO REPRESENTANTE A LA MDP	MANDOS
MIEMBRO REPRESENTANTE A LA MDP	MANDOS
MIEMBRO REPRESENTANTE A LA MDP	MANDOS
MIEMBRO REPRESENTANTE A LA MDP	MANDOS
MIEMBRO REPRESENTANTE A LA MDP	MANDOS
MIEMBRO REPRESENTANTE A LA SM	SEGUNDA MARQUETALIA
MIEMBRO REPRESENTANTE A LA SM	SEGUNDA MARQUETALIA
MIEMBRO REPRESENTANTE A LA SM	SEGUNDA MARQUETALIA
MIEMBRO REPRESENTANTE A LA SM	SEGUNDA MARQUETALIA
MIEMBRO REPRESENTANTE A LA SM	SEGUNDA MARQUETALIA
MIEMBRO REPRESENTANTE A LA SM	SEGUNDA MARQUETALIA
MIEMBRO REPRESENTANTE A LA SM	SEGUNDA MARQUETALIA
MIEMBRO REPRESENTANTE A LA SM	SEGUNDA MARQUETALIA
MIEMBRO REPRESENTANTE A LA SM	SEGUNDA MARQUETALIA
MIEMBRO REPRESENTANTE A LA SM	SEGUNDA MARQUETALIA
MIEMBRO REPRESENTANTE A LA SM	SEGUNDA MARQUETALIA
MIEMBRO REPRESENTANTE A LA SM	SEGUNDA MARQUETALIA
MIEMBRO REPRESENTANTE A LA SM	SEGUNDA MARQUETALIA
MIEMBRO REPRESENTANTE A LA SM	SEGUNDA MARQUETALIA
MIEMBRO REPRESENTANTE A LA AGC	AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA
MIEMBRO REPRESENTANTE A LA AGC	AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA
MIEMBRO REPRESENTANTE A LA AGC	AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA
MIEMBRO REPRESENTANTE A LA AGC	AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA
MIEMBRO REPRESENTANTE A LA AGC	AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA

[illegible]

	Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes FARC -EP
MIEMBRO REPRESENTANTE FARC	Bloques Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte, Comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes FARC -EP
MIEMBRO REPRESENTANTE ACSN	Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada
MIEMBRO REPRESENTANTE ACSN	Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada
MIEMBRO REPRESENTANTE ACSN	Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada
MIEMBRO REPRESENTANTE ACSN	Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada
MIEMBRO REPRESENTANTE COMUNEROS DEL SUR	COMUNEROS DEL SUR
MIEMBRO REPRESENTANTE COMUNEROS DEL SUR	COMUNEROS DEL SUR
MIEMBRO REPRESENTANTE COMUNEROS DEL SUR	COMUNEROS DEL SUR
MIEMBRO REPRESENTANTE COMUNEROS DEL SUR	COMUNEROS DEL SUR
MIEMBRO REPRESENTANTE COMUNEROS DEL SUR	COMUNEROS DEL SUR
MIEMBRO REPRESENTANTE COMUNEROS DEL SUR	COMUNEROS DEL SUR
MIEMBRO REPRESENTANTE COMUNEROS DEL SUR	COMUNEROS DEL SUR
MIEMBRO REPRESENTANTE COMUNEROS DEL SUR	COMUNEROS DEL SUR
MIEMBRO REPRESENTANTE COMUNEROS DEL SUR	COMUNEROS DEL SUR
MIEMBRO REPRESENTANTE ACSN	Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada
MIEMBRO REPRESENTANTE ACSN	Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada
MIEMBRO REPRESENTANTE ACSN	Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada

2. ¿Qué condiciones o exigencias han solicitado para esta suspensión de órdenes de captura a los grupos?

Como condición para la suspensión de orden de captura, tal como lo señala el párrafo 2 del artículo 8 de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022, se requiere el reconocimiento como miembro representante de un grupo armado organizado al margen de la ley, de un grupo

armado organizado o de una estructura armada organizada de crimen de alto impacto.

Teniendo en cuenta que esta solicitud se realiza por el grupo, la medición o verificación de condiciones para el mantenimiento de la misma depende de lo que ha llamado la Corte Constitucional “la comprometida participación en procesos de paz”, en el sentido de que el reconocimiento de la calidad ya aludida debe utilizarse para el desarrollo de actividades del proceso y no para un fortalecimiento u otro tipo de ventaja distinta a la construcción de una paz total.

3. ¿Cuál es el tiempo de vigencia de esta suspensión de órdenes de captura? ¿Cada cuánto se realiza la revisión de la pertinencia de la suspensión? ¿Cuál es el seguimiento realizado a las personas que se les suspende las órdenes de captura sobre su aporte a las negociaciones y construcción de paz?

Dado que la pregunta implica varias respuestas, vamos a precisarlas siguiente el mismo orden. Frente a la primera pregunta, la vigencia de la suspensión de las órdenes de captura es dada por la Fiscalía General de la Nación y no por el Gobierno Nacional, quien únicamente condiciona el tiempo del reconocimiento como miembro representante. La suspensión de órdenes de captura es un acto judicial, de forma que el Gobierno se encarga de realizar la solicitud, pero la vigencia de las órdenes depende de la autoridad judicial competente en cada caso.

Frente a la segunda pregunta, dado que la solicitud de la suspensión de una orden de captura es una consecuencia del reconocimiento de una figura jurídica propia de los esfuerzos de paz, como la calidad de miembros representantes y gestores de paz, no hay un criterio uniforme para revisar la pertenencia de la suspensión, sino que depende de cada caso. En el caso de los miembros representantes, depende de la dinámica y éxito del proceso de paz.

Frente a la tercera pregunta, al igual que sucede en el caso anterior, el seguimiento depende de la figura sobre la que se sustenta la solicitud de suspensión. En el caso de la gestoría de paz, por ejemplo, se desarrolla planes de trabajo para verificar su labor. El incumplimiento de estos planes puede implicar la revocatoria de la gestoría y, por ende, el análisis de si debe continuar la suspensión de las órdenes de captura.

4. En caso de crisis o ruptura de las negociaciones o diálogos, ¿cuál es el procedimiento para la reactivación de las órdenes de captura?

De manera respetuosa, se indica que en virtud del Decreto 2647 de 2022 en su artículo 23, la Consejería Comisionada de Paz no es competente para responder este requerimiento.

En este sentido, dando cumplimiento al Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, modificado y adicionado por la Ley 1755 del 2015, se dio traslado del requerimiento a la Fiscalía General de la Nación para los fines pertinentes, mediante OFI24-00211424¹.

5. *¿Esta entidad solicitó suspensión de órdenes de captura respecto al grupo liderado por Iban Mordisco”? En caso de ser positiva la respuesta, ¿cuántas fueron concedidas? ¿Están vigentes en este momento o cuándo fueron suspendidas?*

Nos permitimos indicar que la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, antes la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, no adelanta en este momento ningún tipo de diálogo de paz con el grupo de disidencias de las FARC al mando del señor conocido como “Iván Lozada” o “Mordisco”. Toda vez que el grupo Estado Mayor Central sufrió una división de sus estructuras, cuyo resultado fue que solamente los 2 bloques, Magdalena Media “Gentil Duarte”, Jorge Suárez Briceño y el Frente Raúl Reyes al mando del señor “Calarcá Córdoba”, manifestaron su voluntad de continuar con el Diálogo Político con el Gobierno Nacional.

Debido a lo anterior, el Gobierno Nacional, por medio de la Resolución 419 del 29 de diciembre de 2023, revocó la calidad de miembro representante a la señora:

- LEIDY TATIANA ROJAS OLAYA, identificada con cedula de ciudadnaia número 1.026.564.380

Por medio de la Resolución 233 del 26 de junio de 2024 se revocó la delegación como gestores de paz de los señores:

- Alexander Farfan Suarez, identificado con la Cédula de Ciudadanía 86.007.030
- Jaime Muñoz Dorado, identificado con la Cédula de Ciudadanía 1.061.689.296
- Fernando Israel Mendez Quitumbo, identificado con la Cédula de Ciudadanía 1.062.305.119

¹ Todos los oficios de traslados pueden encontrarse en la carpeta comprimida adjunta denominada “traslados”.

La Oficina del Consejero Comisionado de Paz, el 22 de agosto de 2024, solicitó ante la Fiscalía General de la Nación la revocatoria de la suspensión de las órdenes de captura de las siguientes personas:

- Yenimahr Nasare García identificada con documento de país de origen 31.849.363
- Ciro Alfonso Romero Ospina identificado con la Cédula de Ciudadanía 77.185.095

Finalmente, de manera respetuosa, se indica que en virtud del Decreto 2647 de 2022 en su artículo 23, la Consejería Comisionada de Paz no es competente para responder este requerimiento en su totalidad. Específicamente en lo concerniente a las preguntas: *¿cuántas fueron concedidas? ¿Están vigentes en este momento o cuándo fueron suspendidas?*

En este sentido, dando cumplimiento al Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, modificado y adicionado por la Ley 1755 del 2015, se dio traslado del requerimiento a la Fiscalía General de la Nación para los fines pertinentes, mediante OFI24-00211424.

6. ¿Cuáles son los criterios que este gobierno ha determinado para evidenciar la voluntad para transitar hacia el estado de derecho de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto?

Los criterios para verificar la voluntad de paz de los grupos armados organizados al margen de la ley y de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto fueron definidos por el Congreso de la República mediante la Ley 2272 de 2022. Los criterios consisten en que se evidencie, por parte del Gobierno Nacional, lo siguiente: i) en relación con los grupos armados organizados al margen de la ley-GAOML, la voluntad de acceder a las obligaciones mínimas de desarme, desmovilización, colaboración con la justicia y la demostración de la voluntad real de reincorporación a la vida civil, al igual que su voluntad de garantizar los derechos de las víctimas; y, ii) en relación con las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto-EAOCAI, como mínimo, la intención de entregar información suficiente para el desmantelamiento de las economías ilegales y de someterse a la justicia.

7. ¿Cuáles son los criterios de verificación que utiliza esta entidad para acreditar la calidad de los miembros, representantes o voceros en procesos de diálogos, negociaciones o firma de acuerdos con el Gobierno Nacional?

Los criterios de verificación utilizados para acreditar la calidad de los miembros, representantes o voceros dentro de los procesos diálogos o negociaciones con

los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley, son los determinados por la Ley 2272 de 2022. La ley en su artículo quinto (que modifica el artículo octavo de la ley 1941 de 2018), cuyo párrafo primero expresa que:

(...) se entiende por miembro representante, la persona que el grupo armado organizado al margen de la ley designe como representante suyo para participar en los diálogos, negociación o suscripción de acuerdos con el Gobierno Nacional, o sus delegados.

En el mismo sentido, los voceros de las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto y de los Grupos Armados Organizados son definidos en la misma ley como:

(...) la persona de la sociedad civil que, sin pertenecer al grupo armado organizado al margen de la ley, pero con el consentimiento expreso de este, participa en su nombre en los procesos de paz, diálogos, negociaciones y acuerdos. De igual manera, se entiende por vocero la persona de la sociedad civil que, sin pertenecer a la estructura armada organizada de crimen de alto impacto, pero con el consentimiento expreso de esta, participa en su nombre en los acercamientos, conversaciones y suscripción de términos de sometimiento a la justicia.

En consecuencia, la calidad de miembros representantes y voceros se otorga debido al principio de buena fe debido al cual el Grupo Armado o la Estructura manifiesta que una persona va a actuar en calidad de miembro representante o de vocero, que es posteriormente reconocido como tal por el Gobierno Nacional. Es imperativo que dicha buena fe se refleje en la participación y comprometida de los actores involucrados en el proceso de diálogo. Esto implica una evaluación cuidadosa de las credenciales y la legitimidad de los representantes designados, así como un reconocimiento mutuo de las intenciones y compromisos asumidos por ambas partes durante las conversaciones.

8. ¿Cuáles son los criterios que este gobierno ha determinado para evidenciar la voluntad para transitar hacia el estado de derecho de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto?

En la misma línea que la respuesta anterior, los criterios de verificación de la voluntad de tránsito hacia el Estado de Derecho fueron desarrollados en la Ley 2272 de 2022. En el párrafo 9 del artículo 5 se determina que:

Para acceder a cualquier tipo de incentivos y/o beneficios políticos, legales y socioeconómicos contemplados en dichos acuerdos se deberá exigir,

como mínimo, el desarme, la desmovilización, la colaboración con la justicia, y la demostración de la voluntad real de reincorporación a la vida civil.

En el caso de los miembros de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto se exigirá como mínimo información suficiente para el desmantelamiento de las economías ilegales.

En tal sentido, existe un criterio mínimo para la verificación de la voluntad real de sometimiento de este tipo de estructuras y es la entrega de información suficiente que permita lograr el desmantelamiento de las economías ilegales. No obstante, teniendo en cuenta que estos procesos de conversación y de compromiso entre ambas partes son acercamiento de voluntades encontradas, se debe tener en consideración que la voluntad no puede solo ser evaluada estáticamente, sino que debe responder a criterios dinámicos que evalúen la capacidad de compromiso, de cumplimiento, de disminución de la violencia y de garantía y respeto a la población civil, entre otros.

Conforme a ello, cada delegación del Gobierno, en cada espacio de conversación, deberá acudir al conjunto del sistema normativo y a la información recopilada por todo el aparato estatal para conformar una serie de elementos que permitan evaluar la verdadera voluntad de paz las Estructuras.

9. ¿A la fecha con qué estructuras criminales se han realizado acercamientos y negociaciones? ¿Cuál es el estado de avance de cada uno de estos? ¿Cuál es el estado de la Mesa de Diálogos de Paz con el Estado Mayor Central de las FARC - EP?

Actualmente la Consejería Comisionada de Paz se encuentra adelantando espacios de conversación socio-jurídicos con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y del Valle de Aburra, de Buenaventura, de Quibdó y con las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. En los siguientes literales se describe el avance en cada uno de estos 5 procesos.

A. Espacio de Conversación Socio Jurídico con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá.

Por medio de la Resolución 138 del 29 de mayo 2023 se autorizó la instalación del espacio de conversación con las estructuras armadas y se designaron a los representantes del Gobierno. Luego, mediante la Resolución 139 del 29 de mayo de 2023, se reconocieron voceros de dichas estructuras para participar en el espacio de conversación. La firma de estas resoluciones presidenciales se dio

luego de que las estructuras armadas manifestaran, mediante un comunicado, su voluntad de participar en la Política de Paz Total del Gobierno Nacional.

El 2 de junio de 2023, se instaló el Espacio de Conversación Socio Jurídico de Construcción de Paz Urbana con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá. Desde entonces, en el 2023, hubo reuniones de plenaria entre la delegación del Gobierno Nacional y los voceros de las estructuras para el espacio. En estas plenarias se deliberó sobre los protocolos de funcionamiento del Espacio de Conversación Socio jurídico, de comunicaciones y el de acciones para la protección de la vida.

Durante ese año, se aprobó la agenda de una ruta de asuntos de conversación socio jurídica que requiere el involucramiento de las autoridades municipales y departamental de Antioquia, y de los sectores gremiales y empresariales, de manera que se convierta en una agenda de ciudad y del área metropolitana. La ruta contiene 6 puntos que involucran no sólo el desescalamiento de las violencias sobre la sociedad, sino también la transición de los grupos armados a una condición de legalidad en el que las víctimas, su participación y los derechos a verdad justicia y reparación sean satisfechos, así como la transformación de las economías ilegales mediante la generación de economías legales.

La ruta, y el esfuerzo principal del Gobierno, busca facilitar la conversación entre las partes y, su objetivo final, expresado como voluntad por las bandas, debe ser desmonte de las estructuras armadas ilegales de Medellín y Valle de Aburrá; e integrar los sectores cívicos, incluidos los gobiernos locales, en el proceso. Por esto se consideró que la interlocución con los jefes de las bandas y con un sector de la sociedad es insuficiente para transformar las condiciones de violencia e ilegalidad que persisten en Medellín y el Valle de Aburrá desde hace más de 30 años, territorio donde estas estructuras organizadas de crimen de alto impacto han sido actores de primer orden.

B. Espacio de Conversación Socio jurídico con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Quibdó.

El 30 de agosto de 2023 se emitió la Resolución 264 con la cual se autorizó la instalación del espacio de conversación socio jurídico de construcción de paz urbana con las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto de Quibdó y se designaron los representantes del Gobierno nacional. Seguidamente, el 4 de septiembre de 2023, el Presidente de la República reconoció, en la Resolución 274 de 2023, a los voceros de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto autodenominadas “Los Mexicanos”, “Locos Yam” y “RPS”, que involucran a cerca de 700 jóvenes para que participen en el Espacio de Conversación con el propósito de lograr el sometimiento a la justicia.

A la presente fecha, se definió un plan de acción conjuntamente entre el Gobierno nacional y los voceros de las estructuras, con el fin de establecer acciones concretas para permitir el avance del Espacio, la construcción de paz urbana en Quibdó y el establecimiento de las condiciones de sometimiento, de conformidad con lo establecido en la ley. Lo anterior, dio como resultado que el día 8 de agosto de 2024 las estructuras armadas de Quibdó "Los Mexicanos", "Locos Yam" y "RPS" se comprometieron a reducir la extorsión en la ciudad en contra de profesores, personal de salud, obras comunitarias en los barrios, mejoras de vivienda y construcciones menores, acarreos de material de construcción y taxis.

Finalmente, es importante aclarar que la situación que se vive en Quibdó y que ha venido empeorando, se debe principalmente a la decisión y el avance que han venido desplegando las Autodefensas Gaitanistas de Colombia sobre la ciudad. Esta situación ha sido expuesta por la Consejería de Paz en diferentes escenarios y, en especial ante el Congreso de la República desde el pasado 03 de septiembre.

C. Espacio de Conversación Socio jurídico con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Buenaventura.

A través de Resolución 210 del 21 de julio de 2023 se instaló el Espacio de Conversación Socio jurídico con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Buenaventura y se designaron los representantes del Gobierno. El 21 de julio de 2023, a través de la Resolución 211, se reconocieron los representantes de las dos estructuras armadas autodenominadas "Shottas" y "Espartanos", quienes integrarían los Espacios de Conversación Socio jurídico. Finalmente, el 26 de junio de 2024, mediante la Resolución 231, se designaron nuevamente a representantes del Gobierno Nacional.

La apertura de este espacio se dio luego de que dichas estructuras se comprometieran a disminuir las acciones violentas y hacer efectiva la reducción las confrontaciones entre ambos grupos durante un mes inicial. En ese acuerdo, de reducción de violencia, las delegaciones acordaron reducir las confrontaciones, eliminar completamente los homicidios y reducir conductas tales como la extorsión y el hurto. Para su verificación, se estableció un mecanismo de recepción de solicitudes y denuncias.

Aunado a lo anterior, desde la instalación de los espacios se han realizado de manera permanente plenarias, sesiones de la subcomisión de seguridad, sesiones de la subcomisión de trabajo comunitario y participación, así como sesiones de la subcomisión de articulación institucional y trabajo estratégico. De

forma simultánea, se elaboró la propuesta de temas de Conversación, que se encuentra en proceso de concertación.

El 1 de agosto de 2024, la Alcaldía Distrital, la Iglesia Católica, líderes de la Comuna 12 y campesinos de Cisneros, miembros del Consejo Comunitario de Bahía Málaga, reactivaron el mercado popular campesino en la plaza de Matías Mulumba, en el marco del Espacio de Conversación Socio jurídico en Buenaventura. Esta reactivación es una medida orientada a desescalar algunas de las violencias más recurrentes en el puerto, como la cartelización de los productos de la canasta básica y la extorsión, fenómenos que han debilitado el comercio en el distrito portuario y afectado la vida de sus habitantes.

Junto con la reducción de la extorsión, los principales temas que se están trabajando en este Espacio de Conversación son la reducción de los homicidios por enfrentamientos entre las estructuras armadas "Shottas" y "Espartanos" y la reducción del reclutamiento. Para lograr este objetivo, se evalúa el fortalecimiento de procesos productivos, ocupacionales y culturales, brindando a la juventud bonaverense alternativas de sostenimiento distintas a la violencia. En particular, el 9 de agosto de 2024, en un comunicado público, los grupos "Shottas" y "Espartanos" se comprometieron a desarrollar acciones para disminuir la violencia y generar confianza en torno a la paz urbana, con compromisos que incluyen reducir el hurto, rechazar la extorsión, eliminar las fronteras invisibles y establecer una tregua entre los grupos por un período inicial de 30 días.

Este compromiso ha tenido un impacto positivo en los índices de criminalidad de la ciudad: en agosto de 2024, se registró un solo homicidio en la zona urbana de Buenaventura, una cifra significativamente menor en comparación con meses y años anteriores. Las comunidades reportan la ausencia de balaceras y otros actos de violencia que eran comunes en varias zonas de la ciudad. Finalmente, el cumplimiento de estos compromisos lo vigilarán las comunidades locales y observadores internacionales.

Finalmente, el 18 de septiembre de 2024 la Delegación del Gobierno realizó el siguiente comunicado a la opinión pública:

La Delegación del Gobierno Nacional para adelantar el Espacio de Conversación Socio-Jurídico saluda el pronunciamiento que han hecho las estructuras armadas Shottas y Espartanos en los que ratifican su voluntad de avanzar en la construcción de Paz Urbana, manifestado como señal de este propósito el respeto a la realización del Festival Folklórico del Pacífico.

Esta Delegación continuará en la labor del diálogo con la sociedad de Buenaventura y con las estructuras armadas ilegales para lograr el

“Acuerdo Regional y Nacional por la Paz en Buenaventura”, que propende por:

1. Consolidación de una Cultura de Paz
2. Transformaciones sociales del territorio
3. Des-escalamiento de violencias
4. Tránsito hacia la vida civil y democrática

Agradecemos la apertura de la ciudadanía y las instituciones públicas locales, regionales y nacionales para respaldar este esfuerzo que acompaña la Comunidad Internacional a través de la Delegación de la ONU, la MAPP/OEA y el señor obispo de Buenaventura.

D. Acercamientos con autorización para instalar un Espacio de Conversación Socio jurídico con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)

Durante el año 2023 y el primer semestre de 2024 se desarrollaron acercamientos exploratorios con el Clan del Golfo, en los cuales se adelantó la verificación de su voluntad real de reincorporación y reintegración a la sociedad civil. El 8 de julio de 2024, mediante Resolución No. 257, el Presidente de la República autorizó la instalación del Espacio de Conversación Socio jurídico con dicha estructura. Adicionalmente, mediante la Resolución 279 del 22 de julio de 2024, se reconocieron miembros representantes de la estructura para participar en el espacio. Desde diciembre de 2023, la interlocución con este grupo armado se encuentra en la etapa denominada “Construcción de Confianza”; una vez consolidada esta etapa se avanzará en las siguientes etapas.

E. Acercamientos con autorización para instalar un Espacio de Conversación Socio jurídico con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).

Durante el año 2023 y el primer semestre de 2024 se desarrollaron acercamientos exploratorios con la estructura armada. En estos se verificó su voluntad real de dejar de existir como grupo armado y, en consecuencia, su voluntad de reintegrarse a la vida civil una vez surtidos los procesos judiciales pertinentes. Mediante la Resolución 300 del 1 de agosto de 2024, el *Presidente* de la República autorizó la instalación del Espacio de Conversación Sociojurídico con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) y designó el equipo de gobierno para el proceso. Asimismo, mediante la Resolución 335 del

26 de agosto de 2024, el Gobierno Nacional reconoció a cuatro miembros representantes de las ACSN. A la fecha, el proceso no se ha instalado formalmente.

10. *Teniendo en cuenta el decreto 0385 de 2024 mediante el cual se suspende el cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional con impacto territorial entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las FARC - EP ¿Qué información ha logrado consolidar esta entidad para generación de diagnósticos y escenarios prospectivos en torno al proceso con este grupo al margen de la ley? Favor sírvase de señalar tanto en los territorios donde fue suspendido como en las demás zonas donde tiene presencia este grupo al margen de la ley.*

En primer lugar, debe señalarse que, en virtud del Decreto 888 de 2024 y del Acuerdo sobre las estructuras para el Cese al Fuego del 13 de julio de 2024, la Mesa de Diálogos de Paz actualmente se desarrolla con los Bloques "Comandante Jorge Suárez Briceño", Magdalena Medio "Comandante Gentil Duarte" y frente "Comandante Raúl Reyes" de las FARC-EP, quienes manifestaron abierta y continuamente su intención de continuar la construcción de paz.

Por lo tanto, los escenarios y diagnósticos prospectivos sobre los bloques que manifestaron su intención de no continuar en la Mesa de Diálogos, se reducen a verificar su intención real de construcción de paz con el Gobierno nacional, circunstancia que no se ha evidenciado a la fecha. No obstante, si la pregunta hace relación a información referida a la caracterización de operaciones o de desarrollo de acciones militares de los bloques que no continuaron en la Mesa de Diálogos de Paz, de manera respetuosa, se indica que en virtud del Decreto 2647 de 2022 en su artículo 23, la Consejería Comisionada de Paz no es competente para responder este requerimiento.

En este sentido, dando cumplimiento al Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, modificado y adicionado por la Ley 1755 del 2015, se dio traslado del requerimiento al Ministerio de Defensa para los trámites pertinentes, mediante OFI24-00214889.

11. *¿Cuál es el estado de la Mesa de Diálogos de Paz con el Ejército de Liberación Nacional ELN?*

El Presidente de la República autorizó la reanudación de la Mesa de Diálogos de Paz mediante la Resolución 264 del 15 de noviembre de 2022.

Durante el 2023, se expidieron las resoluciones 036 del 06 de marzo de 2023 y 194 del 8 de julio de 2023, dentro de las cuales se reconoció la existencia de negociaciones y diálogos de carácter político con el Ejército de Liberación Nacional ELN tendientes a facilitar su desarme y desmovilización y se dictaron disposiciones relacionadas con la agenda de diálogos de paz. Este avance continuó con la expedición de las Resoluciones 275 del 06 de septiembre de 2023, 308 del 04 de octubre de 2023 y 144 del 10 de mayo de 2024, donde se designaron representantes del Gobierno Nacional para integrar el Mecanismo de Monitoreo y Verificación del Cese al Fuego Bilateral y Temporal de Carácter Nacional con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), decretado por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 1117 de 2023.

En aplicación de este marco jurídico, y durante el período comprendido entre noviembre de 2022 y hasta la fecha, se desarrollaron 6 ciclos de diálogos y 3 reuniones en las que se suscribieron 28 acuerdos y 14 protocolos, logrando principalmente la suscripción de los siguientes acuerdos:

En el primer ciclo de diálogos, que se llevó a cabo entre el 21 de noviembre y el 12 de diciembre de 2022 en la República Bolivariana de Venezuela, las partes acordaron: i) retomar como guía el acuerdo de agenda y los ejes esenciales firmados en marzo de 2016, con los ajustes realizados en este ciclo; ii) se estableció un acuerdo de institucionalización de la Mesa de Diálogos, referido al apoyo de la comunidad internacional en calidad de garantes y en calidad de acompañantes, así como de la Conferencia Episcopal de Colombia, al igual que definió la metodología de funcionamiento de la Mesa de Diálogos; iii) acuerdo parcial de atención de emergencia humanitaria, el cual se desarrolló en el Bajo Calima (Valle del Cauca) y el Medio San Juan (Chocó); iv) se estableció una estrategia sobre un plan de comunicaciones y pedagogía sobre la Mesa de Diálogos; y v) se pactó un acuerdo de alivios humanitarios referidos a personas en situación crítica de salud y privados de la libertad del ELN.

En el segundo ciclo de diálogos, que se desarrolló entre el 13 de febrero y el 10 de marzo de 2023 en México, se culminó con un resultado estructural para la Mesa de Diálogos, "El Acuerdo de México", que contiene el horizonte político del proceso y una Nueva Agenda de Diálogos para la Paz. Igualmente, se lograron suscribir los acuerdos 7 y 8 con bases para acuerdos futuros en materia de participación de la sociedad en la construcción de la paz y de cese al fuego.

El 2 de mayo al 9 de junio siguiente, se desarrolló el tercer ciclo de la Mesa de Diálogos, en el que se derivaron importantes logros. Se firmó el Acuerdo No. 9 o "Primer Acuerdo de Cuba", mediante el cual se creó el Comité Nacional de Participación (CNP), integrado por 81 personas de más de 30 organizaciones sociales, gremiales y distintos sectores de la sociedad, quienes construirían la propuesta metodológica para la participación de la sociedad civil en el proceso de paz con el ELN. Esta propuesta se presentaría a la Mesa de Diálogos y, tras

aprobarse, establecería el procedimiento para la participación de la sociedad civil en la mesa.

En igual sentido, se firmó el Acuerdo No. 10 o “Segundo Acuerdo de Cuba”, referido al establecimiento de un Cese al Fuego Bilateral y Temporal de Carácter Nacional (CFBNT), protocolizado por el Gobierno nacional a través del Decreto 1117 del 5 de julio de 2023 y prorrogado hasta el 3 de agosto del presente año, con el fin de cesar las afectaciones a las comunidades que se encuentran en medio de las confrontaciones armadas; facilitar la atención humanitaria en los territorios más afectados por dichas confrontaciones y las diversas dinámicas de violencias en estos; y facilitar la participación de las comunidades y la sociedad en general. Resulta importante aclarar que este protocolo cuenta con otros protocolos complementarios como el protocolo de acciones específicas, el del Mandato del MMV (metodología), el de veeduría social y el de pedagogía del CFBNT.

Entre el 14 de agosto y el 4 de septiembre de 2023 se desarrolló el cuarto ciclo de diálogos en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, del que se derivó: el segundo acuerdo de Caracas, relacionado con la determinación de zonas críticas para desarrollo de dinámicas humanitarias y transformaciones territoriales que fortalezcan a las comunidades, en el Bajo Calima, San Juan, Bajo Cauca, Nordeste Antioqueño y Sur de Bolívar; el marco político y conceptual para adelantar dinámicas humanitarias; y, el acuerdo parcial relativo al desarrollo de mecanismos concretos para atención de presos políticos y personas privadas de la libertad reconocidas como integrantes del ELN. Ahora bien, como se informó públicamente, al cierre del cuarto ciclo, durante las siguientes semanas las delegaciones del Gobierno Nacional, el ELN y funcionarios de la Consejería, desarrollarían tareas relativas al cese bilateral del fuego, pedagogía y participación social para la paz.

El quinto ciclo se desarrolló entre el 30 de noviembre al 17 diciembre de 2023 en los Estados Unidos Mexicanos y concluyó con los siguientes compromisos, según el Comunicado Conjunto No. 19 de las partes de la Mesa de Diálogos:

1. La reafirmación del puerto de llegada de este proceso de paz, acordado en el II Ciclo realizado en Ciudad de México en marzo de este año;
2. La suspensión de las retenciones con fines económicos, según el ELN, en el marco de la prolongación del Cese al fuego prevista para finales de enero del año entrante;
3. La creación de condiciones para la prórroga del Cese al fuego, el Mecanismo de Veeduría y Verificación (MMV) y medidas frente al accionar de fuerzas paramilitares y de distintos grupos armados;

4. La creación de condiciones económicas y financieras para la materialización del Acuerdo de México;
5. La reanudación del proceso de participación de la sociedad, la culminación de su fase de diseño en abril del año próximo y la creación de una red nacional de participación;
- y, 6. La conformación de ocho (8) zonas críticas, de acciones humanitarias y de una comisión de la Mesa para coordinar los planes de atención y transformaciones sociales de las zonas.

Así, finalmente el sexto ciclo de diálogos se adelantó en La Habana, Cuba, entre el 20 de enero al 5 de febrero de 2024 y concluyó con el protocolo de evaluación, prórroga o suspensión del cese al fuego; el acuerdo sobre la continuidad de la fase de diseño de la participación de la sociedad en la construcción de paz; prórroga del cese al fuego bilateral, nacional y temporal CFBTN; la inclusión de acciones en el protocolo de acciones específicas para el CFBTN; el acuerdo de creación del Fondo Multidonante para el proceso de paz; el acuerdo sobre comunicaciones de la mesa de diálogos para la paz; y, la suspensión unilateral de las retenciones de carácter económico, según la denominación acuñada por el ELN.

Posterior a ese último ciclo de diálogo, durante el periodo del 19 y el 25 de mayo del presente año, las partes se reunieron en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, y firmaron el Acuerdo No. 28 *"Acuerdo sobre el desarrollo del proceso de participación de la sociedad en la construcción de paz"*, que dio por cumplido y cerrado el primer punto de la Nueva Agenda de Diálogos para la Paz. Acuerdo que busca describir cómo se hará efectiva la participación de la sociedad colombiana en la construcción de paz derivada del proceso.

A pesar de todo el avance descrito, a lo largo de los diálogos se presentaron diversos acontecimientos que debilitaron el proceso de paz, que conllevaron al ELN a su decisión de abandonar la Instancia Nacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación al Cese al Fuego el 22 de noviembre de 2023; y a declarar públicamente el congelamiento de la Mesa de Diálogos el 19 de febrero de 2024. Ante la situación, el 26 de julio de 2024, la delegación del gobierno rechazó enérgicamente el pronunciamiento del ELN sobre presuntos incumplimientos por parte del gobierno e insistió en la necesidad de continuar con el diálogo. Consecuentemente, el 3 de agosto de 2024 se venció el cese al fuego con dicho grupo armado, debido al estancamiento de la Mesa y la falta de claridad de parte del ELN.

El 9 de agosto de 2024, el Presidente envió al ELN una carta con una propuesta confidencial en relación con el anuncio del congelamiento del diálogo, como un gesto de compromiso para seguir negociando y avanzar en el proceso. Sin

embargo, de forma inicial, el 13 de agosto de 2024, el ELN rechazó la propuesta, reanudó operaciones y reincidió con la práctica de voladura de oleoductos. El 17 de septiembre de 2024, el ELN perpetró un atentado contra un batallón en Puerto Jordán, Arauca. Ante estos hechos, que obstaculizan la posibilidad de alcanzar una paz negociada, el 18 de septiembre de 2024, la delegación del Gobierno Nacional emitió el siguiente comunicado:

Nuestra Delegación de Paz manifiesta su absoluto rechazo al ataque perpetrado por el ELN a la base militar de Puerto Jordán, Arauca.

Sentimos profundamente las víctimas fatales y los heridos de los miembros de la Fuerza Pública. Acompañamos el dolor de sus familiares ante este nuevo hecho de violencia que cobra la vida de jóvenes colombianos.

Durante estos meses el Gobierno ha hecho llegar al ELN múltiples propuestas. Hoy el proceso de diálogo queda suspendido. Su viabilidad está severamente lesionada, y su continuidad sólo puede ser recuperada con una manifestación inequívoca de voluntad de paz del ELN.

Bogotá D.C., 18 de septiembre de 2024.

A pesar de lo anterior, el 10 de octubre la Delegación del Gobierno realizó un nuevo comunicado a la opinión pública, en el que declara que

Durante los meses de crisis que ha tenido el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional – ELN, la Delegación de Paz del Gobierno Nacional ha insistido en el diálogo en la Mesa como instancia para resolver los problemas surgidos, buscar la prórroga del cese al fuego, cumplir con el compromiso firmado de dar continuidad a la participación de la sociedad en la construcción de la paz, e impulsar todos los puntos de la agenda contenida en el Acuerdo de México.

Al anunciar la suspensión de los diálogos, señalamos que se requería un gesto que demostrara la voluntad del ELN de avanzar en este proceso. Por esta razón, saludamos hoy la comunicación de su Delegación de Paz del pasado 9 de octubre. Aceptamos la invitación para llevar a cabo una reunión que nos permita abordar todos estos asuntos y retomar nuestro diálogo en busca de generar los hechos de paz que nos demanda la sociedad colombiana.

Nuestra Delegación agradece los intensos esfuerzos de la Iglesia Católica, el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, los países garantes y acompañantes del proceso, por sus buenos oficios y su permanente acompañamiento a la Mesa de Diálogos.

También valora y agradece cada una de las expresiones, declaraciones y gestiones realizadas por tantas organizaciones, plataformas, agrupaciones, lideresas y líderes de sociedad civil y los territorios para lograr que la Mesa de Paz reinicie sus labores.

Dando como resultado que se prevea en un tiempo corto el reinicio del proceso de diálogo y un avance adicional para la consecución de la paz.

12. *¿En qué estado se encuentra el desarrollo de los diálogos territoriales con el ELN? ¿Cuáles son las medidas y compromisos adoptados en cada uno de estos? ¿Qué acciones de seguimiento existen y quienes son las entidades encargadas de evaluar el cumplimiento?*

Con respecto a la primera parte de la pregunta, con el Ejército de Liberación Nacional ELN se suspendió el cese al fuego el 3 de agosto de 2024 y a raíz del atentado a la base militar de Puerto Jordán, Arauca, la Delegación del Gobierno Nacional decidió suspender los diálogos hasta que la agrupación demuestre verdadera voluntad de paz. En comunicado del 10 de octubre de 2024 la delegación expresó:

“ Durante los meses de crisis que ha tenido el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional – ELN, la Delegación de Paz del Gobierno Nacional ha insistido en el diálogo en la Mesa como instancia para resolver los problemas surgidos, buscar la prórroga del cese al fuego, cumplir con el compromiso firmado de dar continuidad a la participación de la sociedad en la construcción de la paz, e impulsar todos los puntos de la agenda contenida en el Acuerdo de México.

Al anunciar la suspensión de los diálogos, señalamos que se requería un gesto que demostrara la voluntad del ELN de avanzar en este proceso. Por esta razón, saludamos hoy la comunicación de su Delegación de Paz del pasado 9 de octubre. Aceptamos la invitación para llevar a cabo una reunión que nos permita abordar todos estos asuntos y retomar nuestro diálogo en busca de generar los hechos de paz que nos demanda la sociedad colombiana.

Nuestra Delegación agradece los intensos esfuerzos de la Iglesia Católica, el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, los países garantes y acompañantes del proceso, por sus buenos oficios y su permanente acompañamiento a la Mesa de Diálogos.

También valora y agradece cada una de las expresiones, declaraciones y gestiones realizadas por tantas organizaciones, plataformas, agrupaciones, lideresas y líderes de sociedad civil y los territorios para lograr que la Mesa de Paz reinicie sus labores”.

Por otro lado, con relación a las medidas y compromisos adoptados podemos informar lo siguiente:

En los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional ELN, se pactó el cese al fuego -consiste en proceso técnico, serio, ordenado y verificable por la ONU y otras instancias en el cual se terminan las acciones contra la población civil, la Fuerza Pública y la infraestructura del Estado-. Esta suspensión inició el 3 de agosto de 2023 y en este momento no se encuentra vigente. Sin embargo, durante el cese al fuego se observó disminución de heridos y muertos por el conflicto armado (en su mayoría de la Fuerza Pública), y afectaciones a la población civil.

Los decretos relacionados con el Cese al fuego son los siguientes Decretos:

1. Decreto 2657 de 2022: si quiere consultar la norma vaya al siguiente link: [Decreto 2657 de 2022 - Gestor Normativo - Función Pública \(funcionpublica.gov.co\)](https://funcionpublica.gov.co/Decreto_2657_de_2022_-_Gestor_Normativo_-_Funci%C3%B3n_P%C3%BAblica)
2. Decreto 4 de 2023: si quiere consultar la norma vaya al siguiente link: [Decreto 4 de 2023 \(suin-juriscol.gov.co\)](https://suin-juriscol.gov.co/Decreto_4_de_2023)
3. Decreto 1117 de 2023: si quiere consultar la norma vaya al siguiente link: [Decreto 1117 de 2023 - Gestor Normativo - Función Pública \(funcionpublica.gov.co\)](https://funcionpublica.gov.co/Decreto_1117_de_2023_-_Gestor_Normativo_-_Funci%C3%B3n_P%C3%BAblica)
4. Decreto 104 de 2024: si quiere consultar la norma vaya al siguiente link: [Decreto 104 de 2024 \(suin-juriscol.gov.co\)](https://suin-juriscol.gov.co/Decreto_104_de_2024)

Como se precisó en la respuesta anterior, el proceso de paz con ELN ha implicado el desarrollo de seis ciclos de negociación con acuerdos claves para la agenda de paz. Lo que supone un proceso consistente que se ha tomado en serio los derechos de las víctimas y la transformación territorial. Sin embargo, ante problemas de orden público, en el mes de julio de 2024, la delegación del Gobierno nacional en la mesa de Diálogos de paz con el ELN, emitió el siguiente comunicado:

"Con perseverancia e inmensa paciencia hemos solicitado en repetidas oportunidades a la Delegación de Diálogos del Ejército de Liberación Nacional –ELN, sentarnos a resolver de manera bilateral y constructiva los problemas del proceso de paz. Esto, porque, por encima de diferencias y discusiones, nuestra prioridad es la protección de las comunidades y avanzar sin dilación en el camino de la paz.

Lamentablemente, una y otra vez, ante esa voluntad manifiesta, las respuestas han sido las mentiras y la arrogante posición de la dirección del ELN y de su comandante Antonio García. No es cierto que el Acuerdo 28 no haya sido firmado por la totalidad de la Delegación del Gobierno Nacional, o sostener que no existe una resolución presidencial en la que se reconoce de manera explícita el carácter político del ELN y su condición de organización armada rebelde.

Pero más allá de hechos puntuales y reclamos sobre supuestos incumplimientos, la verdad es que, luego de años de diálogo, el ELN aún no ha respondido la pregunta de si está dispuesto o no a transitar a la paz; o si por el contrario concibe este proceso como una oportunidad para su fortalecimiento militar; y si está dispuesto o no a construir, como dispone el Acuerdo 28, el camino de las transformaciones sociales, que este gobierno ha emprendido desde hace dos años, a pesar de toda clase de cuestionamientos a los que se suman los del propio ELN.

La dirección del ELN se pregunta si vale la pena seguir adelante construyendo acuerdos con este gobierno. Es su decisión. Pero llegó el momento en que el ELN le aclare a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional si tiene o no un inequívoco propósito de llegar a la paz; si quiere o no descongelar los trabajos de la mesa de diálogos; si quiere o no renovar el cese al fuego con su Mecanismo de Monitoreo y Verificación, en función de la construcción de paz con transformaciones.

El Gobierno Nacional ha sido consecuente con la búsqueda de los acuerdos y su implementación como camino hacia la paz. Pero para construir este camino se requieren dos. Seguimos a la espera de que el ELN decida hacer lo propio.

Bogotá D.C., 26 de julio de 2024”.

El 17 de agosto de 2024, la Jefatura de la delegación del Gobierno Nacional en la Mesa de Diálogos para la Paz con el ELN, expidió el siguiente comunicado:

“La Jefatura de la Delegación del Gobierno Nacional en la Mesa de Diálogos para la Paz con el Ejército de Liberación Nacional –ELN manifiesta:

Que la reactivación de bombardeos como respuesta al inaceptable paro armado del ELN en el Chocó no contribuye a la protección de la población civil ni a la paz.
Reitera la importancia de la continuidad del Cese al Fuego Bilateral Nacional y Temporal –CFBNT.

Insiste en las vías del diálogo y la solución negociada. Bogotá D.C., 17 de

agosto

de

2024

Vera Grabe

Iván Cepeda Castro

Jefatura de la Delegación del Gobierno Nacional"

A raíz del atentado a la base militar de Puerto Jordán. Arauca, la Delegación del Gobierno Nacional decidió suspender los diálogos hasta que la agrupación demuestre verdadera voluntad de paz:

"Nuestra Delegación de Paz manifiesta su absoluto rechazo al ataque perpetrado por el ELN a la base militar de Puerto Jordán, Arauca.

Sentimos profundamente las víctimas fatales y los heridos de los miembros de la Fuerza Pública. Acompañamos el dolor de sus familiares ante este nuevo hecho de violencia que cobra la vida de jóvenes colombianos.

Durante estos meses el Gobierno ha hecho llegar al ELN múltiples propuestas. Hoy el proceso de diálogos queda suspendido. Su viabilidad está severamente lesionada, y su continuidad sólo puede ser recuperada con una manifestación inequívoca de voluntad de paz del ELN. Delegación del Gobierno Nacional en la Mesa de Diálogos de Paz con el Ejército de Liberación Nacional – ELN Bogotá, D.C, 18 de septiembre de 2024 "

Para mayor información y la consulta de acuerdos y protocolos puede ingresar el link [Inicio \(altocomisionadoparalapaz.gov.co\)](https://altocomisionadoparalapaz.gov.co)

Por último, actualmente no hay acciones de seguimiento.

13. ¿Cuáles son las potenciales soluciones e implicaciones dentro de la agenda planteada producto del "congelamiento" del proceso de paz con el 2?

La Delegación de Paz del Gobierno Nacional ha insistido en el diálogo para resolver los impases en la Mesa. Algunas medidas son fundamentales en este esfuerzo, en particular buscar la prórroga del cese al fuego, cumplir con el compromiso firmado de dar continuidad a la participación de la sociedad en la construcción de la paz, e impulsar todos los puntos de la agenda contenida en el Acuerdo de México. A la vez, en la medida en que garantizar los derechos de la ciudadanía son una labor fundamental para el gobierno, se han fortalecido las acciones a través del Ministerio de Defensa Nacional.

A raíz de la comunicación de Delegación de Paz del Ejército de Liberación Nacional ELN del pasado 9 de octubre, la delegación que representa al Gobierno

Nacional aceptó la invitación para llevar a cabo una reunión que permita abordar todos estos asuntos y retomar los diálogos en busca de generar los hechos de paz que nos demanda la sociedad colombiana.

La política de paz total se sustenta en un fundamento ético y jurídico que consiste en que la solución dialogada al conflicto es superior que la solución militar. Su primacía deviene de minimizar el dolor del conflicto y sus impactos en la sociedad, por lo que insistiremos en esta posición si existe voluntad en la contraparte. Aunque los esfuerzos de paz sean difíciles, y pueda parecer en ciertos casos quimeras, solo la persistencia en los procesos permite que se encuentra una salida al conflicto.

14. Teniendo en cuenta que su carácter funcional esta la consolidación de información para generación de diagnósticos y escenarios prospectivos en torno al proceso con el ELN ¿Cuál es la razón del incremento de acciones de este grupo armado en el último año? ¿Se debe a un fortalecimiento territorial? ¿Qué enfoque de acción plantea esta entidad para evitar el fortalecimiento y aumento de control territorial?

De manera respetuosa , se indica que en virtud del Decreto 2647 de 2022 en su artículo 23, la Consejería Comisionada de Paz no es competente para responder este requerimiento.

En este sentido, dando cumplimiento al Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, modificado y adicionado por la Ley 1755 del 2015, se dio traslado del requerimiento al Ministerio de Defensa para los trámites pertinentes, mediante OFI24-00211453.

15. Teniendo en cuenta las declaraciones del Presidente en torno a la posibilidad de abrir las negociaciones con el grupo armado "Clan del Golfo" desde esta entidad, ¿qué acciones se han emprendido?, ¿el acercamiento con este grupo criminal se está evaluando en torno al sometimiento al ordenamiento jurídico vigente o se tiene por objetivo presentar un proyecto de ley que regule el sometimiento de esta?

Con respecto del Clan del Golfo o las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia –AGC, el 24 de febrero este Grupo Armado publicó un video en el que se autodenominaba como Ejército Gaitanista de Colombia en reemplazo del nombre Autodefensas Gaitanistas de Colombia con el que se reconocía desde sus orígenes. Adicionalmente, algunas instituciones estatales lo identifican como Clan del Golfo y otras continúan empleando la denominación AGC.

En el año 2023 se desarrollaron acercamientos exploratorios con dicha estructura armada, en los cuales se adelantó la verificación de su voluntad real de reincorporación y reintegración a la sociedad civil.

El 8 de julio de 2024, ' ' el Presidente de la República autorizó, mediante Resolución No. 257 del 8 de julio de 2024, la instalación del Espacio de Conversación Socio jurídico con dicha estructura. El 22 de julio de 2024, mediante Resolución 279 de 2024, se reconocieron a miembros representantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC, para participar en el Espacio de Conversación Sociojurídico con el Gobierno nacional. La MAPP/OEA fue convocada a acompañar el proceso y aceptó su participación y puso a disposición de las partes todas sus capacidades y experiencia.

El 1 de agosto de 2024, mediante Resolución No. 300, el Presidente de la República de Colombia, autorizó la instalación del Espacio de Conversación Sociojurídico con este grupo.

Por otro lado, en desarrollo de la política pública de paz todos los acercamientos y espacios de conversación socio-jurídica adelantados por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz tienen como propósito principal el sometimiento de las estructuras al ordenamiento jurídico vigente. La presentación de una iniciativa legislativa al respecto no está contemplada en este momento por parte de esta oficina.

16. ¿Cómo avanza la implementación de la política de paz total en los departamentos de Cesar y Valle del Cauca?

A. Cesar

De acuerdo con la información suministrada por el Grupo de Territorial de esta Oficina, se han promovido las siguientes acciones que hacen parte fundamental de la implementación de la política de paz en el departamento:

Se han adelantado reuniones con funcionarios de la Defensoría del Pueblo, Regional Cesar, Unidad de Restitución de Tierras, ARN, Gobernación del Cesar, Alcaldías Municipales y líderes sociales y políticos para analizar el contexto de violencia y las nuevas tendencias del conflicto armado interno en el departamento del Cesar.

También se han adelantado reuniones con la Asesora de Paz del Departamento del Cesar, Juana Pacheco, para iniciar la convocatoria de las organizaciones de la sociedad civil para la reactivación del Consejo Departamental de Paz, Convivencia y Derechos Humanos y los Consejos Municipales de Paz.

En región se adelantan acciones pedagógicas con las organizaciones sociales, para que se entiendan los distintos escenarios de la política de Paz Total, *promoviendo la participación de la sociedad civil*.

Finalmente, se van a desarrollar la priorización de municipios de acuerdo con la presencia/incidencia de actores armados (Valledupar, La Paz, San Diego, Pueblo Bello, Bosconia, El Copey, Astrea, Chimichagua, Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Curumaní, Pailitas, Pelaya, La Gloria, Aguachica, Gamarra, San Martín, San Alberto, Rio de Oro, González). De igual manera, se han convocado a líderes sociales a participar en conversaciones informadas sobre Paz Total.

B. Valle del Cauca

En el departamento del Valle del Cauca cuenta con un equipo territorial que está encargados de la promoción e implementación de la política de Paz Total promovida por el Presidente de la República y prescrita en la Ley de Paz Total. Este equipo tiene la responsabilidad de atender los requerimientos de la ciudadanía relacionados con el conflicto armado en el departamento y, así mismo, coordinar con las distintas agencias del Estado las respuestas y las acciones demandadas por la ciudadanía que resultasen afectadas por la guerra y las actividades ilegales adelantadas por los grupos irregulares en el territorio.

El Presidente de la República designó a 5 personas que conforman la Delegación del Gobierno que atienden los diálogos socio jurídicos en Buenaventura logrando el mantenimiento de un atregua pactada entre "Shottas" y "Espartanos" que ha implicado una reducción importante del número de homicidios en el Distrito Especial de Buenaventura. En el momento, la Delegación del Gobierno está auspiciando una discusión con distintos actores sociales, políticos y comunitarios sobre su agenda de trabajo que aspira ser adoptada por el Espacio de Conversación Socio Jurídico, esto es, que se logre la adopción de esta agenda por parte los grupos armados ilegales, las fuerzas vivas de la sociedad de Buenaventura y las instituciones del Estado lideradas por la Delegación Nacional del Gobierno que lidera los diálogos de paz en este Distrito Especial, a partir, de "Un Gran Acuerdo Por La Paz De Buenaventura"

La agenda de paz de la referencia tiene como aspectos centrales la promoción de una cultura de paz y no violencia. 2. La defensa de la vida en la perspectiva de mantener la tendencia hacia el logro de reducción permanente de homicidios. 3. La no utilización e instrumentación de niños y niñas en el conflicto armado en Buenaventura. 4. El levantamiento del confinamiento del que padecen las comunidades por las llamadas fronteras invisibles. 5. La abolición de la extorsión que castiga e irrita a las familias, comerciantes y ciudadanos en general en este Distrito. 6. La búsqueda de personas desaparecidas en territorios urbanos y marítimos de este Distrito Especial. 7. la promoción de un proceso de

transformación territorial a partir de la intervención institucional, la participación de las comunidades y la cooperación internacional.

De otra parte, se viene actuando específicamente en los municipios de Jamundí y Florida. En el primer caso, se está interviniendo en el corregimiento de Robles, asediado por la acción del frente Jaime Martínez, grupo armado de las disidencias de las FARC. En este corregimiento se tiene el propósito de mejorar y refaccionar la locación de los colegios públicos de los niños y niñas de primaria y la institución en donde estudian los y las jóvenes de bachillerato. Los niños y niñas de Robles se concentraron en una sola institución educativa, porque la otra existente está ubicada cerca del cuartel de la policía. Así mismo, se adelanta el proceso de contribución al fortalecimiento del tejido social y comunitario. Finalmente, en el municipio de Florida, al sur del Valle De Cauca, adelantamos una política de concertación y construcción de acuerdos frente a la grave tensión existente entre indígenas y campesinos por el diferendo existente relacionado con la tenencia, posesión y dominio de predios rurales en este municipio.

17. *¿Qué acciones adelanta para disminuir la ocurrencia de desplazamientos masivos entre los departamentos de Guajira y Cesar producto de enfrentamientos armados?*

De manera respetuosa, se indica que en virtud del Decreto 2647 de 2022 en su artículo 23, la Consejería Comisionada de Paz no es competente para responder este requerimiento.

En este sentido, dando cumplimiento al Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, modificado y adicionado por la Ley 1755 del 2015, se dio traslado del requerimiento al Ministerio de Defensa para los trámites pertinentes, mediante OFI24-00211453.

18. *¿Cuántos y cuáles grupos armados hacen presencia en los departamentos de Cesar y Valle del Cauca? Indicando: zonas de ubicación, número de hombres y con quienes se adelantan negociaciones de paz.*

De manera respetuosa, se indica que, en virtud del Decreto 2647 de 2022 en su artículo 23, la Consejería Comisionada de Paz no es competente para responder este requerimiento.

En este sentido, dando cumplimiento al Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, modificado y adicionado por la Ley 1755 del 2015, se dio traslado del requerimiento al Ministerio de Defensa para los trámites pertinentes.

19. Indicar el número de víctimas y eventos asociados al conflicto armado en los departamentos del Cesar y Valle del Cauca, registrados en el año 2022, 2023 y lo corrido de 2024, desagregando por municipios.

De manera respetuosa, se indica que en virtud del Decreto 2647 de 2022 en su artículo 23, la Consejería Comisionada de Paz no es competente para responder este requerimiento.

En este sentido, dando cumplimiento al Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, modificado y adicionado por la Ley 1755 del 2015, se dio traslado del requerimiento al Ministerio de Defensa para los trámites pertinentes.

20. Indicar las estadísticas sobre desplazamiento forzado, reclutamiento de menores y presencia de cultivos de uso ilícitos en los departamentos de Cesar y Valle del Cauca desde el inicio de este gobierno.

Analizada esta petición encontramos que en virtud del Decreto 2647 de 2022 en su artículo 23, la Consejería Comisionada de Paz no es competente para atender y pronunciarse en estos aspectos.

Dando cumplimiento al Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, modificado y adicionado por la Ley 1755 del 2015, se da traslado del requerimiento en archivo anexo al Ministerio de Defensa Nacional, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Agencia de Renovación del Territorio; Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario y a la Dirección de sustitución de Cultivos ilícitos, para los trámites pertinentes.

Lo anterior, mediante los oficios OFI24-00211548, OFI24-00211552, OFI24-00211552, MEM24-00037161, OFI24-00211559.

Proposición 25:

- 1. Explique las circunstancias de tiempo, modo y lugar donde se les informó sobre el plan de asesinato de LUIS ZAPATEIRO, MARÍA FERNANDA CABAL y FRANCISCO BARBOSA a manos del grupo criminal y terrorista ELN.**
- 2. Expliqué el procedimiento seguido para la neutralización del plan criminal del ELN y procedimiento seguido para la protección de la vida e integridad de los afectados y sus familias.**

- 3. Responda de forma pormenorizada la razón para negar públicamente que el grupo criminal ELN era el responsable del plan de homicidio.**
- 4. ¿Qué medidas se tomaron al interior de la mesa de negociación con el ELN al conocer el plan criminal que pretendía asesinar a los funcionarios y ex funcionarios?**

Mediante la Resolución No. 264 del 15 de noviembre de 2023, el señor Presidente de la República ordenó reanudar la Mesa de Diálogos con la organización insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN) y designó a los representantes del Gobierno Nacional, con carácter de miembros de equipo negociador.

Del 2 de mayo al 9 de junio, se desarrolló el tercer ciclo de la Mesa de Diálogos, del cual se firmó el Acuerdo No. 10 o Segundo Acuerdo de Cuba, referido al establecimiento de un Cese al Fuego Bilateral y Temporal de carácter Nacional (CFBTN), protocolizado mediante el Decreto 1117 del 5 de julio de 2023 y entró en vigencia el 3 de agosto del presente año. El CFBTN está motivado por la necesidad de cesar las afectaciones de las comunidades que se encuentran en medio de las confrontaciones armadas, facilitar la atención humanitaria en los territorios más afectados por dichas confrontaciones armadas y asegurar la participación de las comunidades y la sociedad en general en el proceso de paz.

En concreto, según el Decreto 1117 del 5 de julio de 2023, se establecen como prohibidas las siguientes acciones:

*"(...) A partir de las 00:00 horas del 3 de agosto de 2023 está prohibido realizar, además de acciones ofensivas, actos contrarios a lo establecido en el Protocolo de Acciones Específicas acordado entre las partes en la Mesa de Diálogos de Paz, entre los cuales se encuentran: **(i) entrar en contacto armado y, si esto ocurre, no romper dicho contacto; (ii) obstaculizar las labores del MMV; (iii) omitir información al MMV; (iv) impedir la atención de enfermos o heridos de la población civil y de las partes; (v) incurrir en perfidia; y (vi) incurrir en actos prohibidos en el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, como el homicidio, la toma de rehenes, la violación, el desplazamiento forzado o el reclutamiento de menores, etc.**"*

En ese contexto, entre el 3 de agosto de 2023 al 3 de agosto de 2024 se tuvo en funcionamiento el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) del CFBTN, en el que participaban delegados del Gobierno Nacional (Fuerza Pública, Oficina del Alto Comisionado para la Paz y delegación de gobierno en la Mesa de Diálogos); delegados del ELN; y, como acompañantes y testigos, delegados de

la Conferencia Episcopal de Colombia y de la Misión de Verificación en Colombia de la Organización de las Naciones Unidas. El MMV tiene instancias nacional, regional y local, ubicadas en distintas regiones del país, que contribuyan en la tarea de observación y monitoreo de posibles incidentes.

De igual manera, la veeduría social es un componente que hace parte de la fase de observación y monitoreo, integrado por personas de la sociedad civil que desean participar en esta actividad.

El MMV, como instancia técnica, emite informes y recomendaciones relativos a posibles *incidentes*, con el fin de que las partes de la Mesa de Diálogos determinen si frente a ello se acredita un posible incumplimiento o no del CFBTN. Asimismo, actúa como instancia de prevención, que permita garantizar el cumplimiento del CFBTN y la no ocurrencia de potenciales incidentes.

Durante los trabajos preparatorios y alistamiento para implementación del CFBTN, realizados entre el 10 de junio al 2 de agosto del año 2023, la entonces Oficina del Alto Comisionado para la Paz no recibió información alguna de organismos de inteligencia, de la Fuerza Pública o de la Fiscalía General de la Nación, alusiva a las presuntas afectaciones a la vida o integridad del señor General (R) Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, la senadora María Fernanda Cabal Molina, el entonces Fiscal General de la Nación Francisco Roberto Barbosa Delgado, y de sus familias.

A su turno, entre el 3 al 9 de agosto de 2023, la delegación del Gobierno en el MMV tampoco no recibió información alusiva a un plan para atentar contra la vida de las personas señaladas.

La única información que se tiene a ese respecto es la emitida públicamente por el entonces Fiscal General de la Nación, el pasado 8 de agosto de 2023, cuando dio a conocer a opinión pública el avance de un presunto plan para atentar contra la vida del referido general, pero la Oficina del Consejero Comisionado de Paz desconoce las fuentes que sustentaron sus afirmaciones. Sin perjuicio de lo anterior, la información fue allegada al MMV.

Hasta la presente fecha, el MMV, a través de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas como su vocero, no se ha pronunciado frente a los hechos aludidos.

Por último, vale destacar que, desde el 3 de agosto de 2023 a la fecha, la Oficina del Consejero Comisionado de Paz o el MMV no han conocido información relativa a posibles afectaciones a la vida o integridad de los señores General (R)

Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, María Fernanda Cabal y Francisco Roberto Barbosa Delgado, por parte del ELN.

Igualmente, teniendo en cuenta que la información fuente de este reporte debe pasar por corroboración con fuentes de inteligencia de la Fuerza Pública, se remitirá por competencia esta pregunta a la cartera del Ministerio de Defensa.

5. Protocolo que se está siguiendo para informar a posibles víctimas cuando se sabe de un plan a manos de un grupo criminal que pueda afectar su vida e integridad.

De manera respetuosa, se indica que en virtud del Decreto 2647 de 2022 en su artículo 23, la Consejería Comisionada de Paz no es competente para responder este requerimiento.

En este sentido, dando cumplimiento al Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, modificado y adicionado por la Ley 1755 del 2015, se dio traslado del requerimiento al Ministerio de Defensa para los trámites pertinentes.

Proposición 33:

1. ¿Cuál es el diagnóstico de orden público en el Departamento de Arauca que maneja el Alto Comisionado para la Paz?

De manera respetuosa, se indica que en virtud del Decreto 2647 de 2022 en su artículo 23, la Consejería Comisionada de Paz no es competente para responder este requerimiento.

En este sentido, dando cumplimiento al Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, modificado y adicionado por la Ley 1755 del 2015, se dio traslado del requerimiento a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio de Defensa para los trámites pertinentes, mediante OFI24-00211495 y OFI24-00211496.

2. ¿Cuáles son las acciones concretas y eficaces que están implementando en conjunto la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y las carteras Ministeriales para asegurar la libertad de los secuestrados en el Departamento de Arauca?

De manera respetuosa, se indica que en virtud del Decreto 2647 de 2022 en su artículo 23, la Consejería Comisionada de Paz no es competente para responder este requerimiento.

En este sentido, dando cumplimiento al Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, modificado y adicionado por la Ley 1755 del 2015, se dio traslado del requerimiento al Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación para los trámites pertinentes, mediante OFI24-00211495 y OFI24-00211496.

3. ¿Qué compromisos y acciones concretas se han llevado a las mesas de diálogo con los grupos armados al margen de la ley para lograr la liberación de las personas secuestradas y retenidas en el Departamento de Arauca?

Con respecto a la Mesa de Diálogos de Paz (MDP) que adelanta el Gobierno Nacional y el EMBF (Estado Mayor de los Bloques y Frentes que continúan en la Mesa de Diálogo), a partir de la reunión extraordinaria de la Mesa de Diálogos de los días 04 y 05 de abril del 2024, dejó de participar en la MDP el Comando Conjunto de Oriente², razón por la cual desde esta fecha la MDP no ha realizado actividades relacionadas con este departamento.

Sin embargo, entre la Instalación de la MDP, el 16 de octubre del 2024, y cuando el Comando Conjunto de Oriente dejó de participar en la MDP, el 05 de abril del 2024, la MDP desarrolló cuatro actividades específicas en el departamento de Arauca:

- i. El 18 de enero del 2024, la instalación de la Instancia Regional del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV) del cese al fuego en la ciudad de Arauca. Contó con la participación de la Iglesia Católica, representada por la Conferencia Episcopal de Colombia, y el Consejo Mundial de Iglesias.
- ii. El 16 y 17 de febrero del 2024, dos jornadas de diálogo social y humanitario de la MDP en la ciudad de Arauca, las cuales contó con la participación de autoridades civiles, entidades públicas y organizaciones de la población civil.
- iii. El 26 y 27 de febrero del 2024, visita de verificación en terreno del MVMV en los municipios de Tame y Puerto Rondón, esta visita contó con la participación de autoridades civiles, población civil y fuerza pública, y se relacionó con posibles violaciones a las Reglas y Compromisos del Cese al Fuego y al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en estos municipios.
- iv. A estas acciones, se sumaron otras actividades de prevención y protección de posibles violaciones a las Reglas y Compromisos del Cese al Fuego y al Derecho Internacional Humanitario (DIH). En estas, se incluyeron liberaciones de población civil, liberaciones de miembros de la fuerza pública, prevención de confrontaciones armadas con la fuerza pública, entre otros.

Finalmente, de manera respetuosa, se indica que en virtud del Decreto 2647 de 2022 en su artículo 23, la Consejería Comisionada de Paz no es competente para responder este requerimiento en su totalidad.

En este sentido, dando cumplimiento al Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, modificado y adicionado por la Ley 1755 del 2015, se dio traslado del requerimiento al Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación para los trámites pertinentes, mediante OFI24-00211495 y OFI24-00211496.

4. ¿Cuáles son las cifras de secuestro, asesinatos, y acciones bélicas de los últimos 5 años, en el Departamento de Arauca, que maneja el Alto Comisionado para la Paz? Desagregar por tipo de acción, ubicación, fecha de la acción y autor.

De manera respetuosa, se indica que en virtud del Decreto 2647 de 2022 en su artículo 23, la Consejería Comisionada de Paz no es competente para responder este requerimiento.

En este sentido, dando cumplimiento al Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, modificado y adicionado por la Ley 1755 del 2015, se dio traslado del requerimiento a la Fiscalía General de la Nación; Ministerio de Justicia y del Derecho; Ministerio de Defensa Nacional; Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario; Defensoría del Pueblo; Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas; y Procuraduría General de la Nación. Esto mediante los oficios: OFI24-00211719, OFI24-00211730, OFI24-00211737, MEM24-00037195, OFI24-00211759, OFI24-00211764, OFI24-00211785.

5. ¿Qué gestiones se vienen realizando con entidades del estado, organismos internacionales, organismos de derechos humanos y otros, en el Departamento de Arauca, para la liberación de las personas en cautiverio?

De manera respetuosa, se indica que en virtud del Decreto 2647 de 2022 en su artículo 23, la Consejería Comisionada de Paz no es competente para responder este requerimiento.

En este sentido, dando cumplimiento al Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, modificado y adicionado por la Ley 1755 del 2015, se dio traslado del requerimiento a la Fiscalía General de la Nación; Ministerio de Justicia y del Derecho; Ministerio de Defensa Nacional; Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario; Defensoría del Pueblo; Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas; y Procuraduría General de la Nación. Esto mediante los oficios: OFI24-00211719, OFI24-00211730, OFI24-00211737, MEM24-00037195, OFI24-00211759, OFI24-00211764, OFI24-00211785.

6. ¿Cuáles son los mecanismos de apoyo que el gobierno nacional mediante la Oficina del Alto Comisionado para la Paz está manejando para atender las situaciones de desplazamiento masivo forzado, confinamiento y riesgo de desplazamiento en el Departamento de Arauca?

De manera respetuosa, se indica que en virtud del Decreto 2647 de 2022 en su artículo 23, la Consejería Comisionada de Paz no es competente para responder este requerimiento.

En este sentido, dando cumplimiento al Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, modificado y adicionado por la Ley 1755 del 2015, se dio traslado del requerimiento a la Fiscalía General de la Nación; Ministerio de Justicia y del Derecho; Ministerio de Defensa Nacional; Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario; Defensoría del Pueblo; Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas; y Procuraduría General de la Nación. Esto mediante los oficios: OFI24-00211719, OFI24-00211730, OFI24-00211737, MEM24-00037195, OFI24-00211759, OFI24-00211764, OFI24-00211785.

7. Teniendo en cuenta que la población desplazada mayoritariamente pertenece a municipios de categorías 5 y 6, y que Arauca cuenta con 6 de sus municipios en categoría 6, ¿qué estrategias se están llevando a cabo desde la Comisión de Paz para garantizar que estos municipios puedan responder a las condiciones técnicas y financieras para la atención y el retorno de estas personas?

De manera respetuosa, se indica que en virtud del Decreto 2647 de 2022 en su artículo 23, la Consejería Comisionada de Paz no es competente para responder este requerimiento.

En este sentido, dando cumplimiento al Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, modificado y adicionado por la Ley 1755 del 2015, se dio traslado del requerimiento a la Unidad para las Víctimas para los trámites pertinentes, mediante OFI24-00211123.

8. ¿Cuál es el estado actual de las negociaciones de paz con el ELN y el EMC en lo que refiere a el Departamento de Arauca?

En lo relacionado a su solicitud, le informamos que, con el Ejército de Liberación Nacional-ELN, se suspendió el cese al fuego el 3 de agosto de 2024 a raíz del

atentado a la base militar de Puerto Jordán, Arauca. La Delegación del Gobierno Nacional, ante tal situación, decidió suspender los diálogos hasta que el grupo en cuestión demuestre verdadera voluntad de paz. Sobre esto vea la respuesta a la pregunta 12 de la proposición 6 que se encuentra en este documento.

9. ¿Qué acciones concretas han llevado a la mesa de diálogo con los grupos al margen de la ley para dejar de lado a los civiles en el conflicto en el Departamento de Arauca?

Los bloques y frentes del autodenominado Estado Mayor Central de las FARC - EP, que no continuaron en la Mesa de Diálogos de Paz con el Gobierno nacional, se encuentran los que actúan en Tame y Puerto Rondón, Departamento de Arauca.

Dentro de los acuerdos con la Mesa de Diálogos con el Estado Mayor Bloques y Frentes EMBF, los siguientes puntos cobijan el departamento de Arauca con relación a:

1. Respeto y la protección civil con justicia social.
2. Acatar las normas del Derecho Internacional Humanitario en especial el protocolo II adicional a LOS CONVENIOS DE Ginebra de 1949.
3. No generar desplazamiento forzado ni confinamiento.
4. Respetar y Promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
5. No realizar ataques y agresiones que pongan en riesgo y vulneren la integridad física, cultural y territorial de los pueblos étnicos, comunidades campesinas, demás grupos de especial protección y en general la población civil.
6. No obstaculizar misiones médicas y humanitarias o la atención de enfermos graves y heridos, así como las labores misionales de las autoridades civiles.
7. Evitar la afectación humanitaria de la población.
8. Emplear un lenguaje respetuoso no estigmatizante y sin estímulo a la estigmatización o a señalamientos.
9. Respetar la vida en todas sus formas, la naturaleza en todos sus ámbitos.
10. No afectar los derechos y libertades de la población civil.
11. No ejecutar actos de violencia o discriminación, incluidos aquellos por razones étnicas, de género, religiosas o políticas.

A su vez, en el Acuerdo V, se acordó:

1. Fortalecer la participación directa.
2. Reconocer y acompañar a los pueblos, comunidades y organizaciones en sus esfuerzos autónomos para la protección ambiental de la biodiversidad y el cuidado de sus economías propias.

3. Avanzar en la elaboración de la agenda definitiva, asegurando la participación real y efectiva de las comunidades.
4. Invitar a la sociedad al proceso de construcción y desarrollo de la agenda teniendo los lineamientos base para la elaboración de la agenda de diálogos y construcción de paz firmado el 16 de octubre de 2023.

En el mismo Acuerdo, respecto de la transformación territorial se contempla lo siguiente:

“(...) las partes y comunidades generarán condiciones para la ejecución de acuerdos parciales de implementación inmediata en las áreas donde hace presencia el estado Mayor Central de las FARC-EP, priorizando los Departamentos de Cauca, Caquetá, Arauca, Putumayo, Guaviare y Norte de Santander, para adelantar transformaciones territoriales estructurales, con planes de desarrollo sostenible integral orientados a mejorar las condiciones de vida de la población en los territorios. Los contenidos de los acuerdos serán construidos con las comunidades. Basados en las experiencias y diálogos sociales, la MDP elaborará un Acuerdo Especial sobre transformaciones territoriales en la respectiva construcción de paz con justicia social y ambiental, teniendo en cuenta, entre otros, sus protocolos y acuerdos (...)”.

El 17 de enero de 2024, se instaló el Mecanismo de Verificación en Arauca, esta instancia regional verificará el cumplimiento de los compromisos del cese al fuego bilateral en el departamento de Arauca.

En el avance de los diálogos hubo una división al interior de Grupo Armado organizado al Margen de la ley y el Estado Mayor de los bloques Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte, Comandante Jorge Suarez Briceño y Frente Raúl Reyes FARC- EP continuaron en la Mesa de Diálogos de Paz. Con ellos, se continuó con el cese al fuego bilateral a partir del día 16 de julio de 2024 hasta el 15 de octubre de 2024, el cual se oficializó por Decreto 888 del 15 de julio de 2024 8.

10. ¿Qué representantes de la ciudadanía araucana se encuentran en las mesas de diálogo en el marco de las negociaciones de paz?

Actualmente, no hay participación directa de representantes de la población civil del departamento de Arauca en la Mesa de Diálogos de Paz (MDP). Esto se debe a que, a partir de la reunión extraordinaria de la Mesa de Diálogos de los días 4 y 5 de abril de 2024, el Comando Conjunto de Oriente dejó de participar en la MDP, lo que ha limitado las actividades relacionadas con Arauca.

No obstante, la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz mantiene su interés en territorializar la paz en todo el país, incluido el departamento de

Arauca. Continuamos buscando formas de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, garantizando que las voces de la población civil sean escuchadas y puedan contribuir a la construcción de una paz duradera.

Dada la importancia de la participación ciudadana, la Mesa de diálogos de paz con el Estado Mayor de los Bloques suscribió el acuerdo para la participación ciudadana, social y de los pueblos, que tiene objetivo establecer caminos de participación en la Mesa de Diálogos a un nivel territorial. En esa medida, es un espacio necesario para el desarrollo y participación ciudadana que impacta en el departamento de Arauca.

11. ¿Qué estrategias está tomando el Alto Comisionado para la paz, para proteger la vida de la población civil en el Departamento de Arauca?

La Oficina del Consejero Comisionado para la Paz (OCCP) tiene un firme compromiso con la protección de la vida de la población civil, enfocándose en la seguridad humana y en la territorialización de la paz en todo el país, incluido el departamento de Arauca.

Para ello, contamos con el mecanismo de monitoreo conocido como Enlace de la OCCP, a través del cual registramos todas las denuncias de la ciudadanía y las canalizamos hacia las mesas de diálogo y de conversaciones pertinentes. Aunque la seguridad física en la región está bajo la competencia directa del Ministerio de Defensa Nacional, la OCCP trabaja para que estas preocupaciones se atiendan en los espacios de negociación, contribuyendo a proteger los derechos y a construir una paz estable y duradera en los territorios.

12. ¿Qué medidas de seguridad implementó el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos y la transparencia del pasado proceso electoral en un departamento tan golpeado por la violencia como el de Arauca?

De manera respetuosa, se indica que en virtud del Decreto 2647 de 2022 en su artículo 23, la Consejería Comisionada de Paz no es competente para responder este requerimiento.

En este sentido, dando cumplimiento al Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, modificado y adicionado por la Ley 1755 del 2015, se dio traslado del requerimiento al Ministerio de Defensa para los trámites pertinentes, mediante OFI24-00211121.

13. Frente a las numerosas denuncias y reportes de organizaciones e instituciones sobre las irregularidades y hechos violentos que afectaron la jornada electoral, ¿cuántas acciones violentas en contra del pasado proceso electoral, en el Departamento de Arauca, registra el Alto Comisionado para la Paz?

De manera respetuosa, se indica que en virtud del Decreto 2647 de 2022 en su artículo 23, la Consejería Comisionada de Paz no es competente para responder este requerimiento.

En este sentido, dando cumplimiento al Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, modificado y adicionado por la Ley 1755 del 2015, se dio traslado del requerimiento al Ministerio de Defensa para los trámites pertinentes, mediante OFI24-00211121.

14. ¿Qué medidas se están planteando en la mesa de diálogos con el ELN y el EMC para la protección de los sujetos de especial protección, como lo son los dirigentes sindicales que han sido amenazados el Departamento de Arauca?

En la Mesa de Diálogos de Paz (MDP) con el Estado Mayor de los Bloques, se ha implementado el Cese al Fuego Bilateral y Temporal con Respeto a la Población Civil (CFBTRPC), vigente desde el 15 de julio de 2024, mediante el Decreto 0888, y prorrogado con el Decreto 1280 hasta el 15 de abril de 2025. Este cese al fuego se está desarrollando en la región del Magdalena Medio. A través de los acuerdos y protocolos establecidos en este cese, se busca garantizar la seguridad de la población civil y proteger a los sujetos de especial protección en las áreas bajo su influencia. Además, el Enlace de la OCCP registra y canaliza las denuncias recibidas, para que sean atendidas en las mesas de diálogo, fortaleciendo así la seguridad humana y avanzando en la territorialización de la paz. Es importante señalar que estos compromisos no se aplican a las estructuras disidentes de las antiguas FARC-EP presentes en la región de Arauca.

Respecto al Ejército de Liberación Nacional (ELN), la mesa de diálogo se encuentra actualmente suspendida. Sin embargo, desde la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz (OCCP), estamos haciendo todo lo posible para lograr una reactivación de las conversaciones, priorizando siempre la seguridad y la protección de la población civil, especialmente de aquellos grupos en situación de mayor vulnerabilidad, como los dirigentes sindicales en el departamento de Arauca. Además, el enlace de la OCCP sigue registrando y canalizando denuncias para garantizar que estas preocupaciones sean consideradas en futuros diálogos, fortaleciendo así la seguridad humana y promoviendo la territorialización de la paz.

15. *¿Qué acciones se está adelantando desde el gobierno nacional para poner en la mesa los temas relacionados con la protección del medio ambiente en el marco del conflicto en Departamento de Arauca?*

De manera respetuosa, se indica que en virtud del Decreto 2647 de 2022 en su artículo 23, la Consejería Comisionada de Paz no es competente para responder este requerimiento.

En este sentido, dando cumplimiento al Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, modificado y adicionado por la Ley 1755 del 2015, se dio traslado del requerimiento al Ministerio de Ambiente para los trámites pertinentes, mediante OFI24-00211122.

16. *¿Qué acciones concretas se están llevando a cabo desde las mesas de negociaciones frente a dar solución a la amenaza de las minas antipersona en municipios como Saravena, esto bajo el marco de la estrategia de Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA) y el cumplimiento del Tratado de Ottawa?*

17. *¿Cuáles son las cifras de territorios con presencia de minas antipersona en el Departamento de Arauca que maneja el Alto Comisionado para la paz? ¿Qué acciones se han tomado para proteger a las comunidades?*

La respuesta a las preguntas 16 y 17 se encuentra en el Anexo 1. AICMA.

18. *Indique cuantos y en qué lugares del Departamento de Arauca se encuentran ubicados los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR).*

La respuesta parcial a esta pregunta se encuentra en el Anexo 2. Unidad de Implementación.

Adicionalmente, de manera respetuosa, se indica que en virtud del Decreto 2647 de 2022 en su artículo 23, la Consejería Comisionada de Paz no es competente para responder este requerimiento en su totalidad.

En este sentido, dando cumplimiento al Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, modificado y adicionado por la Ley 1755 del 2015, se dio traslado del requerimiento a la Agencia para Reincorporación y la Normalización (ARN) para los trámites pertinentes, mediante OFI24-00212309.

19. *¿Qué medidas están tomando desde la mesa de diálogos para que cesen las retaliaciones contra los excombatientes en proceso de reincorporación, especialmente aquellos que están en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR)?*

De manera respetuosa, se indica que en virtud del Decreto 2647 de 2022 en su artículo 23, la Consejería Comisionada de Paz no es competente para responder este requerimiento.

En este sentido, dando cumplimiento al Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, modificado y adicionado por la Ley 1755 del 2015, se dio traslado del requerimiento a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y al Ministerio de Defensa para los trámites pertinentes, mediante OFI24-00212309 y OFI24-00212321.

20. *¿Cuál es la oferta institucional que ha llevado consigo la Comisión de Paz a el Departamento de Arauca en aras de una mayor presencia estatal y que brinde acompañamiento a la comunidad?*

De manera respetuosa, se indica que en virtud del Decreto 2647 de 2022 en su artículo 23, la Consejería Comisionada de Paz no es competente para responder este requerimiento.

En este sentido, dando cumplimiento al Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, modificado y adicionado por la Ley 1755 del 2015, se dio traslado del requerimiento a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, la Unidad para las Víctimas, Ministerio de Justicia y del Derecho para los trámites pertinentes, mediante OFI24-00212309, OFI24-00212348, OFI24-00212349 y OFI24-00212350.

21. *El Departamento de Arauca es uno de los departamentos con mayor afectación a los derechos humanos en el país, especialmente en el tema de homicidios selectivos. ¿Qué se está planteando en las mesas de diálogo para proteger los derechos humanos de la población civil?*

En la Mesa de Diálogos de Paz (MDP) con el Estado Mayor de los Bloque se ha implementado el Cese al Fuego Bilateral y Temporal con Respeto a la Población Civil (CFBTRPC), establecido mediante el Decreto 0888 del 15 de julio de 2024 y prorrogado con el Decreto 1280 hasta el 15 de abril de 2025. Este cese al fuego incluye compromisos claros para la protección de los derechos humanos de la población civil. Entre estos compromisos destacan: acatar las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), evitar desplazamientos forzados y

confinamiento, respetar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y evitar acciones que pongan en riesgo la integridad física, cultural y territorial de la población civil, incluyendo pueblos étnicos y comunidades campesinas.

Adicionalmente, se establecieron reglas para no realizar actos de violencia ni discriminación contra la población civil, y se monitorea su cumplimiento a través del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV).

22. ¿Cuáles fueron los compromisos acordados por los grupos al margen de la ley respecto de la población civil, en el marco del cese al fuego bilateral acordado por la mesa de diálogos de paz del Gobierno del Presidente Gustavo Petro?

En la Mesa de Diálogos de Paz (MDP) con el Estado Mayor de los Bloques y en el marco del Cese al Fuego Bilateral y Temporal con Respeto a la Población Civil (CFBTRPC), se han suscrito compromisos específicos para la protección de la población civil. Entre los acuerdos alcanzados se incluyen:

1. Respeto a las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), en particular el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949.
2. Evitar desplazamientos forzados y confinamiento de la población civil.
3. Respetar y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el marco del DIH.
4. No realizar ataques ni agresiones que pongan en riesgo la integridad física, cultural y territorial de la población civil, incluyendo pueblos étnicos, comunidades campesinas y otros grupos de especial protección.
5. Evitar acciones que afecten la seguridad alimentaria y los bienes necesarios para la salud y la vida digna de la población civil.

Además, en el Protocolo de Reglas y Compromisos para el Cese al Fuego se especifica que no deben ejecutarse actos de violencia o discriminación contra la población civil, ni realizar infracciones al DIH, lo cual está sujeto a monitoreo por parte del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV). Estos compromisos están orientados a proteger a la población civil en las zonas de influencia del Estado Mayor de los Bloques, en un esfuerzo conjunto por fortalecer la seguridad humana y promover la paz en los territorios afectados.

De forma similar, en el caso de la Mesa de Diálogos con el ELN se suscribió el Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal en el Acuerdo número 10 de la mesa, que fue implementado normativamente en el Decreto número 1117 del 5 de julio de 2023 y prorrogado en el Decreto 104 de 2024. El cese al fuego, al minimizar impedir las acciones ofensivas de las partes en el conflicto minimiza los riesgos sobre la ciudadanía.

Como parte de este mismo proceso, La Mesa de Diálogos también suscribió acuerdos específicos destinados a la protección de la sociedad civil. Es el caso del Acuerdo Sobre la Suspensión de las Retenciones con fines económicos (o Acuerdo No. 16) según el cual el ELN en el marco del DIH se comprometió a suspender las retenciones con fines económicos.

23. ¿Cuántos casos de reclutamiento infantil se han presentado en los últimos dos años en el Departamento de Arauca?

De manera respetuosa, se indica que en virtud del Decreto 2647 de 2022 en su artículo 23, la Consejería Comisionada de Paz no es competente para responder este requerimiento.

En este sentido, dando cumplimiento al Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, modificado y adicionado por la Ley 1755 del 2015, se dio traslado del requerimiento a al Ministerio de Defensa para los trámites pertinentes, mediante OFI24-00212321.

24. ¿Qué estrategias se están llevando a cabo desde el Gobierno nacional en cabeza del Alto Comisionado para evitar el reclutamiento infantil en el Departamento de Arauca?

La Consejería Comisionada de Paz les ha exigido a todos los grupos armados respeto por el Derecho Internacional Humanitario y la plena vigencia de los derechos fundamentales de la población civil y, cuando ha tenido conocimiento de hechos victimizantes concretos, inmediatamente ha solicitado a esos grupos reconocer responsabilidad y que cesen las afectaciones.

Así mismo, dentro de los acuerdos de cese al fuego estipulados se tienen establecidos diferentes mecanismos de protección a la población civil incluido el reclutamiento infantil. A modo de ejemplo, el decreto 1280 del 15 de octubre de 2024 establece:

*El Cese al Fuego Bilateral y Temporal con respeto a la población civil se rige por los acuerdos y protocolos ya firmados, y por los que defina la Mesa de Diálogos de Paz. Tendrá como objetivos: **(i) respetar la vida en todas sus formas, los derechos y las libertades de la población civil, el territorio y el ambiente, en particular, de los grupos de especial protección constitucional, entre ellos los menores de edad, mujeres, defensores de DD.HH, defensores del ambiente, población firmante de procesos de paz, y líderes y lideresas sociales y comunitarias;** (ii) evitar afectaciones a la población civil y sus bienes protegidos según el Derecho Internacional Humanitario (DIH); (iii) desarrollar programas de desminado humanitario para proteger la vida de la población y de las partes; (iv) permitir y facilitar la búsqueda de personas dadas*

por desaparecidas; (v) evitar el desplazamiento de las comunidades de sus territorios y las amenazas a la vida y su integridad personal; (vi) eliminar la exigencia de contribuciones financieras ilegales y arbitrarias a la población civil; (vii) facilitar las condiciones de funcionamiento de la Mesa de Diálogos de Paz; (viii) promover la pedagogía y la participación de la población, comunidades y organizaciones con autonomía, pluralismo y respeto al gobierno propio; (ix) avanzar en la política de territorialización de la paz, garantizando las condiciones de seguridad necesarias para la participación de la comunidad especialmente campesina, los pueblos y grupos étnicos y las autoridades territoriales para la presencia integral del Estado en las regiones de paz y en las zonas de intervención prioritaria con la estrategia de transformaciones territoriales para la construcción de la paz, en las cuales se desarrollarán intervenciones del Estado con resultados inmediatos; (x) avanzar en acuerdos de aplicación inmediata que incluyen temas humanitarios, de agenda ambiental para la paz, transformaciones territoriales, mecanismos de veeduría, monitoreo y verificación; (xi) avanzar en la construcción de los contenidos del acuerdo de paz para la definitiva solución política de paz; (xii) crear las condiciones de seguridad necesarias para la implementación de las transformaciones territoriales en los municipios que define la mesa en los departamentos de Caquetá, Putumayo, Guaviare, Meta, Huila, Norte de Antioquia, nordeste y bajo cauca antioqueño, Sur de Bolívar y región del Catatumbo; (xiii) cesar el fuego y las acciones ofensivas entre las partes. " (negrilla y subrayado fuera de texto).

Así las cosas, el gobierno nacional adelanta procesos de paz con el ELN y el EMC-FARC, ambas organizaciones con presencia en Arauca. Estamos empeñados en lograr que cese esa confrontación que afecta de manera dramática a la sociedad araucana. En ese camino, hay procesos en marcha con el compromiso del gobierno nacional y en plena articulación con el gobierno departamental.

La OCCP no dirige la política pública en contra del reclutamiento en la medida en que en este objetivo confluyen diferentes entidades del Estado que tienen mandatos específicos para la protección de los niños, niñas y adolescentes.

25. ¿Cuáles son las acciones que se están llevando a cabo para reducir el nivel de peligro hacia los pueblos étnicos en el Departamento de Arauca?

De manera respetuosa, se indica que en virtud del Decreto 2647 de 2022 en su artículo 23, la Consejería Comisionada de Paz no es competente para responder este requerimiento.

En este sentido, dando cumplimiento al Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, modificado y adicionado por la Ley 1755 del 2015, se dio traslado del

requerimiento al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa para los trámites pertinentes, mediante OFI24-00213898 y OFI24-00213899.

26. ¿Qué estrategias especiales se están tomando a través de la Implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en el alcance del Gobierno Nacional para abordar la situación en el Departamento de Arauca?

De manera respetuosa, se indica que en virtud del Decreto 2647 de 2022 en su artículo 23, la Consejería Comisionada de Paz no es competente para responder este requerimiento.

En este sentido, dando cumplimiento al Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, modificado y adicionado por la Ley 1755 del 2015, se dio traslado del requerimiento a la Agencia para la Renovación del Territorio para los trámites pertinentes, mediante OFI24-00213761.

27. ¿Qué acciones realizadas por parte del ELN y EMC demuestran la voluntad real de paz y de reinserción a la vida civil de estos grupos armados al margen de la ley presentes en el Departamento de Arauca?

La Consejería Comisionada de Paz les ha exigido a todos los grupos armados respeto por el Derecho Internacional Humanitario y la plena vigencia de los derechos fundamentales de la población civil y, cuando ha tenido conocimiento de hechos victimizantes concretos, inmediatamente ha solicitado a esos grupos reconocer responsabilidad y que cesen las afectaciones.

En atención a lo anterior, en relación con el proceso que se adelanta con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en virtud del Segundo Acuerdo de Cuba (o Acuerdo No. 10), y de los Decretos 1117 de 2023 y 104 de 2024, desde el pasado 3 de agosto de 2023 hasta el 3 de agosto de 2024, con posibilidad de prórroga, tuvo vigencia el Cese al Fuego Bilateral y Temporal de Carácter Nacional (CFBTN), el cual, cuenta con un Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV), compuesto por delegados del Gobierno Nacional, del ELN, así como con el acompañamiento de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y de la Iglesia Católica. Con fecha 9 de octubre de 2024 el ELN emitió un comunicado invitando a llevar a cabo una reunión que permita seguir abordando aspectos sustanciales del proceso y la cual fue aceptada por la delegación gubernamental.

Así mismo, en el marco del proceso de diálogo entre el Gobierno Nacional de la República de Colombia y el Estado Mayor Central de las FARC-EP, el 16 de

octubre de 2023, en el municipio de Tibú, Norte de Santander, se instaló públicamente la Mesa de Diálogos, y se decretó el Cese al Fuego Bilateral y Temporal de carácter Nacional con impacto Territorial (CFBTNT) sobre la base de un Acuerdo para el respeto de la población civil (prorrogado del 16 de enero de 2024 al 15 de julio de 2024), creando el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación del Cese al Fuego Bilateral.

Posteriormente se decreta un nuevo cese al fuego firmado por el presidente Gustavo Petro en el decreto 1280 del 15 de octubre, se aplica a las estructuras del Estado Mayor de los bloques Comandante Jorge Suárez Briceño, Comandante Gentil Duarte del Magdalena Medios y al frente Raúl Reyes de las FARC-EP que continúan en los diálogos de paz del Gobierno nacional y le apuestan a una salida negociada al conflicto. El Decreto 1280 le da importancia central en estos seis meses, al avance efectivo de transformaciones en los territorios en beneficio de la población, en la construcción de los contenidos del acuerdo de paz y en el cumplimiento de las normas de respeto a la población civil Comparto el decreto firmado por el presidente de la República.

Para dar con estos propósitos, el MVMV se compone por: i) el Gobierno Nacional, representado por los delegados del Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz; ii) El Estado Mayor Central de las FARC-EP; iii) la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia, sujeto a la decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; y iv) la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos MAPP/OEA, si así lo decide. Sumado al acompañamiento de la Conferencia Episcopal de Colombia y el Consejo Mundial de Iglesias.

28. ¿Qué acciones concretas ha realizado el Alto Comisionado para la Paz, en función de liderar, coordinar y lograr la participación en las mesas de conversaciones con estos grupos al margen de la ley en el contexto de la situación en el Departamento de Arauca?

La Consejería Comisionada de Paz reconoce que la participación ciudadana es fundamental para el desarrollo sostenible y legítimo de los procesos de paz, ya que permite involucrar a las comunidades en la construcción de soluciones duraderas. En este marco, mantener abiertos los espacios de diálogo y diseñar estrategias específicas para promover la participación ciudadana se convierte en una prioridad para la paz territorial.

En el Departamento de Arauca, y particularmente en el contexto de los diálogos con el Estado Mayor de los Bloques, se alcanzó el Acuerdo sobre Participación Ciudadana el 17 de octubre de 2024. Este acuerdo, ya mencionado en reportes anteriores, no solo constituye la base estructural de la participación en este

proceso de paz, sino que además sienta un precedente en la política de inclusión de actores territoriales en la implementación de acuerdos. La piedra angular del acuerdo radica en su capacidad para abrir canales de diálogo directo, propiciando un enfoque en el que las transformaciones territoriales se fundamenten en el protagonismo y la corresponsabilidad de las comunidades.

Este logro es el resultado de la perseverancia de la delegación en su empeño por instaurar mecanismos de participación efectivos y transparentes, que den voz y agencia a los actores locales. Dichos mecanismos se han diseñado para que no solo fortalezcan el tejido social, sino que además promuevan la corresponsabilidad en la construcción de una paz duradera. Así, el acuerdo de participación ciudadana fomenta una transformación en la que las demandas, preocupaciones y visiones del territorio sean reconocidas como pilares del desarrollo, promoviendo la autonomía y el empoderamiento de las comunidades en el proceso de paz. De este modo, la Consejería Comisionada de Paz reafirma su compromiso con una paz que no solo se negocie, sino que se construya desde la base social del territorio, asegurando que la participación ciudadana se mantenga como un componente vital y estratégico de las políticas de paz en Arauca y en todo el país.

29. ¿Qué escenarios de participación y diálogo intersectorial se han promovido en el Departamento de Arauca para la construcción de una cultura de paz y convivencia?

30. ¿Cómo se ha articulado la relación entre el Ministerio de Defensa, la Oficina del alto comisionado y las demás entidades del Gobierno Nacional, las empresas privadas, ¿los organismos internacionales y las autoridades departamentales y locales en el Departamento de Arauca para la construcción de una paz estable y duradera?

En primer lugar, queremos reiterar que el Gobierno Nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, reconoce el inmenso reto que tenemos en Arauca. No es un desafío menor avanzar hacia un estado social y de derecho, especialmente en un contexto donde la violencia persiste con profundas raíces. Ante este desafío debemos seguir insistiendo en un protagonismo social, salir del escepticismo y afirmarnos en la convicción de que es posible construir nuevas realidades, donde Arauca viva en paz y sea posible vivir con derechos e instituciones que los promuevan y protejan.

A través de la gobernación de Arauca, se está construyendo el Plan Departamental de Desarrollo, un proceso en el que estamos atentos y hemos coordinado con la Consejería de Paz de la Gobernación de Arauca, para que las apuestas de transformación del territorio estén en este importante instrumento de gestión pública que guía su acción, en plena sintonía con lo formulado en el

Plan Nacional de Desarrollo. Este último prioriza a los territorios marginados para mejorar sus condiciones de vida, y allí se encuentra el departamento de Arauca. Es fundamental seguir acompañando a las comunidades que sufren la violencia, a sus organizaciones y liderazgos. Debemos pensar juntos cómo podemos ser más efectivos, qué más es posible adelantar para proteger la vida, qué se requiere para acompañar a quienes hoy sufren confinamiento, a los que han debido salir del departamento, a los que sienten su vida amenazada.

Así las cosas, el gobierno nacional adelanta procesos de paz con el ELN y el EMC-FARC, ambas organizaciones con presencia en Arauca. Estamos empeñados en lograr que cese esa confrontación que afecta de manera dramática a la sociedad araucana. En ese camino, hay procesos en marcha con el compromiso del gobierno nacional y en plena articulación con el gobierno departamental. Mencionamos tres que apuntan a resolver grandes temas pendientes: los proyectos de universidades que se proyectan para Saravena/Tame, la actualización del Plan de Acción de Transformación Territorial del PDET, que hoy funciona en Arauquita, Fortul, Saravena y Tame, y el compromiso de darle valor agregado a la economía rural, comenzando por el cacao, como lo anunció el presidente Petro en su presentación en Arauquita en la primera semana de marzo de 2024. Estas son líneas de acción compartida sobre temas estratégicos para Arauca, y en los próximos meses debemos concertar y llevar adelante la acción transformadora para avanzar hacia una Arauca en paz. Por último, la OCCP tiene un enlace permanente que es Luis Eduardo Celis, quien mantiene comunicación con el Consejero de Paz Javier Triana. Allí podemos seguir trabajando en esta agenda compartida.

31. ¿Qué acciones se han generado, en cabeza del Alto Comisionado para la Paz, y en conjunto con la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Renovación del Territorio y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) en el marco de la implementación de los Acuerdos de Paz en el departamento de Arauca?

De manera respetuosa, se indica que en virtud del Decreto 2647 de 2022 en su artículo 23, la Consejería Comisionada de Paz no es competente para responder este requerimiento.

En este sentido, dando cumplimiento al Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, modificado y adicionado por la Ley 1755 del 2015, se dio traslado del requerimiento a la Unidad de Implementación, la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) para los trámites pertinentes, mediante el MEM24-00037567, OFI24-00213773 y OFI24-00213774.

32. *¿Qué acciones y programas de pedagogía se han desarrollado en el Departamento de Arauca para promover el conocimiento de la política de paz, reconciliación y convivencia, y el contenido de los acuerdos y pactos suscritos?*

La respuesta a esta pregunta, dado que tienen el mismo sentido y sustancia en la que se dio a las preguntas 29 y 30 de esta proposición, de tal forma que le solicitamos remitirse a esta.

33. *¿Qué gestiones se han adelantado para obtener cooperación internacional en el marco de la implementación de las mesas de diálogos con el ELN y el EMC?*

Se han llevado a cabo diversas gestiones a nivel diplomático y técnico para asegurar la cooperación internacional en las mesas de diálogo con el ELN y el EMC (Estado Mayor Central). Entre estas gestiones, se destacan:

- Solicitudes a organismos internacionales como Naciones Unidas y la Unión Europea, que han expresado su apoyo a los procesos de paz en Colombia.
- Participación activa de países garantes como Noruega, Cuba y Venezuela, que han facilitado la mediación en las conversaciones.

Solicitud de recursos, para financiar proyectos de transformación en territorios afectados por el conflicto, además de apoyos técnicos y recurso humano para apoyar los acuerdos pactados en el marco de la negociación.

34. *¿Cuál es el procedimiento que quedó establecido en la mesa de diálogos con el ELN, frente a las violaciones al cese bilateral pactado con este grupo?*

El procedimiento que se había establecido en la mesa de diálogos con el ELN ante las violaciones al cese al fuego estaba regido por los protocolos del cese al fuego, allí se determinaba que hacer ante cualquier violación del cese. Sobre los ceses al fuego, vea la respuesta 7 de la proposición 139.

Proposición 39:

- 1. *Sírvase informar cómo viene atendiendo su entidad el crecimiento generalizado del desplazamiento forzado, los confinamientos de poblaciones, el deterioro de la situación humanitaria y los derechos fundamentales de los territorios y población afectada por los conflictos armados internos que aún perviven en el país.***

De manera respetuosa, se indica que en virtud del Decreto 2647 de 2022 en su artículo 23, la Consejería Comisionada de Paz no es competente para responder este requerimiento.

En este sentido, dando cumplimiento al Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, modificado y adicionado por la Ley 1755 del 2015, se dio traslado del requerimiento a la Unidad para las Víctimas para los trámites pertinentes, mediante el OFI24-00211689.

2. Presente los diagnósticos, las caracterizaciones y las cifras que maneja su entidad sobre las poblaciones de su objeto misional frente al desplazamiento forzado, los confinamientos de poblaciones, el deterioro de la situación humanitaria y los derechos fundamentales de los territorios y población afectada por los conflictos armados internos que aún perviven en el país.

De manera respetuosa, se indica que en virtud del Decreto 2647 de 2022 en su artículo 23, la Consejería Comisionada de Paz no es competente para responder este requerimiento.

En este sentido, dando cumplimiento al Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, modificado y adicionado por la Ley 1755 del 2015, se dio traslado del requerimiento al Ministerio de Defensa Nacional para los trámites pertinentes, mediante OFI24-00211317.

3. Sírvase explicar las razones de la ineficiencia en la implementación de los planes de asistencia humanitaria, los planes de acompañamiento y los planes de retorno y reubicaciones de las poblaciones en situación de desplazamiento forzado y confinamiento.

De manera respetuosa, se indica que en virtud del Decreto 2647 de 2022 en su artículo 23, la Consejería Comisionada de Paz no es competente para responder este requerimiento.

En este sentido, dando cumplimiento al Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, modificado y adicionado por la Ley 1755 del 2015, se dio traslado del requerimiento a la Unidad para las Víctimas para los fines pertinentes, mediante OFI24-00211372.

4. Sírvase presentar los informes de la implementación del Plan de Acción interinstitucional para la construcción de los ecosistemas de paz, la atención de emergencia, protección, retorno o

reubicación de las comunidades afectadas por los conflictos armados en Colombia. Focalizar por subregiones.

De manera respetuosa, se indica que en virtud del Decreto 2647 de 2022 en su artículo 23, la Consejería Comisionada de Paz no es competente para responder este requerimiento.

En este sentido, dando cumplimiento al Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, modificado y adicionado por la Ley 1755 del 2015, se dio traslado del requerimiento a la Unidad para las Víctimas y a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior para los fines pertinentes, mediante OFI24-00215226 y OFI24-00215309.

5. Sírvasse informar cómo se está garantizando los ejercicios constitucionales de gobiernos propios, la autonomía, el restablecimiento del tejido social y su incidencia política en el marco de los acercamientos, diálogos y conversaciones derivados de la política de paz total en los territorios étnicos.

La Oficina de la Consejería Comisionada de Paz, dentro de sus objetivos generales promueve, desarrolla y articula, en el marco de la política de paz, reconciliación y convivencia del Gobierno Nacional, escenarios de participación y de diálogo intersectorial, orientados a la construcción de paz, que promuevan la confianza, convivencia y reconciliación, que puedan contribuir al desarrollo y consolidación de los procesos paz, de acuerdo con instrucciones del Presidente de la República, estas acciones de construcción de paz se desarrollan de forma territorial teniendo en cuenta las poblaciones que habitan en estos territorios y han sido históricamente excluidas, constituyendo los sectores sociales más afectados por el conflicto armado, no solo en términos de víctimas, sino porque han sufrido de manera directa la confrontación en sus territorios. Esto ha dejado profundas afectaciones en sus modos de vida y paulatinamente los ha ido integrando en las peores condiciones a la sociedad nacional; con el fin de aportar a una construcción de paz más equitativa e igualitaria, la Oficina de la Consejería Comisionada de Paz, concertó productos con los pueblos indígenas en el espacio de la MPC (Mesa Permanente de Concertación) como el escenario de diálogo entre el Gobierno indígena y el Gobierno nacional, en el que se pactan los programas y las políticas concernientes a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de los pueblos indígenas del país.

- **Garantía de participación integral y efectiva:** El Gobierno Nacional, bajo el liderazgo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, garantizará la participación integral y efectiva de las organizaciones y autoridades indígenas, con enfoque territorial y de mujer, familia y

generación incluyendo jóvenes, en los procesos de diálogos para la paz, en el marco de la implementación de la política de Paz Total dispuesta en la Ley 418 de 1997 y la Ley 2272 de 2022, salvaguardando los Derechos de los Pueblos Indígenas en los acuerdos resultantes de estos procesos de diálogo.

Con el fin de aportar a la garantía en la participación integral y efectiva de organizaciones y autoridades indígenas, con enfoque territorial, de mujer, familia y generación, la OCCP adelantó durante el tercer trimestre, dos (2) encuentros con lideresas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde se movilizaron temas sobre la feminización de la paz y la importancia de la participación de las mujeres en los diálogos de paz.

Los encuentros se desarrollaron:

13 de julio en el resguardo Kwizhimake comunidad pueblo Kogui, en este espacio participaron mujeres de los cuatro (4) pueblos indígenas: KOGUI, WIWA, KAMKUAMO Y ARHUACO, en donde se revisó el fortalecimiento de los procesos, iniciativas y agendas propias comunitarias e interculturales de construcción de paz territorial desde y para las mujeres y familias indígenas.

El segundo encuentro se desarrolló el 10 de septiembre en la ciudad de Santa Marta, con el objetivo de desarrollar un espacio de reflexión y construcción colectiva frente al tema de paz territorial en la Sierra Nevada, con el fin de recoger las voces de las mujeres como actores primordiales en la construcción de paz.

- **Fortalecimiento de garantías operativas de las instancias propias:**
El Gobierno Nacional, bajo el liderazgo de la OACP, fortalecerá y brindará garantías operativas a las instancias propias para la paz de los pueblos indígenas, y también a las acciones de alivio humanitario y atención inmediata acordadas en el marco de los diálogos de paz, con el fin de proteger los derechos humanos, colectivos, y el DIH de los pueblos indígenas.

La Oficina de la Consejería Comisionada de Paz, apoyo con dotación de herramientas y enseres al Plan Regional de Atención de Emergencia Humanitaria para el año 2024 del CRIC, reconociendo el liderazgo y la autonomía de las autoridades y organizaciones indígenas en la gestión de sus propios procesos de construcción de paz en un contexto de crisis humanitaria de la siguiente manera:

11 de julio: Entrega en 6 zonas del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

Beneficiarios:

- Resguardo Huellas, Caloto

- Resguardo Indígena de Tacueyó, municipio de Toribío
- Resguardo Agua Negra, Morales
- Resguardo Indígena de Honduras, municipio de Morales, Cauca
- Resguardo Indígena de Santa Rosa, municipio de Inzá
- Resguardo San Andrés de Pisimbalá, municipio de Inzá
- Resguardo Indígena Alto del Rey, municipio de El Tambo
- Resguardo Indígena de Puracé, municipio de Puracé
- Resguardo Indígena de Quichaya, municipio de Silvia
- Resguardo Indígena La Gaitana, municipio de Inzá
- Territorio ancestral Sat Tama Kiwe, municipio de Caldon

De igual forma el 25 de agosto: Se realizó la entrega en la vereda El Limón Carrizal, corregimiento de Las Palmas, Distrito de Riohacha, La Guajira.

Beneficiarios: Comunidad Wiwa del Resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco. Con el fin de apoyar al retorno de la comunidad en el marco de las actividades exploratorias para la instalación de un espacio de conversación sociojurídica de construcción de paz en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Los días 11-15 de septiembre: Se realizó un operativo en Nariño, cubriendo el municipio de Samaniego, con el objetivo de fortalecer capacidades locales para iniciativas de inclusión social, cultura de paz, empoderamiento en derechos y participación comunitaria, en el marco de la Instancia de Co-construcción de Paz Territorial de Nariño. Los beneficiarios:

- Resguardo Indígena de La Montaña, Pueblo Indígena de Los Pastos en el municipio de Samaniego
- Resguardo Indígena Awá de Planadas Telembí, municipio de Samaniego.
- **Garantía para la participación efectiva de las organizaciones indígenas:** Garantizar la participación efectiva de las organizaciones indígenas "jóvenes indígenas en concertación con la DENAJI" en aquellos escenarios que se definan para tal fin en el marco de los procesos de construcción de la paz total que el gobierno nacional adelante, con los grupos armados ilegales que hacen presencia en los territorios, así como en los mecanismos de reparación colectiva de los pueblos indígenas víctimas del conflicto armado que allí se pacten.

Como avances para este producto el equipo poblacional-diferencial de la Oficina de la Consejería Comisionada de paz, adelanto conversaciones con la secretaria técnica de la comisión, con el fin de presentar la propuesta para el encuentro de elaboración de la metodología en temas de construcción de paz, este encuentro se adelantará con las coordinadoras y coordinadores de las siete (7) organizaciones que hacen parte de la comisión en el mes de noviembre.

Para los pueblos con pertenencia étnica negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, la concertación se realizó en el marco de la ENCP (Espacio Nacional de Consulta Previa), acordando tres (3) indicadores:

- **Participación efectiva y real de la población afro:** El Gobierno Nacional, bajo el liderazgo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, promoverá y posibilitará el desarrollo de mecanismos de participación real y efectiva de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en los escenarios que se definan para tal fin en el marco de los procesos de construcción de paz total y los acuerdos que el gobierno nacional adelante con los grupos armados irregulares que hacen presencia en sus territorios, garantizando el cumplimiento del enfoque étnico de la política de Paz Total dispuesta en la Ley 2272 de 2022.

Se realizaron dos (2) reuniones, con los presidentes de las comisiones I y VI, para concertar la realización de un encuentro presencial en el mes de noviembre donde se definirá la ruta de trabajo para la participación efectiva en los procesos de construcción de paz.

La oficina del Alto Comisionado Para la Paz en concertación con las comisiones I y VI del ENCP Realizarán 6 Foros regionales sobre procesos de paz, Paz Total e impacto en las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras para generar sensibilización en el nivel territorial.

- la OCCP adelantó dos (2) espacios virtuales con los presidentes y representantes de las comisiones I y VI con el fin de definir un espacio para realizar la construcción de la metodología de los foros, se proyecta este encuentro para la primera semana de noviembre.

Estos productos y acciones concertados para la vigencia 2024-2025, aportan a la participación con equidad de las poblaciones indígenas y afrocolombianos en los territorios del país, a el restablecimiento del tejido social y la incidencia política en el marco de los acercamientos, diálogos y conversaciones derivados de la política de paz total en los territorios étnicos.

6. *Sírvase informar los montos y la destinación de los recursos que hace su entidad para la atención de emergencia, protección,*

retorno o reubicación de las comunidades afectadas por los conflictos armados en Colombia.

De manera respetuosa, se indica que en virtud del Decreto 2647 de 2022 en su artículo 23, la Consejería Comisionada de Paz no es competente para responder este requerimiento.

En este sentido, dando cumplimiento al Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, modificado y adicionado por la Ley 1755 del 2015, se dio traslado del requerimiento a la Unidad para las Víctimas para los fines pertinentes, mediante OFI24-00211372.

7. Sírvase informar cómo viene aplicando el enfoque étnico - racial y las ordenes de la corte constitucional en los autos 004 y 005 para la atención de los pueblos étnicos en el estado de cosas inconstitucional, agravado por la situación humanitaria actual del país.

De manera respetuosa, se indica que en virtud del Decreto 2647 de 2022 en su artículo 23, la Consejería Comisionada de Paz no es competente para responder este requerimiento.

En este sentido, dando cumplimiento al Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, modificado y adicionado por la Ley 1755 del 2015, se dio traslado del requerimiento al Ministerio del Interior para los fines pertinentes, mediante OFI24-00211394.

8. Sírvase informar cómo se están armonizando los acuerdos parciales que está haciendo el estado y los grupos armados en el marco de la Paz total, con el modelo de atención del desplazamiento forzado y los confinamientos en el país.

El Gobierno Nacional y las instituciones del Estado enfrentan múltiples desafíos para avanzar en la construcción de paz desde el nuevo marco estratégico para la Paz Total. Estos retos se relacionan con las mutaciones en las dinámicas de las violencias armadas. Actualmente, más que una confrontación de grupos armados ilegales contra el Estado y contra el orden constitucional vigente, hay un giro hacia violencias territoriales generadas alrededor del control sobre economías ilegales en las que participan todos los actores armados. Estas violencias territoriales, también se derivan de los efectos del rezago en la implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016, resultado de decisiones políticas pasadas que desconocieron compromisos y permitieron el reciclaje de las violencias en muchos territorios del país.

Así las cosas, el Gobierno Nacional ha reiterado en distintas ocasiones, cinco desafíos principales:

(i) Afianzar las bases para implementar la política de Paz Total, en sus tres dimensiones de transformación territorial, renovación institucional y enfoque en la implementación integral de acuerdos parciales y finales.

(ii) Cumplir completa y efectivamente con los compromisos del Acuerdo Final de 2016, que presenta rezagos significativos en el cumplimiento de las metas, desarticulación institucional, desfinanciación de programas y carencia de una efectiva implementación normativa que genere las bases estructurales para el oportuno y real cumplimiento de lo pactado.

(iii) Hacer realidad un acuerdo político nacional para viabilizar la implementación de un plan de choque y unas medidas transitorias de emergencia para acelerar la implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016; así como los ajustes institucionales de largo plazo que permitan la ejecución de las reformas que conlleven a la transformación efectiva de los territorios, la reforma agraria, la desactivación de las economías ilegales y la verdad judicial completa.

(iv) Persistencia de violencias armadas en territorios históricamente afectados por el conflicto armado y por parte de actores relacionados con economías ilegales. Allí, el Estado colombiano no ha logrado la garantía de condiciones mínimas de seguridad para firmantes de paz y comunidades, así como la extinción de diversas formas de violencia y el uso de las armas en la vida social y política del país. Ello ha facilitado el reciclaje de las violencias y la pérdida de confianza en las instituciones del Estado para cumplir con lo pactado, avanzar en nuevos acuerdos y garantizar condiciones mínimas para la vida digna.

(v) Ausencia de compromiso con la implementación de otras ramas del poder público que afectan el desarrollo legislativo de las disposiciones del Acuerdo de Paz de 2016 y la política de 'Paz Total'.

El enfoque de transformaciones territoriales dentro de la política de Paz Total representa un compromiso integral del Estado para atender a las víctimas del desplazamiento forzado, promoviendo condiciones que hagan posible su retorno seguro, sostenible y productivo. Este enfoque va más allá de la restitución de tierras como un derecho, al abarcar un marco de desarrollo territorial que busca no solo garantizar el retorno de los desplazados, sino también fortalecer el tejido social y crear oportunidades económicas en comunidades afectadas.

Para lograrlo, se prioriza el fortalecimiento del desarrollo local, con apoyo económico y proyectos productivos que aseguren una reintegración digna y sostenible; en este sentido, la creación de empleos, el acceso a servicios básicos y la capacitación en oficios son fundamentales para evitar que el ciclo de desplazamiento y violencia se perpetúe. La construcción de infraestructuras esenciales –como caminos, centros de salud y escuelas– también se promueve

como medida de estabilidad para las comunidades y de fomento a la cohesión social, fortaleciendo la confianza en las instituciones locales y facilitando una economía local resiliente. Además, se impulsa la participación activa de las comunidades en la planificación territorial, un componente central que permite adaptar los proyectos a las realidades económicas y ecológicas de cada región, garantizando que las soluciones no solo respondan a necesidades inmediatas, sino que también contribuyan a la sostenibilidad de los territorios a largo plazo.

9. *Sírvase informar que acciones especiales viene desarrollando el ICBF para la atención de niños, niñas y adolescentes afectados por emergencias humanitarias ligadas al conflicto armado en contextos de desplazamiento forzado y confinamiento.*

De manera respetuosa, se indica que en virtud del Decreto 2647 de 2022 en su artículo 23, la Consejería Comisionada de Paz no es competente para responder este requerimiento.

En este sentido, dando cumplimiento al Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, modificado y adicionado por la Ley 1755 del 2015, se dio traslado del requerimiento al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para los trámites pertinentes, mediante OFI24-00211660.

10. *Sírvase informar cómo se está protegiendo a los territorios étnicos para la garantía de su integridad y biodiversidad frente a los desplazamientos forzados y vaciamiento del territorio que producen los conflictos armados.*

De manera respetuosa, se indica que en virtud del Decreto 2647 de 2022 en su artículo 23, la Consejería Comisionada de Paz no es competente para responder este requerimiento.

En este sentido, dando cumplimiento al Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, modificado y adicionado por la Ley 1755 del 2015, se dio traslado del requerimiento al Ministerio del Interior para los trámites pertinentes, mediante OFI24-00211682.

Proposición 102:

1. *¿Cuáles son las estrategias específicas que se están implementando desde las carteras Ministeriales y la Oficina del*

Alto Comisionado para la Paz, para abordar la alta tasa de secuestros en Arauca, el departamento con más casos en el país?

De manera respetuosa, se indica que en virtud del Decreto 2647 de 2022 en su artículo 23, la Consejería Comisionada de Paz no es competente para responder este requerimiento.

En este sentido, dando cumplimiento al Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, modificado y adicionado por la Ley 1755 del 2015, se dio traslado del requerimiento al Ministerio de Defensa Nacional para los trámites pertinentes, mediante OFI24-00211690.

2. ¿Qué acciones concretas se han llevado a las mesas de diálogo con los grupos armados al margen de la ley para lograr la liberación de las personas secuestradas y retenidas en el departamento?

Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta número 3 de la proposición 33.

3. ¿Qué misiones están activas en el departamento de Arauca para la liberación de las personas en cautiverio?

De manera respetuosa, se indica que en virtud del Decreto 2647 de 2022 en su artículo 23, la Consejería Comisionada de Paz no es competente para responder este requerimiento.

En este sentido, dando cumplimiento al Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, modificado y adicionado por la Ley 1755 del 2015, se dio traslado del requerimiento al Ministerio de Defensa para los trámites pertinentes, mediante OFI24-00211713.

4. ¿cuáles son los mecanismos de apoyo que el gobierno nacional mediante la Oficina del Alto Comisionado para la Paz está manejando para atender las situaciones de desplazamiento masivo forzado, confinamiento y riesgo de desplazamiento en la región de Arauca?

Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta número 6 de la proposición 33.

5. Teniendo en cuenta que la población desplazada mayoritariamente pertenece a municipios de categorías 5 y 6, y que Arauca cuenta con 6 de sus municipios en categoría 6, ¿qué estrategias se están llevando a cabo desde la Comisión de Paz para garantizar las condiciones técnicas y financieras para el retorno de estas personas?

Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta número 7 de la proposición 33.

6. ¿cuál es el estado actual de las negociaciones de paz con el ELN y el EMC en lo que refiere a Arauca?

Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta n° 8 de la proposición 33.

7. ¿Qué acciones concretas han llevado a la mesa de diálogo con los grupos al margen de la ley para dejar de lado a los civiles en el conflicto?

Dentro de los acuerdos con la Mesa de Diálogos con el Estado Mayor Bloques y Frentes EMBF, los siguientes puntos cobijan el departamento de Arauca con relación a:

1. Respeto y la protección civil con justicia social.
2. Acatar las normas del Derecho Internacional Humanitario en especial el protocolo II adicional a LOS CONVENIOS DE Ginebra de 1949.
3. No generar desplazamiento forzado ni confinamiento.
4. Respetar y Promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
5. No realizar ataques y agresiones que pongan en riesgo y vulneren la integridad física, cultural y territorial de los pueblos étnicos, comunidades campesinas, demás grupos de especial protección y en general la población civil.
6. No obstaculizar misiones médicas y humanitarias o la atención de enfermos graves y heridos, así como las labores misionales de las autoridades civiles.
7. Evitar la afectación humanitaria de la población.
8. Emplear un lenguaje respetuoso no estigmatizante y sin estímulo a la estigmatización o a señalamientos.
9. Respetar la vida en todas sus formas, la naturaleza en todos sus ámbitos.
10. No afectar los derechos y libertades de la población civil.
11. No ejecutar actos de violencia o discriminación, incluidos aquellos por razones étnicas, de género, religiosas o políticas.

A su vez, en el Acuerdo V, se acordó:

1. Fortalecer la participación directa.
2. Reconocer y acompañar a los pueblos, comunidades y organizaciones en sus esfuerzos autónomos para la protección ambiental de la biodiversidad y el cuidado de sus economías propias.
3. Avanzar en la elaboración de la agenda definitiva, asegurando la participación real y efectiva de las comunidades.

4. Invitar a la sociedad al proceso de construcción y desarrollo de la agenda teniendo los lineamientos base para la elaboración de la agenda de diálogos y construcción de paz firmado el 16 de octubre de 2023.

En el mismo Acuerdo, respecto de la transformación territorial se contempla lo siguiente:

“(...) las partes y comunidades generarán condiciones para la ejecución de acuerdos parciales de implementación inmediata en las áreas donde hace presencia el estado Mayor Central de las FARC-EP, priorizando los Departamentos de Cauca, Caquetá, Arauca, Putumayo, Guaviare y Norte de Santander, para adelantar transformaciones territoriales estructurales, con planes de desarrollo sostenible integral orientados a mejorar las condiciones de vida de la población en los territorios. Los contenidos de los acuerdos serán contruidos con las comunidades. Basados en las experiencias y diálogos sociales, la MDP elaborará un Acuerdo Especial sobre transformaciones territoriales en la respectiva construcción de paz con justicia social y ambiental, teniendo en cuenta, entre otros, sus protocolos y acuerdos(...)”

El 17 de enero de 2024 se instaló el Mecanismo de Verificación en Arauca, esta instancia regional verificará el cumplimiento de los compromisos del cese al fuego bilateral en el departamento de Arauca.

En el avance de los diálogos hubo una división al interior de Grupo Armado organizado al Margen de la ley y el Estado Mayor de los bloques Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte, Comandante Jorge Suarez Briceño y Frente Raúl Reyes FARC- EP continuaron en la Mesa de Diálogos de Paz. Con ellos, se continuó con el cese al fuego bilateral a partir del día 16 de julio de 2024 hasta el 15 de octubre de 2024, el cual se oficializó por Decreto 888 del 15 de julio de 2024.

Los bloques y frentes del autodenominado Estado Mayor Central de las FARC - EP, que no continuaron en la Mesa de Diálogos de Paz con el Gobierno nacional, se encuentran los que actúan en Tame y Puerto Rondón, Departamento de Arauca.

8. ¿Qué papel juega el territorio araucano en las negociaciones de paz?

La participación de la sociedad civil y las comunidades es un asunto prioritario del proceso de paz y la política de Paz Total. En este sentido, en el marco del tercer ciclo de la mesa de diálogos de paz entre el Gobierno Nacional de la República de Colombia y El Estado Mayor Central de las FARC-EP, celebrado entre el 9 al 18 de enero de 2024, se acordó la estructuración de la ruta de participación directa, real y efectiva de la sociedad civil, estipulando que la labor de la participación social, ciudadana y comunitaria, será realizada en los niveles nacional, regional y local, en los términos y condiciones acordadas en el

Protocolo para la Participación y Veeduría social de la población, sus comunidades y las organizaciones.

De esta manera, se avanzará en la construcción del Acuerdo Especial para la Participación y Decisiones, y el protocolo de Participación, desarrollando iniciativas de diálogo social.

Así mismo, las partes generarán las condiciones para adelantar transformaciones territoriales estructurales, con planes para el desarrollo sostenible integral orientados a mejorar las condiciones de vida de la población en los territorios, priorizando los departamentos del Cauca, Caquetá, **Arauca**, Putumayo, Guaviare y Norte de Santander.

Sumado a lo anterior, en la agenda de la Mesa de los Diálogos de Paz, se incorporará lo relacionado con los derechos de las víctimas en el DIH, como lo que se refiere a todas las vulneraciones y sus causas en el marco de los conflictos sociales y armados. Se harán diálogos sociales con organizaciones y entidades para avanzar en la evaluación y respuestas que sean pertinentes, relacionadas entre otros temas con:

- a. Firmantes de los acuerdos de paz
- b. Pueblos y comunidades étnicas, campesinas y grupos de especial protección.
- c. Poblaciones en situación de confinamiento y desplazamiento.
- d. Trabajadores afectados en razón del conflicto, entre ellos, los documentados por la Mesa Nacional de Docentes Provisionales de Territorios Posconflicto y por las organizaciones sindicales.

9. ¿Qué representantes de la ciudadanía araucana se encuentran en las negociaciones de paz?

Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta número 10 de la proposición 33.

10. ¿Se ha tenido en cuenta la situación histórica de conflicto armado que ha vivido el territorio araucano para realizar las negociaciones o simplemente el Gobierno se ha centrado en llevar la paz a otros territorios y no al Araucano?

En virtud de la competencia conferida por la Ley 2272 de 2022, la cual tiene como objeto definir la política de paz como una política de Estado a nivel nacional.

Será prioritaria y transversal en los asuntos de Estado, participativa, amplia, incluyente e integral, tanto en lo referente a la implementación de acuerdos, como con relación a procesos de negociación, diálogo y sometimiento a la

justicia. Los instrumentos de la paz total tendrán como finalidad prevalente el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos; estándares que eviten la impunidad y garanticen en el mayor nivel posible, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

La política de paz será una política de Estado, en lo concerniente a los acuerdos de paz firmados y a los que se llegaren a pactar, así como a los procesos de paz en curso y los procesos dirigidos al sometimiento y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. En tal sentido, cumpliendo con los requisitos constitucionales vinculará a las autoridades de todas las ramas y niveles del poder público, quienes deberán orientar sus actuaciones a su implementación y cumplimiento. Los gobiernos deberán garantizar los enfoques de derechos, diferencial, de género, étnico, cultural, territorial e interseccional en la construcción de las políticas públicas de paz.

De la política de paz de Estado hará parte la cultura de paz total, reconciliación, convivencia y no estigmatización, para ello, contará con la participación de la sociedad civil, incluyendo los espacios del sector interreligioso. La política de paz garantizará el respeto a la libertad religiosa y de cultos.

c. En el marco de la política de paz, el Gobierno podrá tener dos tipos de procesos:

(i) Negociaciones con grupos armados organizados al margen de la ley con los que se adelanten diálogos de carácter político, en los que se pacten acuerdos de paz.

Se entenderá por grupo armado organizado al margen de la ley, aquel que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas.

(ii) Acercamientos y conversaciones con grupos armados organizados o estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, con el fin de lograr su sometimiento a la justicia y desmantelamiento.

Se entenderá por estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, aquellas organizaciones criminales conformadas por un número plural de personas, organizadas en una estructura jerárquica y/o en red, que se dediquen a la ejecución permanente o continua de conductas punibles, entre las que podrán encontrarse las tipificadas en la Convención de Palermo, que se enmarquen en patrones criminales que incluyan el sometimiento violento de la población civil de los territorios rurales y urbanos en los que operen, y cumplan funciones en una o más economías ilícitas.

Se entenderá como parte de una estructura armada organizada de crimen de alto impacto a los ex miembros de grupos armados al margen de la ley, desmovilizados mediante acuerdos pactados con el Estado Colombiano, que contribuyan con su desmantelamiento.

Se creará una instancia de Alto Nivel para el estudio, caracterización y calificación de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto que puedan verse beneficiadas por esta ley. Dicha instancia debe ser coordinada por el Ministerio de Defensa Nacional y contará con la participación de la Dirección Nacional de Inteligencia y el Alto Comisionado para la Paz.

ARTÍCULO 6°. En el Plan Nacional de Desarrollo y en los Planes de Desarrollo Locales de las entidades territoriales se fijarán políticas, programas y proyectos, dirigidos al cumplimiento de los acuerdos de paz pactados y el logro de la paz, así como el desarrollo social y económico equitativo, la protección de la naturaleza y la integración de las regiones, en especial, los municipios más afectados por la violencia o aquellos en los que la presencia del Estado ha sido insuficiente, a través de la promoción de su integración e inclusión. Lo anterior, con el propósito de alcanzar los fines del Estado, contenidos en el artículo 2° de la Constitución Política, un orden justo democrático y pacífico, la convivencia y la paz. El cumplimiento de los acuerdos de paz pactados deberá estar acompañado de partidas presupuestales garantizadas por el Gobierno Nacional.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior estará sujeto a la disponibilidad presupuestal de las entidades territoriales.

El Plan Nacional de Desarrollo y los Planes de Desarrollo Locales tendrán un capítulo denominado "Proyectos, políticas y programas para la construcción de paz".

"PARÁGRAFO 1°. *En los Planes de Desarrollo de las entidades territoriales ubicadas en zonas PDET se priorizará lo dispuesto en el Plan Marco de Implementación (PMI) y, en concordancia con ello, la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los Planes de Acción para la Transformación Rural (PATR), los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA), los Planes Nacionales Sectoriales (PNS), los Planes Integrales de Reparación Colectiva y los Planes de Retorno y Reubicación".*

11. *Ante los eventos desaparición forzada en Arauca en el primer semestre del año 2023 dejaron un saldo de 8 personas desaparecidas, ¿qué medidas se han tomado o se están tomando para esclarecer los hechos y buscar el retorno de los colombianos a sus hogares?*

De manera respetuosa, se indica que en virtud del Decreto 2647 de 2022 en su artículo 23, la Consejería Comisionada de Paz no es competente para responder este requerimiento.

En este sentido, dando cumplimiento al Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, modificado y adicionado por la Ley 1755 del 2015, se dio traslado del requerimiento a la Fiscalía General de la Nación para los trámites pertinentes, mediante OFI24-00211531.

12. *¿Qué estrategias está tomando el Alto comisionado para la paz, para proteger la vida de los araucanos? Logrando que esta población deje de tener el miedo latente de salir de sus casas o de recibir amenazas por el hecho de ser comerciantes o simplemente por tener una ideología diferente.*

Las estrategias realizadas desde la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, en desarrollo de la política pública de paz, para salvaguardar la vida y los derechos de la ciudadanía, son inicialmente dos:

a) Insistir en la paz negociada, la cual se desarrolla a través de la política pública establecida en la Ley 2272 de 2022, que permite que el Gobierno Nacional adelante procesos de paz con (i) Grupos Armados al Margen de la Ley, con naturaleza GAOMIL, y con Grupos Armados Organizados (GAO) y (ii) Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI), las cuales no tienen naturaleza política.

Los diálogos de paz se surten con grupos armados organizados al margen de la ley de naturaleza política. Este tipo de proceso de paz se ha denominado "*Mesas de Diálogos de Paz*" y como resultado se aspira a la suscripción de acuerdos de paz. En este sentido, actualmente se desarrollan cuatro (4) diálogos de carácter político con grupos armados al margen de la ley:

1. Ejército de Liberación Nacional -ELN. (suspendido)
2. Estado Mayor de los bloques de las FARC- EP
3. Segunda Marquetalia
4. Comuneros del Sur

Asimismo, la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, ha venido desarrollando conversaciones con los siguientes cinco (5) grupos armados organizados o estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, con el fin de lograr su sometimiento a la justicia y desmantelamiento:

1. Estructuras armadas organizadas de Medellín y El Valle de Aburrá.
2. Estructuras armadas organizadas de Buenaventura.
3. Estructuras armadas organizadas de Quibdó.

4. Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
5. Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.

b) Acordar ceses al fuego, los cuales se describen en la pregunta número 7 de la proposición 139.

13. ¿Qué medidas de seguridad implementó el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos y la transparencia del proceso electoral en un departamento tan golpeado por la violencia como Arauca?

Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta número 12 de la proposición 33.

14. Frente a las numerosas denuncias y reportes de organizaciones e instituciones sobre las irregularidades y hechos violentos que afectaron la jornada electoral, ¿qué balance hace el Gobierno Nacional sobre las fallas en la seguridad y las acciones implementadas para proteger los derechos políticos de la población araucana?

De manera respetuosa, se indica que en virtud del Decreto 2647 de 2022 en su artículo 23, la Consejería Comisionada de Paz no es competente para responder este requerimiento.

En este sentido, dando cumplimiento al Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, modificado y adicionado por la Ley 1755 del 2015, se dio traslado del requerimiento al Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior para los trámites pertinentes, mediante OFI24-00211551 y OFI24-00211564.

15. ¿Qué medidas se están planteando en la mesa de diálogos con el ELN y el EMC para la protección de los sujetos de especial protección, como lo son los dirigentes sindicales que han sido amenazados?

Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta número 14 de la proposición 33.

16. ¿Qué acciones se está adelantando desde el gobierno nacional para poner en la mesa el tema ambiental dentro del conflicto en Arauca?

Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta número 15 de la proposición 33.

17. ¿Qué acciones concretas se están llevando a cabo desde las mesas de negociaciones frente a la amenaza de las minas antipersona en municipios como Saravena, esto bajo el marco de la estrategia de Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA) y el cumplimiento del Tratado de Ottawa?

Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta número 16 de la proposición 33.

18. ¿El Alto Comisionado para la paz conoce que zonas actualmente se encuentran minadas en el territorio araucano? ¿Qué acciones se han tomado para proteger a las comunidades? ¿Se han realizado trabajos de desminado? ¿Quién está garantizando la seguridad de los araucanos?

Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta número 17 de la proposición 33.

19. Indique cuantos y en qué lugares de Departamento de Arauca se encuentran ubicados los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR).

Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta número 18 de la proposición 33.

20. ¿Qué medidas están tomando desde la mesa de diálogos para que cesen las retaliaciones contra los excombatientes en proceso de reincorporación, especialmente aquellos que están en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR)?

Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta número 19 de la proposición 33.

21. ¿cuál es la oferta institucional que ha llevado consigo la Comisión de Paz a Arauca en aras de una mayor presencia estatal y que brinde acompañamiento a la comunidad?

Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta número 20 de la proposición 33.

22. Arauca es uno de los departamentos con mayor afectación a los derechos humanos en el país, especialmente en el tema de homicidios selectivos. ¿Qué se está planteando en las mesas de diálogo para proteger los derechos humanos de la población civil?

Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta número 21 de la proposición 33.

23. ¿Cuáles han sido los compromisos acordados por los grupos al margen de la ley respecto de la población civil frente del cese al fuego bilateral?

Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta número 22 de la proposición 33.

24. ¿señor Alto Comisionado cuantos casos de reclutamiento infantil se han presentado en los últimos dos años en el Departamento de Arauca?

Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta número 23 de la proposición 33.

25. ¿Qué estrategias se están llevando a cabo desde el Gobierno nacional en cabeza del Alto Comisionado para evitar el reclutamiento infantil en Arauca?

Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta número 24 de la proposición 33.

26. ¿cuáles son las acciones que se están llevando a cabo para reducir el nivel de peligro hacia los pueblos étnicos en Arauca?

Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta número 25 de la proposición 33.

27. ¿Qué estrategias especiales se están tomando a través de Implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en el alcance del Gobierno Nacional para abordar la situación en Arauca?

Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta número 26 de la proposición 33.

28. *¿cómo ha verificado la Oficina la voluntad real de paz y de reinserción a la vida civil de los grupos armados al margen de la ley presentes en Arauca?*

En el Departamento de Arauca hacen presencia el ELN y estructuras del EMC-FARC. Con respecto al ELN, existe una mesa de diálogos y negociaciones, suspendida por el Gobierno Nacional y con una próxima reunión en Caracas a partir del 1 de noviembre donde se dialogará con la delegación del ELN, con presencia de los países garantes y los acompañantes: Misión de la ONU y Conferencia Episcopal. La reunión se realizará con el fin de evaluar las posibilidades de reactivación del proceso.

Por otro lado, con respecto a la Mesa de Diálogos de Paz (MDP) que adelanta el Gobierno Nacional y el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes (EMBF), a partir de la reunión extraordinaria de la Mesa de Diálogos de los días 04 y 05 de abril del 2024, dejó de participar en la MDP el Comando Conjunto de Oriente*, razón por la cual desde esta fecha la MDP no ha realizado actividades relacionadas con este departamento.

*Estructura de las disidencias de las antiguas FARC-EP del departamento de Arauca que participaban en esta Mesa de Diálogos de Paz.

Para más información remitirse a la respuesta de la pregunta número 27 de la proposición 33.

29. *¿Qué acciones concretas se han llevado a cabo para liderar, coordinar y participar en las mesas de conversaciones con estos grupos en el contexto de la situación en Arauca?*

En el marco del proceso con el ELN se desarrollaron un par de encuentros en Arauca, los cuales contaron con participación de una pluralidad social, gremial e institucional, para formular propuestas y recomendaciones frente al punto de participación para la paz, punto uno de la agenda acordada entre el gobierno Nacional y el ELN. De la misma manera, hubo presencia de la delegación de gobierno para los diálogos con el ELN, la cual sostuvo un intercambio con autoridades del departamento de Arauca y con líderes sociales, gremiales y políticos sobre los desarrollos de este proceso. Esta reunión se desarrolló en el mes de abril del 2024.

Con respecto a la Mesa de Diálogos de Paz (MDP) que adelanta el Gobierno Nacional y el EMBF, a partir de la reunión extraordinaria de la Mesa de Diálogos de los días 04 y 05 de abril del 2024, dejó de participar en la MDP el Comando Conjunto de Oriente, razón por la cual desde esta fecha la MDP no ha realizado actividades relacionadas con este departamento.

Sin embargo, entre la fecha de Instalación de la MDP, el 16 de octubre del 2024, y la fecha en que el Comando Conjunto de Oriente dejó de participar en la MDP, el 05 de abril del 2024, la MDP desarrolló tres actividades específicas en el departamento de Arauca:

- iii) El 18 de enero del 2024, la instalación de la Instancia Regional del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV) del cese al fuego en la ciudad de Arauca. Contó con la participación de la Iglesia Católica, representada por la Conferencia Episcopal de Colombia, y el Consejo Mundial de Iglesias.
- iii) El 16 y 17 de febrero del 2024, dos jornadas de diálogo social y humanitario de la MDP en la ciudad de Arauca, las cuales contó con la participación de autoridades civiles, entidades públicas y organizaciones de la población civil.
- iii) El 26 y 27 de febrero del 2024, visita de verificación en terreno del MVMV en los municipios de Tame y Puerto Rondón, esta visita contó con la participación de autoridades civiles, población civil y fuerza pública, y se relacionó con posibles violaciones a las Reglas y Compromisos del Cese al Fuego y al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en estos municipios.

Lo anterior, sumado a múltiples acciones de prevención y protección de posibles violaciones a las Reglas y Compromisos del Cese al Fuego y al Derecho Internacional Humanitario (DIH), en las que se incluyeron liberaciones de población civil, liberaciones de miembros de la fuerza pública, prevención de confrontaciones armadas con la fuerza pública, entre otros.

30. *¿Qué escenarios de participación y diálogo intersectorial se han promovido en Arauca para la construcción de una cultura de paz y convivencia?*

Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta número 29 de la proposición 33.

31. *¿cómo se ha consolidado información a partir del diálogo social y territorial en Arauca para la generación de diagnósticos y escenarios prospectivos que orienten las agendas de negociación y diálogo?*

De antemano es importante anotar que la información sobre temas estratégicos de Arauca es competencia del Departamento Nacional de Planeación, quien convocó a las autoridades institucionales de Arauca y a la sociedad civil a participar en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, proceso adelantado en el segundo semestre del 2022. Ahora bien, hay diversos procesos de diálogo

de diversas entidades del gobierno nacional con autoridades y procesos sociales en Arauca, tales como el Ministerio del Interior, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación, entre otras entidades. Estos diálogos y concertaciones son parte del proceso de transformación del territorio.

Con respecto a la Mesa de Diálogos de Paz (MDP) que adelanta el Gobierno Nacional y el EMBF, a partir de la reunión extraordinaria de la Mesa de Diálogos de los días 04 y 05 de abril del 2024, dejó de participar en la MDP el Comando Conjunto de Oriente. Debido a esto, desde esta fecha la MDP no ha realizado actividades relacionadas con este departamento.

Por su parte, como se señaló previamente, la MDP alcanzó a desarrollar dos jornadas de diálogo social y humanitario en el departamento de Arauca. Sin embargo, dado que en la MDP dejó de participar el Comando Conjunto de Oriente, no fue posible que desde la Mesa continuaran desarrollándose actividades de diálogo social con el departamento de Arauca.

32. *¿cómo se ha articulado la relación entre el Ministerio de Defensa, la Oficina del alto comisionado y las demás entidades del Gobierno Nacional, las empresas privadas, los organismos internacionales y las autoridades departamentales y locales en Arauca para la construcción de una paz estable y duradera?*

Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta número 30 de la proposición 33.

33. *¿Cómo se ha coordinado con la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Renovación del Territorio y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) en el marco de la implementación de los Acuerdos de Paz en Arauca?*

Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta número 31 de la proposición 33.

34. *¿Qué acciones y programas de pedagogía se han desarrollado en Arauca para promover el conocimiento de la política de paz, reconciliación y convivencia, y el contenido de los acuerdos y pactos suscritos?*

Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta número 32 de la proposición 33.

35. *¿Qué gestiones se han adelantado para obtener cooperación internacional en el marco de la implementación de las mesas de diálogos con el ELN y el EMC?*

Dado que tienen el mismo contenido, por favor remitirse a la pregunta número 33 de la proposición 33.

Proposición 121:

Respuesta a traslado del Ministerio del Interior mediante EXT24-00168677: Avance de las negociaciones de paz con los diferentes grupos al margen de la Ley.

a. Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional –ELN, la cual se encuentra suspendida.

Mediante la Resolución 047 del 06 de febrero de 2017, el Presidente de la República autorizó la instalación y desarrollo de una Mesa de Diálogo con el Ejército de Liberación Nacional-ELN.

El 21 de noviembre de 2022 el Gobierno del presidente Gustavo Petro, retomó las negociaciones con este grupo armado a partir de la sanción de la Ley 2272 de 2022, también llamada Ley de Paz Total. La Mesa de Diálogos de Paz fue autorizada a reanudar sus labores mediante la Resolución 264 del 15 de noviembre de 2022. Dicha Resolución contó con una aclaración (Resolución 195 del 10 de julio de 2023) y una modificación (Resolución 386 del 11 de diciembre de 2023).

Luego, a través de la Resolución 036 del 06 de marzo de 2023 y la Resolución 194 del 8 de julio de 2023 se reconoció la existencia de negociaciones y diálogos de carácter político con el Ejército de Liberación Nacional ELN -tendientes a facilitar su desarme y desmovilización, y se dictaron disposiciones relacionadas con la agenda de diálogos de paz.

Mediante las Resoluciones 275 del 06 de septiembre de 2023, 308 del 04 de octubre de 2023 y 144 del 10 de mayo de 2024 se designaron representantes del Gobierno Nacional para integrar el Mecanismo de Monitoreo y Verificación del Cese al Fuego Bilateral y Temporal de Carácter Nacional con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), decretado por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 1117 de 2023.

Durante el período comprendido entre noviembre de 2022 y hasta la fecha, se desarrollaron 6 ciclos de diálogos y 3 reuniones en las que se suscribieron 28 acuerdos y 14 protocolos.

En desarrollo de la Mesa de Diálogos de Paz con el ELN se han suscrito los siguientes acuerdos:

En el primer ciclo de diálogos, que se llevó a cabo entre el 21 de noviembre y el 12 de diciembre de 2022 en la República Bolivariana de Venezuela, las partes

acordaron: i) retomar como guía el acuerdo de agenda y los ejes esenciales firmados en marzo de 2016, con los ajustes realizados en este ciclo; ii) se estableció un acuerdo de institucionalización de la Mesa de Diálogos, referido al apoyo de la comunidad internacional en calidad de garantes y en calidad de acompañantes, así como de la Conferencia Episcopal de Colombia, al igual que definió la metodología de funcionamiento de la Mesa de Diálogos; iii) acuerdo parcial de atención de emergencia humanitaria, el cual se desarrolló en el Bajo Calima (Valle del Cauca) y el Medio San Juan (Chocó); iv) se estableció una estrategia sobre un plan de comunicaciones y pedagogía sobre la Mesa de Diálogos; y, v) se pactó un acuerdo de alivios humanitarios referidos a personas en situación crítica de salud y privados de la libertad del ELN.

En el segundo ciclo de diálogos, que se desarrolló entre el 13 de febrero y el 10 de marzo de 2023, en la sede de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), ubicada en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, se culminó con un resultado estructural para la Mesa de Diálogos, “El Acuerdo de México”, que contiene el horizonte político del proceso y una Nueva Agenda de Diálogos para la Paz. Adicionalmente, se suscribieron los acuerdos 7 y 8 con bases para acuerdos futuros en materia de participación de la sociedad en la construcción de la paz y de cese al fuego.

El 2 de mayo al 9 de junio siguiente, se desarrolló el tercer ciclo de la Mesa de Diálogos, en el que se derivaron importantes logros. Se firmó el Acuerdo No. 9 o “Primer Acuerdo de Cuba”, mediante el cual se creó el Comité Nacional de Participación (CNP), integrado por 81 personas de más de 30 organizaciones sociales, gremiales y distintos sectores de la sociedad, quienes construirían la propuesta metodológica para la participación de la sociedad civil en el proceso de paz con el ELN. Esta propuesta sería presentada a la Mesa de Diálogos y, luego de ser aprobada, establecería el procedimiento para la participación de la sociedad civil en la mesa.

En igual sentido, se firmó el Acuerdo No. 10 o “Segundo Acuerdo de Cuba”, referido al establecimiento de un Cese al Fuego Bilateral y Temporal de Carácter Nacional (CFBNT), protocolizado por el Gobierno nacional a través del Decreto 1117 del 5 de julio de 2023 y prorrogado hasta el 3 de agosto del presente año, con el fin de: cesar las afectaciones a las comunidades que se encuentran en medio de las confrontaciones armadas; facilitar la atención humanitaria en los territorios más afectados por dichas confrontaciones y las diversas dinámicas de violencias en estos; y, facilitar la participación de las comunidades, y la sociedad en general, en el proceso de paz con este grupo insurgente. Resulta importante aclarar que este protocolo cuenta con otros complementarios como el protocolo de acciones específicas, el del Mandato del MMV (metodología), de veeduría social y de pedagogía del CFBNT.

Entre el 14 de agosto y el 4 de septiembre de 2023 se desarrolló el cuarto ciclo de diálogos en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, del que se derivó: el segundo acuerdo de Caracas, relacionado con la determinación de zonas críticas para desarrollo de dinámicas humanitarias y transformaciones

territoriales que fortalezcan a las comunidades, en el Bajo Calima, San Juan, Bajo Cauca, Nordeste Antioqueño y Sur de Bolívar; el marco político y conceptual para adelantar dinámicas humanitarias; y, el acuerdo parcial relativo al desarrollo de mecanismos concretos para atención de presos políticos y personas privadas de la libertad reconocidas como integrantes del ELN.

Como se informó públicamente al cierre del cuarto ciclo, durante las siguientes semanas las delegaciones del Gobierno Nacional, el ELN y funcionarios de la Consejería, desarrollarían tareas relativas al cese bilateral del fuego, pedagogía y participación social para la paz.

El quinto ciclo se desarrolló entre el 30 de noviembre al 17 diciembre de 2023 en los Estados Unidos Mexicanos y concluyó con los siguientes compromisos, según el Comunicado Conjunto No. 19 de las partes de la Mesa de Diálogos:

"1. La reafirmación del puerto de llegada de este proceso de paz, acordado en el II Ciclo realizado en Ciudad de México en marzo de este año; 2. La suspensión de las retenciones con fines económicos, según el ELN, en el marco de la prolongación del Cese al fuego prevista para finales de enero del año entrante; 3. La creación de condiciones para la prórroga del Cese al fuego, el Mecanismo de Veeduría y Verificación (MMV) y medidas frente al accionar de fuerzas paramilitares y de distintos grupos armados; 4. La creación de condiciones económicas y financieras para la materialización del Acuerdo de México; 5. La reanudación del proceso de participación de la sociedad, la culminación de su fase de diseño en abril del año próximo y la creación de una red nacional de participación; 6. La conformación de ocho (8) zonas críticas, de acciones humanitarias y de una comisión de la Mesa para coordinar los planes de atención y transformaciones sociales de las zonas".

El sexto ciclo de diálogos se adelantó en La Habana, Cuba, entre el 20 de enero al 5 de febrero de 2024 y concluyó con: el protocolo de evaluación, prórroga o suspensión del cese al fuego; el acuerdo sobre la continuidad de la fase de diseño de la participación de la sociedad en la construcción de paz; prórroga del cese al fuego bilateral, nacional y temporal CFBTN; la inclusión de acciones en el protocolo de acciones específicas para el CFBTN; el acuerdo de creación del Fondo Multidonante para el proceso de paz; el acuerdo sobre comunicaciones de la mesa de diálogos para la paz; y, la suspensión unilateral de las retenciones de carácter económico, según la denominación acuñada por el ELN.

Entre el 19 y el 25 de mayo del presente año las partes se reunieron en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, y firmaron el Acuerdo No. 28 "Acuerdo sobre el desarrollo del proceso de participación de la sociedad en la construcción de paz", que dio por cumplido y cerrado el primer punto de la Nueva Agenda de Diálogos para la Paz.

Aun así, a lo largo de los diálogos, se presentaron diversos acontecimientos que debilitaron el proceso de paz. El 22 de noviembre de 2023, el ELN decidió abandonar la Instancia Nacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación al

Cese al Fuego. Posteriormente, el 19 de febrero de 2024, el grupo emitió una declaración pública anunciando el congelamiento de la Mesa de Diálogos.

El 26 de julio de 2024, la delegación del gobierno rechazó enérgicamente el pronunciamiento del ELN sobre presuntos incumplimientos por parte del gobierno e insistió en la necesidad de continuar con el diálogo. Consecuentemente, el 3 de agosto de 2024 se venció el cese al fuego con dicho grupo armado, debido al estancamiento de la Mesa y la falta de claridad de parte del ELN.

El 9 de agosto de 2024, el Presidente envió al ELN una carta con una propuesta confidencial en relación con el anuncio del congelamiento del diálogo, como un gesto de compromiso para seguir negociando y avanzar en el proceso. Sin embargo, el 13 de agosto de 2024, el ELN rechazó la propuesta.

El 26 de agosto de 2024, el ELN reanudó operaciones y re-comenzó con la práctica de voladura de oleoductos, y el 17 de septiembre de 2024 perpetraron un atentado contra un batallón en Puerto Jordán, Arauca. Ante estos hechos, que obstaculizan la posibilidad de alcanzar una paz negociada, el 18 de septiembre de 2024, la delegación del Gobierno Nacional emitió el siguiente comunicado:

"Nuestra Delegación de Paz manifiesta su absoluto rechazo al ataque perpetrado por el ELN a la base militar de Puerto Jordán, Arauca. Sentimos profundamente las víctimas fatales y los heridos de los miembros de la Fuerza Pública. Acompañamos el dolor de sus familiares ante este nuevo hecho de violencia que cobra la vida de jóvenes colombianos. Durante estos meses el Gobierno ha hecho llegar al ELN múltiples propuestas. Hoy el proceso de diálogo queda suspendido. Su viabilidad está severamente lesionada, y su continuidad sólo puede ser recuperada con una manifestación inequívoca de voluntad de paz del ELN. Bogotá D.C., 18 de septiembre de 2024".

El 10 de octubre la Delegación del Gobierno realizó un comunicado a la opinión pública:

"Durante los meses de crisis que ha tenido el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional – ELN, la Delegación de Paz del Gobierno Nacional ha insistido en el diálogo en la Mesa como instancia para resolver los problemas surgidos, buscar la prórroga del cese al fuego, cumplir con el compromiso firmado de dar continuidad a la participación de la sociedad en la construcción de la paz, e impulsar todos los puntos de la agenda contenida en el Acuerdo de México.

Al anunciar la suspensión de los diálogos, señalamos que se requería un gesto que demostrara la voluntad del ELN de avanzar en este proceso. Por esta razón, saludamos hoy la comunicación de su Delegación de Paz del pasado 9 de

octubre. Aceptamos la invitación para llevar a cabo una reunión que nos permita abordar todos estos asuntos y retomar nuestro diálogo en busca de generar los hechos de paz que nos demanda la sociedad colombiana.

Nuestra Delegación agradece los intensos esfuerzos de la Iglesia Católica, el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, los países garantes y acompañantes del proceso, por sus buenos oficios y su permanente acompañamiento a la Mesa de Diálogos.

También valora y agradece cada una de las expresiones, declaraciones y gestiones realizadas por tantas organizaciones, plataformas, agrupaciones, lideresas y líderes de sociedad civil y los territorios para lograr que la Mesa de Paz reinicie sus labores. ”

Los Acuerdos son de carácter público y pueden consultarse en el siguiente enlace: <https://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/dialogos-el/Paginas/Recursos-y-documentos.aspx>

b. Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno nacional y Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte, Comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes FARC-EP.

Mediante Resolución 309 del 13 de octubre de 2023 se instaló la Mesa de Diálogos de Paz con el EMC, que inició el 16 de octubre de 2023 en Tibú (Norte de Santander).

De manera previa a la instalación de la mesa, en el desarrollo de los acercamientos exploratorios y Ceses al Fuego pactados, el Gobierno Nacional reconoció a miembros representantes del grupo armado mediante las Resoluciones: 137 del 29 de mayo de 2023, 160 del 7 de junio de 2023, 196 del 10 de julio de 2023, 197 del 10 de julio de 2023, 212 del 24 de julio de 2023, 307 del 04 de octubre de 2023, 388 del 12 de diciembre de 2023, 005 del 11 de enero de 2024, 019 del 6 de febrero de 2024, 023 del 22 de febrero de 2024, 222 del 24 de junio de 2024, 280 del 22 de julio de 2024 y 323 del 23 de agosto de 2024.

Asimismo, se designaron para los mismos fines delegados del Gobierno Nacional mediante las resoluciones: 205 del 11 de julio de 2023, 387 del 12 de diciembre de 2023, 406 del 22 de diciembre de 2023 y 020 del 14 de febrero de 2024.

En el avance de los diálogos hubo una división al interior de este grupo armado. En vigencia del Cese al Fuego (Decreto 016/2024), el Gobierno nacional tomó la decisión de suspenderlo en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño el 17 de marzo de 2024 (Decreto 385/2024), debido a las acciones violentas del grupo armado contra autoridades y comunidades indígenas en el

Cauca. Los frentes de sur occidente, Guaviare y Arauca decidieron abandonar la Mesa de Diálogos de Paz, condicionando su participación a la restauración del cese al fuego en esos tres departamentos y suspendieron cualquier actividad anteriormente acordada. De esta manera, la Mesa de Diálogos de Paz continuó su funcionamiento con la presencia de 14 frentes que hacían parte del EMC, que actúan en zonas de los departamentos de Amazonía, Putumayo, Caquetá, Meta, Norte de Santander, Sur de Bolívar y Antioquia y que representan del 40 al 45% de lo que era el EMC.

Actualmente, continúa el proceso de paz con la Mesa reconfigurada desde abril de 2024. El próximo 15 de octubre se cumplen seis meses de cese al fuego y acciones por la paz con los bloques que se mantienen en la Mesa de Diálogos. Los resultados de este cese al fuego han sido positivos en los indicadores de eventos violentos más graves prohibidos en los protocolos, ya que, en las zonas de presencia de los Bloques que continúan en la Mesa, se ha presentado un descenso notable de los indicadores de daño: entre abril y septiembre de 2024 no se registraron asesinatos de líderes(as), ni de firmantes del acuerdo de paz de 2016 y otras personas protegidas según el DIH; tampoco se registran víctimas de secuestro extorsivo, ni de masacres, torturas. En el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación no han llegado denuncias sobre reclutamiento de niños y niñas. El MVMVM que ha venido funcionando, con interrupciones, ha presentado informes y recomendaciones que buscan el estricto cumplimiento de los compromisos de respeto a la población civil.

Se han identificado cuatro zonas de intervención prioritaria para promover la presencia institucional hacia la transformación territorial y paso de lo ilegal a la legalidad. Esas zonas se ubican en el Yarí-Caquetá, sur del Meta, norte de Antioquia y Tibú, Catatumbo. Se ha avanzado en la identificación y formulación de acciones precisas con concurrencia de actores institucionales del orden nacional, autoridades territoriales, de la mesa de diálogos y, especialmente, de las comunidades locales. El mayor reto consiste en pasar a la implementación con resultados a corto plazo y el tránsito a una más amplia territorialización de la paz.

La Mesa de Diálogos de Paz ha desarrollado diálogos sociales en las zonas y regiones de intervención, en los cuales se avanza en la construcción de la agenda para el Acuerdo de Paz en los temas establecidos como capítulos de un texto final: tierra, territorio, ambiente, asuntos económicos y políticos, sobre seguridad y armas, justicia y fin del conflicto.

Además, se han definido como asuntos urgentes, avanzar en la georreferenciación, territorialización de la paz, en la agenda ambiental en la Amazonía, Catatumbo y Antioquia, en responder a las recomendaciones del MVMV sobre los graves problemas de exacción, confrontación entre grupos armados con daño a la vida y a la población civil, agresión a organizaciones que no se someten y a firmantes en áreas de disputa.

Se ha dado tratamiento especial y solicitud de esclarecimiento a situaciones críticas que se han presentado en estos meses, como el transporte en caravana de 2 personas con orden de captura y 2 con porte de arma; el bloqueo o cerco a una unidad de las FFMM por parte de campesinos en área de influencia del actor armado; la operación de la fuerza pública contra infraestructura vial no autorizada en área del Parque Chiribiquete; el desplazamiento de firmantes en Miravalle; afectaciones a población en el Bajo Caguán; enfrentamiento con la Segunda Marquetalia en el sur del Meta con 11 personas muertas fuera de combate; atentado a con minas antipersona con asesinato de 8 soldados en Valdivia.

En el desarrollo de esta mesa se llevaron a cabo los siguientes ciclos:

- Instalación de la Mesa de Diálogos de Paz, 16 de octubre de 2023, municipio de Tibú, Norte de Santander.
- Ciclo 1: del 25 al 28 de octubre de 2024, en la ciudad de Bogotá D.C.
- Ciclo 2: Del 2 al 11 de diciembre de 2023, en el departamento del Cauca.
- Ciclo 3: Del 09 al 18 de enero de 2024, en la ciudad de Bogotá D.C.
- Ciclo 4: Del 03 al 09 de marzo de 2024, en la ciudad de San Jose del Guaviare, Guaviare.
- Ciclo 5: Del 11 al 15 de julio de 2024 en la ciudad de Bogotá D.C.
- Ciclo 6: Del 12 de octubre al 20 de octubre de 2024 en la ciudad de Bogotá D.C.

Como resultado de este sexto ciclo, el 15 de octubre de 2024, mediante el Decreto 1280 se prorrogó el Cese al Fuego Bilateral y Temporal con Respeto a la Población Civil, entre el gobierno Nacional y el EM, desde el 16 de octubre de 2024 hasta el 15 de abril de 2025. Este Cese posee un componente especial, toda vez que su enfoque no será solamente monitorear el cese de acciones ofensivas entre las partes, sino también contribuir en generar las condiciones para la implementación de un plan de transformaciones territoriales para la Paz en dos regiones, en las cuales se identificaron cuatro zonas de intervención: Región 1: a) Catatumbo con eje en Tibú; b) Norte – Nordeste – Bajo Cauca Antioqueño; c) Sur de Bolívar; Región 2: a) San Vicente de Caguán con eje en las sabanas del Yará y otras áreas del Caquetá; b) Sur del Meta en los municipios de Vista Hermosa, Puerto Rico, incluyendo áreas de San José del Guaviare; c) y áreas del Putumayo.

c. Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno nacional y la Segunda Marquetalia.

Mediante la Resolución no. 064 del 28 de febrero de 2024 se autorizó la instalación de la Mesa de Diálogos de Paz con la Segunda Marquetalia. Asimismo, se reconocieron miembros representantes del grupo armado a través de las resoluciones: 065 del 28 de febrero de 2024, 145 del 14 de mayo de 2024, 258 del 8 de julio de 2024 y 322 del 23 de agosto de 2024. Adicionalmente, se designaron representantes del Gobierno Nacional mediante la Resolución 064 del 28 de febrero de 2024 y la Resolución 0220 del 19 de junio de 2024.

El 05 de junio del 2024 fue firmado el primer acuerdo entre la delegación del Gobierno nacional y la delegación de la Segunda Marquetalia, "*Acuerdo para el inicio formal de la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno nacional y la Segunda Marquetalia-EB*", en la ciudad de Caracas, Venezuela. Allí se establece el principio de "*acuerdo pactado, acuerdo cumplido*". De igual manera, los puntos básicos que incluirá la agenda de diálogos y negociación, que son:

1. Desescalamiento del conflicto y alistamiento de los Territorios de Paz.
2. Construcción de Territorios de Paz.
3. Víctimas como sujeto social transformador.
4. Condiciones para la convivencia pacífica.
5. Implementación y verificación.

Entre el 24 al 29 de junio de 2024 se desarrolló el primer ciclo de diálogos de paz, obteniendo como resultado fundamental el acuerdo de "*medidas tempranas de desescalamiento y acciones humanitarias urgentes*", enfocadas en el desescalamiento integral del conflicto por medio de acciones con enfoque de orden económico, militar, ambiental y de reparación de las víctimas. Estas acciones incluyen la voluntad unilateral de la Segunda Marquetalia de no permanecer armada ni uniformada en cabeceras municipales, cascos urbanos, vías terrestres y fluviales primarias y secundarias; la entrega de las personas que tenga retenidas; y, al respeto y garantías a la población civil, especialmente, a las comunidades de especial protección constitucional en los territorios donde hace presencia la Segunda Marquetalia.

Así mismo se definió el evento de presentación del acuerdo, la metodología y el cronograma para la identificación de proyectos sociales y económicos de impacto rápido junto con las comunidades en la ciudad de Tumaco, Nariño. Finalmente, se acordó la georreferenciación en los municipios, corregimientos y veredas donde la Segunda Marquetalia tenga presencia.

El 03 de septiembre de 2024, el jefe de la Delegación del Gobierno se reunió con los delegados de la Segunda Marquetalia EB y acordaron la continuación de los diálogos de paz, que contemplan las siguientes acciones:

- i. Reunión preparatoria en el municipio de Tumaco, con las debidas garantías de seguridad.
- ii. Realización de un evento colectivo los días 21 y 22 de septiembre en el mismo municipio, con la participación de líderes sociales, representación de distintos sectores de la comunidad y autoridades del orden territorial y nacional.
- iii. Realización del Segundo Ciclo de negociaciones en la ciudad de La Habana, Cuba.

El día 19 de septiembre la delegación del Gobierno nacional, asistió a tres espacios de reunión con diversos sectores gremiales en la ciudad de Pasto, Nariño, iniciando con el sector empresarial, seguido del sector académico y centros de investigación y finalmente con agendas de cooperación, con el

propósito de socializar avances de la Mesa de diálogos entre el Gobierno nacional y la delegación de la Segunda Marquetalia – EB.

Del 20 al 23 de septiembre, se llevó a cabo el “Encuentro por la paz y el desarrollo con justicia social del pacífico nariñense y piedemonte costero”, donde se logró propiciar espacios de articulación y construcción entre, delegados de Ministerios y entidades gubernamentales como Gobernación de Nariño, Dirección de Sustitución de Uso Ilícito de la Agencia de Renovación del Territorio, Agencia del Pacífico Nariñense Agencia de Renovación de Territorio, Ministerio de Interior, Ministerio de cultura, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación, Departamento Nacional de Planeación. Ministerio de Agricultura, Ministerio de Defensa, Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Ministerio de Minas de Energía, Universidad Nacional de Tumaco, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fondo Colombiano en Paz, Gobernación de Nariño, Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y la delegación del Gobierno, con el propósito dialogar con las organizaciones sociales en los espacios de mesas de trabajo con los siguientes temas:

- Educación y cultura de paz
- Territorio, ambiente y biodiversidad
- Seguridad humana y paz territorial
- Democracia y participación
- Transición económica y social

El 21 de septiembre se instaló el “Encuentro por la paz y el desarrollo con justicia social del pacífico nariñense y piedemonte costero” con la asistencia y participación de más de 350 líderes y lideresas de la región, en las mesas de trabajo dialogaron junto a delegados del Gobierno nacional, delegados de la Segunda Marquetalia-EB e instituciones del Gobierno Nacional acerca de las necesidades, propuestas y reflexiones para las transformaciones territoriales. El gobierno nacional acordó con las organizaciones sociales una próxima reunión para concretar la implementación de iniciativas de impacto rápido.

El último día del encuentro, desarrollado el 22 de septiembre, las organizaciones sociales de los municipios de la Costa Pacífica Nariñense realizaron una masiva movilización como un acto de respaldo a la Mesa de Negociación de Paz. Finalmente, se anunció la realización del segundo ciclo de negociación en la República de Cuba en la tercera semana de octubre de 2024.

d. Mesa de Diálogos de Paz con Comuneros del Sur en el departamento de Nariño.

Como antecedente relevante de esta mesa, el 9 de marzo de 2024 se desarrolló un evento, liderado por el Presidente de la República, donde se declaró al departamento de Nariño como Región de Paz e igualmente se pronunciaron las comunidades en cuanto a la necesidad de exigir a los actores armados y al Gobierno nacional la realización de acciones para construcción de paz territorial en el departamento.

En respuesta a ello, Comuneros del Sur, que pertenecía al Ejército de Liberación Nacional (ELN), el 13 de marzo de 2024 comunicó públicamente su intención de construcción territorial de paz en dicho departamento. Durante el primer semestre de 2024 se adelantaron acercamientos exploratorios con dicha estructura, con el fin de que en el desarrollo de la construcción de paz en el departamento participe la sociedad civil. En respuesta a ello, el 19 de julio de 2024 se desarrolló el evento de presentación de la Instancia para la Co-construcción de Paz Territorial en Nariño, cuya agenda de trabajo incluyen mecanismos de participación social efectiva.

Así mismo, se ha construido una hoja de ruta para el trabajo relativo a la construcción de paz territorial en el departamento de Nariño.

El 15 y 26 de agosto de 2024 se llevó a cabo la segunda sesión de la Instancia para la Co-construcción de Paz Territorial en Nariño. En este encuentro participaron facilitadores del Gobierno nacional, de Comuneros del Sur, y de la Gobernación de Nariño, con el acompañamiento de la MAPP/OEA, la Embajada del Reino de los Países Bajos y la Conferencia Episcopal.

En esta ocasión, los alcaldes de los 10 municipios priorizados en el proceso: Andes Sotomayor, La Llanada, Mallama, Santa Cruz de Guachavés, Guachucal, Cumbal, Samaniego, Providencia, Barbacoas y Ricaurte, se comprometieron en un plan de trabajo de corresponsabilidad con el Gobierno departamental y nacional para el desescalamiento de las violencias, la implementación de transformaciones territoriales y el tránsito de los integrantes de grupo armado ilegal Comuneros del Sur hacia una ciudadanía plena.

El objetivo de esta sesión fue fortalecer los planes de transformación territorial y dar solución a la grave situación de abandono que ha afectado a la región durante años, a través de una acción rápida y articulada entre los tres niveles de gobierno (autoridades locales, Gobernación departamental y Gobierno nacional) que asegure el cumplimiento de los compromisos de la Instancia y su implementación rápida y efectiva.

Los resultados de la Sesión Plenaria incluyeron un trabajo conjunto con más de 22 instituciones del orden nacional, en el que se establecieron tareas y compromisos que serán revisados y reportados en informes periódicos durante las sesiones mensuales de la Instancia, con el fin de cumplir con la ruta restaurativa y superar las violencias armadas.

Mediante la Resolución 369 del 13 de septiembre de 2024 se autorizó la instalación de una Mesa de Diálogos de Paz entre los representantes autorizados por el Gobierno Nacional y los miembros representantes del grupo armado. La Mesa de Diálogos de Paz estará dirigida a obtener soluciones al conflicto armado, lograr la efectiva aplicación del derecho internacional humanitario, el respeto de los derechos humanos, el cese de hostilidades y afectaciones a población civil y

el pacto de acuerdos de paz tendientes a facilitar el desarme y la desmovilización y el tránsito a la paz del grupo armado en mención.

El 17 de septiembre de 2024 en Samaniego, Nariño, se lanzó oficialmente el proceso de desminado humanitario, como una acción para desescalar las violencias y transformar el territorio. Asimismo, el 19 de septiembre se definió el primer acuerdo de la Mesa. El Frente Guerrillero Comuneros del Sur afirmó: "(...) queda fuera de nuestra política, la práctica del secuestro. No incorporaremos menores de edad a nuestra fuerza. Trabajaremos en el cese al fuego bilateral, el desminado humanitario seguirá adelante en nuestro territorio".

Seguidamente, el 19 de septiembre pasado, la Mesa para la Co-construcción de Paz Territorial en Nariño, dio a conocer su primer Acuerdo. En él, se pactaron los siguientes puntos:

- d) Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, en el que, a través del trabajo de una mesa técnica, busca establecer los protocolos para llegar a un cese al fuego y de hostilidades definitivo, iniciando con la suspensión de los secuestros, reclutamiento de menores y uso de minas antipersonal, por parte de Comuneros del Sur.
- d) Zonas territoriales de concentración, para que antes de finalizar este año, el 30% de la tropa de Comuneros del Sur inicie su concentración en una ubicación definida.
- d) Destrucción de insumos de guerra por parte de Comuneros del Sur, empezando en 2024 y con la veeduría de la MAPP/OEA, los Países Bajos y la Conferencia Episcopal de Colombia.
- d) Desminado humanitario, con la ampliación de la acción integral contra minas a otros territorios.

La materialización de este acuerdo marca un hito en la construcción de paz territorial en el departamento de Nariño.

En el mes de octubre se llevó a cabo la Primera Reunión de la Mesa Técnica sobre Cese al Fuego: Avances clave en la Co-construcción de Paz en Nariño. En un comunicado público se indicó que, en esta primera reunión de la Mesa Técnica se abordó el cese al fuego, la zona de ubicación y la destrucción de instrumentos de guerra en Nariño. La reunión fue encabezada por Carlos Erazo, jefe de la Delegación del Gobierno nacional, y contó con la participación de delegados de Comuneros del Sur, representantes del Ministerio de Defensa, militares y policiales que conforman la Mesa, así como acompañantes permanentes de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y de los Países Bajos.

En la reunión, determinaron las condiciones y normas legales a través de la construcción protocolos en relación con el cese al fuego bilateral y la creación de la zona de localización para el 30% de los Comuneros del Sur en el municipio de

Cumbal. También se discutió la meta de destruir los instrumentos de guerra antes de finalizar el 2024.

Además, se anunció la cuarta sesión en Cumbal de la Mesa para la Co-construcción de Paz Territorial en Nariño, donde se espera trabajar en los tres ejes mencionados y presentar ante la comunidad los primeros logros de las transformaciones socioeconómicas en el territorio, así como alcanzar un acuerdo clave para el desescalamiento de la violencia.

e. Espacio de Conversación Socio jurídico con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá.

Por medio de la Resolución 138 del 29 de mayo 2023 se autorizó la instalación del espacio de conversación con las estructuras armadas y se designaron a los representantes del Gobierno. Luego, mediante la Resolución 139 del 29 de mayo de 2023 se reconocieron voceros de dichas estructuras para participar en el espacio de conversación. La firma de estas resoluciones presidenciales se dio luego de que las estructuras armadas manifestaran, mediante un comunicado, su voluntad de participar en la Política de Paz Total del Gobierno Nacional.

Con base en estos avances, el 2 de junio de 2023 se instaló el Espacio de Conversación Socio jurídico de Construcción de Paz Urbana con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá.

A partir de ese momento, durante el 2023 se llevaron a cabo una serie de reuniones de plenaria entre la delegación del Gobierno Nacional y los voceros de las estructuras para el espacio. En estas plenarias se deliberó sobre los protocolos de funcionamiento del Espacio de Conversación Socio jurídico, de comunicaciones y el de acciones para la protección de la vida. Así mismo, se aprobó la agenda una ruta de asuntos de conversación socio jurídica que requiere el involucramiento de las autoridades municipales y departamental de Antioquia, y de los sectores gremiales y empresariales, de manera que se convierta en una agenda de ciudad y del área metropolitana.

La política de paz implica que la paz es con todos y que debe ser alejada de cualquier visión partidaria. La ruta mencionada, contiene 6 puntos que involucran no sólo el des-escalamiento de las violencias sobre la sociedad, sino también la transición de los grupos armados a una condición de legalidad en el que las víctimas, su participación y los derechos a verdad justicia y reparación sean satisfechos, así como la transformación de las economías ilegales mediante la generación de economías legales. Esta ruta busca facilitar la conversación entre las partes, y su objetivo final, ya expresado como voluntad por parte de las bandas, debe ser el desmonte de las estructuras armadas ilegales de Medellín y Valle de Aburrá.

El esfuerzo principal hoy es lograr integrar a los diferentes sectores de ciudadanía, incluyendo los gobiernos locales, en este proceso. La interlocución con los jefes de las bandas y con un sector de la sociedad es insuficiente para transformar las condiciones de violencia e ilegalidad que persisten en Medellín y el Valle de Aburrá desde hace más de 30 años, territorio donde estas estructuras organizadas de crimen de alto impacto han sido actores de primer orden.

f. Espacio de Conversación Socio jurídico con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Quibdó.

El 30 de agosto de 2023 se emitió la Resolución 264 con la cual se autorizó la instalación del espacio de conversación socio jurídico de construcción de paz urbana con las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto de Quibdó y se designaron los representantes del Gobierno nacional.

El 4 de septiembre de 2023 el Presidente de la República reconoció en la Resolución 274 de 2023 a los voceros de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto autodenominadas: Los Mexicanos, Locos Yam y RPS, que involucran a cerca de 700 jóvenes para que participen en el Espacio de Conversación con el propósito de lograr el sometimiento a la justicia.

Luego, mediante la Resolución 232 del 26 de junio de 2024 se designó al representante autorizado del Gobierno nacional en el Espacio de Conversación Sociojurídico con estas estructuras.

A la presente fecha se definió un plan de acción conjuntamente entre el Gobierno nacional y los voceros de las estructuras, con el fin de establecer acciones concretas para permitir el avance del Espacio, la construcción de paz urbana en Quibdó y el establecimiento de las condiciones de sometimiento, de conformidad con lo establecido en la ley.

Por último, el día 8 de agosto de 2024 las estructuras armadas de Quibdó Los Mexicanos, Locos Yam y RPS se comprometieron a reducir la extorsión en la ciudad en contra de profesores, personal de salud, obras comunitarias en los barrios, mejoras de vivienda y construcciones menores, acarreos de material de construcción y taxis.

La situación en Quibdó ha venido empeorando por la decisión y avance del Clan del Golfo sobre esta ciudad, situación expuesta por la Consejería de Paz ante el congreso el pasado 3 de septiembre.

g. Espacio de Conversación Socio jurídico con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Buenaventura.

A través de Resolución 210 del 21 de julio de 2023 se instaló el Espacio de Conversación Socio jurídico con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Buenaventura y se designaron los representantes del Gobierno. El 21 de julio de 2023, a través de la Resolución 211, se reconocieron

los representantes de las dos estructuras armadas autodenominadas Shottas y Espartanos, quienes integrarían los Espacios de Conversación Socio jurídico. Finalmente, el 26 de junio de 2024, mediante la Resolución 231, se designaron nuevamente a representantes del Gobierno Nacional.

La apertura de este espacio se dio luego de que dichas estructuras asumieran públicamente su compromiso con la disminución de las acciones violentas y el apaciguamiento de las confrontaciones entre sí por un periodo inicial de un mes.

Las delegaciones partieron de un primer acuerdo de reducción de la violencia, incluyendo cero homicidios y la disminución de conductas tales como la extorsión y el hurto. Para su verificación, se estableció un mecanismo de recepción de solicitudes y denuncias.

Además, desde la instalación de los espacios se han realizado de manera permanente: plenarias, sesiones de la subcomisión de seguridad, sesiones de la subcomisión de trabajo comunitario y participación, así como sesiones de la subcomisión de articulación institucional y trabajo estratégico; simultáneamente, se elaboró la propuesta de temas de Conversación, que se encuentra en proceso de concertación.

El 1 de agosto de 2024, la Alcaldía Distrital, la Iglesia Católica, líderes de la Comuna 12 y campesinos de Cisneros, miembros del Consejo Comunitario de Bahía Málaga, reactivaron el mercado popular campesino en la plaza de Matías Mulumba, en el marco del Espacio de Conversación Sociojurídico en Buenaventura. Esta reactivación es una medida orientada a desescalar algunas de las violencias más recurrentes en el puerto, como la cartelización de los productos de la canasta básica y la extorsión, fenómenos que han debilitado el comercio en el distrito portuario y afectado la vida de sus habitantes.

Junto con la reducción de la extorsión, los principales temas que se están trabajando en este Espacio de Conversación son la reducción de los homicidios por enfrentamientos entre las estructuras armadas "Shottas" y "Espartanos" y la reducción del reclutamiento. Para lograr este objetivo, se evalúa el fortalecimiento de procesos productivos, ocupacionales y culturales, brindando a la juventud bonaverense alternativas de sostenimiento distintas a la violencia.

El 9 de agosto de 2024, en un comunicado público, los grupos "Shottas" y "Espartanos" se comprometieron a desarrollar acciones para disminuir la violencia y generar confianza en torno a la Paz Urbana. Los compromisos incluyen reducir el hurto, rechazar la extorsión, eliminar las fronteras invisibles y establecer una tregua entre los grupos por un período inicial de 30 días.

Este compromiso ha tenido un impacto positivo en los índices de criminalidad de la ciudad: en agosto de 2024, se registró un solo homicidio en la zona urbana de Buenaventura, una cifra significativamente menor en comparación con meses y años anteriores. Las comunidades reportan la ausencia de balaceras y otros actos de violencia que eran comunes en varias zonas de la ciudad.

Finalmente, el cumplimiento de estos compromisos será monitoreado por un sistema integrado por las comunidades locales y observadores internacionales.

El 18 de septiembre de 2024 la Delegación del Gobierno realizó el siguiente comunicado a la opinión pública:

"La Delegación del Gobierno Nacional para adelantar el Espacio de Conversación Socio-Jurídico saluda el pronunciamiento que han hecho las estructuras armadas Shottas y Espartanos en los que ratifican su voluntad de avanzar en la construcción de Paz Urbana, manifestado como señal de este propósito el respeto a la realización del Festival Folklórico del Pacífico.

Esta Delegación continuará en la labor del diálogo con la sociedad de Buenaventura y con las estructuras armadas ilegales para lograr el "Acuerdo Regional y Nacional por la Paz en Buenaventura", que propende por:

- 1. Consolidación de una Cultura de Paz*
- 2. Transformaciones sociales del territorio*
- 3. Des-escalamiento de violencias*
- 4. Tránsito hacia la vida civil y democrática*

Agradecemos la apertura de la ciudadanía y las instituciones públicas locales, regionales y nacionales para respaldar este esfuerzo que acompaña la Comunidad Internacional a través de la Delegación de la ONU, la MAPP/OEA y el señor obispo de Buenaventura. "

h. Acercamientos con autorización para instalar un Espacio de Conversación Socio jurídico con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)

Durante el año 2023 y el primer semestre de 2024 se desarrollaron acercamientos exploratorios con el Clan del Golfo, en los cuales se adelantó la verificación de su voluntad real de reincorporación y reintegración a la sociedad civil. El 8 de julio de 2024, mediante Resolución No. 257, el Presidente de la República autorizó la instalación del Espacio de Conversación Socio jurídico con dicha estructura. Adicionalmente, mediante la Resolución 279 del 22 de julio de 2024, se reconocieron miembros representantes de la estructura para participar en el espacio. Desde diciembre de 2023, la interlocución con este grupo armado se encuentra en la etapa denominada Construcción de Confianza; una vez consolidada esta etapa se avanzará en las etapas subsiguientes.

i. Acercamientos con autorización para instalar un Espacio de Conversación Socio jurídico con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).

Durante el año 2023 y el primer semestre de 2024 se desarrollaron acercamientos exploratorios con la estructura armada. En estos se verificó su

voluntad real de dejar de existir como grupo armado y, en consecuencia, su voluntad de reintegrarse a la vida civil una vez surtidos los procesos judiciales pertinentes. Mediante la Resolución 300 del 1 de agosto de 2024 el Presidente de la República autorizó la instalación del Espacio de Conversación Sociojurídico con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) y designó el equipo de gobierno para el proceso. Asimismo, mediante la Resolución 335 del 26 de agosto de 2024 el Gobierno Nacional reconoció a cuatro miembros representantes de las ACSN. A la fecha, el proceso no se ha instalado formalmente.

Proposición 139:

1. ¿Cuál es su evaluación general sobre la efectividad del cese al fuego con el ELN y las disidencias en cuanto a la reducción de la violencia en las regiones afectadas?

El cese al fuego en el marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH) se define como un acuerdo temporal entre las partes de un conflicto armado para interrumpir las hostilidades. Este puede ser unilateral o bilateral y pretende facilitar situaciones específicas, como negociaciones de paz, ayuda humanitaria, evacuación de heridos o protección de la población civil.

Los ceses al fuego pueden clasificarse de diversas formas: pueden ser indefinidos o temporales; unilaterales, bilaterales o multilaterales, dependiendo del número de actores implicados; y pueden aplicarse a nivel local, regional o nacional. Es fundamental tener en cuenta que un cese al fuego no implica necesariamente el fin del conflicto, sino una suspensión de las acciones bélicas.

En algunos procesos, como el de las FARC-EP, el cese al fuego no solo marcó una pausa, sino el fin de las hostilidades y del conflicto armado entre el grupo y el Estado. Esto se debió a que la negociación tuvo lugar mientras persistían las hostilidades y el cese al fuego se acordó únicamente tras alcanzar un Acuerdo Final de Paz.

A pesar de los diferentes tipos de ceses al fuego, todos comparten un propósito esencial: mitigar los efectos del conflicto, especialmente sobre la población civil. Aunque pueden tener otros componentes, su objetivo primordial es reducir el impacto humanitario de la guerra, respetando el principio de distinción entre combatientes y no combatientes, que es uno de los fundamentos clave del DIH.

Con base en esta conceptualización, podemos responder de manera más precisa a la pregunta planteada: los ceses al fuego que se han pactado con el ELN y con otros grupos, como el Segunda Marquetalia y Estado Mayor de los Bloques, durante su vigencia, han sido efectivos para reducir los efectos del conflicto sobre la población civil. Aunque es ideal que un cese al fuego conduzca

eventualmente a la firma de Acuerdos Finales y a la resolución definitiva del conflicto, en el corto plazo, son un instrumento valioso para disminuir los riesgos inmediatos que el conflicto representa para la ciudadanía. En esa medida, son mecanismos efectivos.

Por otro lado, es importante resaltar que los ceses al fuego que ha desarrollado el gobierno nacional durante la política de Paz Total son bilaterales. Esto implica que se han acordado en el marco de procesos de paz con las dos partes para suspender las acciones ofensivas de estos grupos ejecutan. La situación es compleja en el contexto nacional, ya que muchos territorios concurren diferentes actores que mantienen hostilidades entre sí y sobre los que no se aplica un acuerdo bilateral de cese al fuego. Sin embargo, para minimizar esta situación, los ceses al fuego en ningún caso han afectado las funciones constitucionales del Estado como garante de los derechos de la ciudadanía. Se ha propendido en cada mesa de negociación porque los ceses no afecten la operación del Estado.

Ahora bien, el desarrollo de ceses, aun cuando sean temporales, se ha entendido por parte del Consejero Comisionado de Paz como una oportunidad para la transformación territorial y como instrumento para que los procesos de paz sean desde su inicio y durante su proceso garantía de los derechos de la ciudadanía.

2. ¿Qué factores cree que han contribuido al aumento de la violencia a pesar del cese al fuego con el ELN y la presencia de disidencias?

Es importante destacar que, a pesar de los esfuerzos del gobierno nacional, actualmente solo existe un cese al fuego vigente con el Estado Mayor de los Bloques En los demás procesos no se han establecido ceses al fuego vigentes.

Ahora bien, la política de paz total se diseñó para abordar la compleja dinámica de la violencia armada en Colombia mediante una combinación de estrategias integrales y sostenibles que inciden en las causas estructurales y las manifestaciones territoriales del conflicto. La falta de un cese al fuego vigente en la mayoría de los procesos y el aumento de la violencia en regiones afectadas por el conflicto evidencian la necesidad de una respuesta institucional robusta y multifacética, que involucre no solo medidas inmediatas de seguridad, sino también intervenciones de largo plazo que aborden los factores que alimentan la violencia.

En términos de política pública, esto implica el diseño y la implementación de programas intersectoriales que coordinan esfuerzos entre diferentes niveles de gobierno (nacional, departamental y local) y múltiples sectores, como seguridad, justicia, educación, desarrollo social, y economía. Algunos componentes clave de esta política incluyen:

- 1. Fortalecimiento de la presencia estatal y gobernabilidad territorial:** En los territorios con presencia limitada del Estado, la política

de paz se enfoca en reforzar la gobernanza local mediante inversiones en infraestructura pública, servicios básicos y apoyo a la gestión local. La consolidación de la autoridad civil y la confianza en las instituciones locales son fundamentales para contrarrestar la influencia de actores armados y limitar el control territorial de las economías ilegales.

2. **Desarrollo económico con enfoque territorial:** La creación de alternativas económicas es esencial en áreas donde las economías ilícitas sostienen las dinámicas de violencia y proporcionan financiamiento a los grupos armados. Esto requiere un enfoque en el desarrollo económico inclusivo, promoviendo programas de economía formal, reconversión de cultivos ilícitos, e incentivos para la generación de empleo local. A nivel de política pública, esto se traduce en proyectos de inversión pública y privada en sectores estratégicos y en la facilitación de un acceso justo a recursos productivos.
3. **Reducción de inequidades estructurales:** Las desigualdades persistentes en Colombia son una de las raíces profundas del conflicto. Para reducir estas inequidades, la política de paz total promueve la inversión en educación, salud y servicios básicos en las áreas más vulnerables. Programas de política pública en estos sectores buscan mejorar la calidad de vida, generar oportunidades para las comunidades y romper los ciclos de exclusión que fomentan la vulnerabilidad de la población frente a las dinámicas de conflicto armado.
4. **Implementación de programas de justicia transicional y restaurativa:** Como parte de la respuesta estatal a las violencias, la justicia transicional y los mecanismos de verdad y reparación son herramientas esenciales para reconciliar a las comunidades afectadas y reconstruir el tejido social. La política de paz total integra estos mecanismos en una estructura que permite tanto la reparación individual como la colectiva, fomentando la reconciliación en áreas afectadas por el conflicto.
5. **Participación ciudadana y transformación territorial:** La inclusión de las comunidades en el diseño y la ejecución de políticas de paz y seguridad es vital para garantizar que las intervenciones estatales reflejen las necesidades y aspiraciones locales. La política de paz total incorpora mecanismos de participación ciudadana y consultas comunitarias que refuerzan la legitimidad de las políticas y construyen un proceso de paz que es representativo de las diferentes regiones y comunidades de Colombia.
6. **En el contexto de los ceses al fuego, la política de paz total enfatiza la creación de un sistema sólido de monitoreo y verificación que**

supervise el cumplimiento de estos acuerdos y actúe con agilidad en caso de infracción. Esto no solo ayuda a mantener la confianza en los procesos de paz, sino que también permite reaccionar de forma rápida ante cualquier incremento en la violencia.

El enfoque de política pública reconoce que, si bien los ceses al fuego contribuyen a reducir temporalmente los niveles de violencia, su efectividad depende de su vigencia y cumplimiento. La ruptura de estos acuerdos tiende a correlacionarse con un aumento de la violencia, una dinámica que resalta la necesidad de mecanismos sólidos de monitoreo y de medidas de prevención que aborden las causas de las infracciones. La política de paz total, por lo tanto, no solo se enfoca en la firma de ceses al fuego, sino en el fortalecimiento de un contexto social y económico que minimice los incentivos para la violencia y fomente un marco de desarrollo sostenible en el largo plazo.

La política de paz total, al tratar el conflicto armado y sus múltiples causas como un problema de desarrollo integral, apunta a construir un modelo de paz, algo que no es un conflicto: se basa en el bienestar, la justicia, y la seguridad para todas las comunidades, en un marco de políticas públicas inclusivas y transformadoras. En consecuencia, el aumento con la violencia obedece a la persistencia de los factores estructurales mencionados y no tanto a los ceses al fuego. Aunque los ceses implican una medida inmediata para mitigar los impactos del conflicto, sino se desmontan los factores estructurales se pierden la potencialidad de que se vuelvan la antesala a la transformación territorial.

3. ¿Qué medidas se están implementando para garantizar la seguridad de las comunidades en las zonas donde el ELN y las disidencias tienen presencia?

El Consejero Comisionado para la Paz ha adoptado como medida clave priorizar y dar continuidad a los procesos de negociación con diferentes actores armados, como el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor de los Bloques, los Comuneros del Sur y los Conquistadores de la Sierra, además de impulsar los procesos socio-jurídicos que acompañan dichas negociaciones.

La evidencia empírica sugiere que la herramienta más eficaz para mejorar la seguridad en los territorios es el éxito de los procesos de paz. Un ejemplo de esto fue la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que contribuyó a fortalecer el control estatal y mejorar la protección de derechos entre 2003 y 2006. Asimismo, el Acuerdo Final de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las FARC-EP resultó en una mayor estabilidad institucional y una reducción significativa de los riesgos de seguridad y problemas de orden público entre 2016 y 2018.

Estas experiencias muestran que los procesos de paz no solo facilitan la pacificación de las regiones afectadas por el conflicto, sino que también fomentan una mayor presencia estatal y el fortalecimiento del tejido social en estas zonas. De tal forma que son una de las principales estrategias

En este contexto, el Consejero Comisionado ha instado a las mesas de negociación a que, cuando sea posible, se suscriban ceses al fuego. Como se ha mencionado previamente, estos ceses son fundamentales para garantizar derechos de la ciudadanía y permitir una intervención estatal transformadora en las áreas afectadas.

4. ¿Cómo está manejando el gobierno los informes de violaciones al cese al fuego por parte del ELN, las disidencias y otros grupos armados?

Es fundamental señalar que, en la actualidad, el único cese al fuego vigente es con el Estado Mayor de los Bloques, formalizado en el Decreto 1280 de 2024. Aunque los procesos de paz con grupos como la Segunda Marquetalia y el ELN continúan en marcha, no existen ceses al fuego vigentes con estos actores en este momento.

El tratamiento de los informes sobre violaciones al cese al fuego varía en cada caso debido a que los acuerdos de cese al fuego son bilaterales. En cada mesa de negociación, las partes definen mecanismos específicos para el monitoreo y verificación del cese al fuego, así como los protocolos mediante los cuales se recibe y evalúa la información. Este proceso es adaptado según las particularidades de cada acuerdo, y los informes son revisados para determinar su fiabilidad y si constituyen una violación real del cese.

Para aumentar la confiabilidad de este proceso, los mecanismos de monitoreo y verificación suelen contar con acompañantes internacionales o ser mecanismos tripartitos, como los que incluyen la participación de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA). Esto garantiza una evaluación conjunta de la información recibida, proporcionando una base sólida para revisar los informes de violación.

El gobierno, como parte de estos mecanismos, comparte la información que recibe y que puede implicar una posible violación del cese. Esta información, obtenida de diversas fuentes, es trasladada a las delegaciones correspondientes y a los mecanismos establecidos para su verificación.

5. ¿Qué rol están jugando las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la monitorización y el mantenimiento del cese al fuego con el ELN y las disidencias?

Las funciones de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están definidas en la Constitución Política, específicamente en los artículos 216 al 223, y se mantienen vigentes en todo momento, incluso en el marco de los procesos de paz y los ceses al fuego, ya que constituyen un mandato constitucional. Esto significa que, aunque exista un cese al fuego, la Fuerza Pública sigue siendo garante de los derechos de la ciudadanía. Lo único que se suspende temporalmente son las acciones ofensivas y las operaciones especiales de la policía. Esta continuidad es crucial para evitar que los ceses al fuego generen zonas de despeje, lo cual podría poner en riesgo los derechos de las víctimas y de la población civil.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional también participan activamente en los mecanismos de verificación, monitoreo y mantenimiento de los ceses al fuego cuando estos están vigentes. Además de ser garantes de los derechos de la ciudadanía, aportan en calidad de partes información valiosa a estos mecanismos, lo que permite determinar si un incidente o situación constituye un incumplimiento del cese. De este modo, la Fuerza Pública contribuye no solo a monitorear eficazmente el cumplimiento del cese al fuego, sino también a mantener las condiciones necesarias para su vigencia. Su rol es fundamental para asegurar que los ceses al fuego no se traduzcan en vacíos de autoridad, sino en instrumentos efectivos para la protección de la población.

Asimismo, la Fuerza Pública tiene una responsabilidad crucial en la protección de la población civil en el marco de los ceses al fuego. A menudo, en situaciones de conflicto, la población civil es la más vulnerable, y la presencia de las autoridades es un factor disuasivo frente a posibles ataques o abusos por parte de grupos armados. Esta protección refuerza el principio de distinción entre combatientes y no combatientes, que es fundamental en el Derecho Internacional Humanitario, y permite que los ceses al fuego logren su objetivo primario de mitigar el sufrimiento de los civiles.

Finalmente, el papel de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no se limita a la fase de implementación de los ceses al fuego, sino que también es esencial para el seguimiento y consolidación de los acuerdos de paz a largo plazo. Su capacidad para adaptarse a nuevas funciones, como el desminado humanitario, la protección de corredores humanitarios y el apoyo logístico en zonas afectadas, demuestra su flexibilidad y relevancia en los contextos de postconflicto, lo que fortalece el proceso de reconstrucción institucional y garantiza la estabilidad territorial.

Las acciones específicas que desarrollan las Fuerzas Armadas no son recompiladas en esta respuesta, en la medida en que la cabeza del sector defensa, que es el Ministerio de Defensa, es quien tiene la información completa. En consecuencia, la respuesta se limita a la caracterización de la función de la fuerza pública del Consejero Comisionado de Paz en el marco de los ceses al fuego.

En este sentido, de manera respetuosa, se indica que en virtud del Decreto 2647 de 2022 en su artículo 23, la Consejería Comisionada de Paz no es competente para responder este requerimiento en su totalidad.

En este sentido, dando cumplimiento al Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, modificado y adicionado por la Ley 1755 del 2015, se dio traslado del requerimiento al Ministerio de Defensa para los fines pertinentes, mediante OFI24-00211431.

6. ¿Cómo se están involucrando las comunidades en el proceso de paz y en la implementación de medidas para la reducción de la violencia por parte del ELN y las disidencias?

Los estudios sobre la construcción de paz destacan que el involucramiento de la sociedad es fundamental para el mantenimiento de procesos de paz y la posterior implementación de acuerdos. Sin embargo, cada proceso de paz requiere condiciones específicas de involucramiento que ayuden a agilizar y solventar las dificultades inherentes a estos procesos.

En esta medida, las comunidades siempre han estado contempladas en las agendas de los distintos procesos de negociación, aunque el nivel de involucramiento y el momento de participación varían. En el caso del Ejército de Liberación Nacional (ELN), a pesar de las dificultades propias del proceso, la Mesa de Diálogos logró el Acuerdo No. 28 sobre la participación de la sociedad en la construcción de paz, que establece un proceso de participación diverso, cuyo principal objetivo es dar un espacio a la sociedad en la construcción de la paz y en la transformación de las condiciones que dieron paso a la violencia.

En otros casos, aunque el proceso y la delegación del gobierno contemplan la participación de la sociedad civil, por el estado en que se encuentran, no han desarrollado acuerdos específicos de participación. Por ejemplo, en el proceso con el Estado Mayor de los Bloques, el Acuerdo V establece una ruta de participación social y un conjunto de intervenciones territoriales en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Caquetá, Meta y Guaviare, así como en la región del Catatumbo en el Norte de Santander.

Ahora bien, dado que la política de paz total busca que los acuerdos de las mesas, aunque sean parciales, se implementen de tal manera que potencien el carácter transformador del proceso, algunos acuerdos logrados en el marco de estas negociaciones han servido como puertas de entrada de gran valor para vincular a la sociedad y las comunidades en estos procesos de paz.

7. ¿Qué mecanismos de verificación y control se han establecido para supervisar el cumplimiento del cese al fuego por parte del ELN y las disidencias?

A continuación, se presenta un listado de los ceses al fuego establecidos entre el Gobierno Nacional y diferentes grupos armados, con sus respectivos decretos y protocolos. Estos acuerdos, formalizados en distintas fases de los procesos de paz, han sido clave para reducir la violencia y avanzar en las negociaciones. Cada cese al fuego ha sido pactado en función de las condiciones específicas de las partes involucradas y de las áreas geográficas afectadas, con mecanismos de verificación diseñados para garantizar su cumplimiento y respeto por el Derecho Internacional Humanitario (DIH):

1. Estado Mayor de los Bloques

- A. **Decreto 2656 de 2022:** Del 01 de enero al 30 de junio de 2023 (incluida suspensión parcial establecida en el Decreto 801 de 2023 desde el 25 de mayo de 2023 en los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo). Este Cese se contempló considerando que:
- El 24 de diciembre de 2022, el autodenominado Estado Mayor Central FARC EP, EMC anunció un cese unilateral de fuego.
 - Luego, en desarrollo de la fase de exploración realizada con mandos del citado movimiento armado y la OACP, en presencia de delegados internacionales, el autodenominado Estado Mayor Central FARC-EP expresó, motu proprio, su acatamiento al DIH y en acuerdo con el gobierno asumió compromisos en la aplicación de asuntos enmarcados
 - en el DIH sobre el respeto a la vida y al ambiente.
- B. **Decreto 1640 de 2023:** Suspensión de operaciones militares ofensivas y operaciones especiales de Policía, del 10 al 16 de octubre de 2023. Este fue un Acuerdo realizado de manera previa a la instalación de la Mesa de Diálogo. Se estipuló en virtud de que el Estado Mayor Central de las FARC EP acordó "suspender las acciones ofensivas en contra de la Fuerza Pública, durante el periodo que así lo haga el Gobierno nacional".
- C. **Decreto 1684 de 2023:** Del 17 de octubre de 2023 al 15 de enero de 2024. Este Cese se estableció mediante los siguientes acuerdos y protocolos pactados en la Mesa de diálogo:
- Acuerdo I: Acuerdo para el respeto a la población civil y la implementación del cese al fuego bilateral, temporal de carácter nacional con impacto territorial entre el Gobierno Nacional de la República de Colombia y el Estado Mayor central de las FARC-EP. Octubre 16 de 2023.
 - Protocolo I: Protocolo de reglas y compromisos para el cese al fuego bilateral, temporal de carácter nacional con impacto territorial. Octubre 16 de 2023.

- Protocolo II: Protocolo para mandato del mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación en el marco del acuerdo para el respeto a la población civil y la implementación del cese al fuego bilateral, temporal de carácter nacional con impacto territorial. Octubre 16 de 2023.
- Protocolo de Comunicación para evitar incidentes y el contacto armado entre el Estado Mayor Central de las FARC-EP y la Fuerza Pública durante la vigencia del Cese al Fuego bilateral temporal de carácter nacional con impacto territorial (CFBTNT). Marzo 10 de 2024.

D. **Decreto 016 de 2024:** Del 16 de enero al 15 de julio de 2024 (incluida suspensión del CFBTNT establecida en el Decreto 0385 de 2024 desde el 20 de marzo de 2024 con las estructuras armadas que operan en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca). Este Cese se pactó mediante el Acuerdo V. Ruta para la participación social, agenda de la mesa de diálogos de paz, compromiso socioambiental, transformaciones territoriales y aspectos humanitarios, jurídicos y de seguridad, del 18 de enero de 2024.

E. **Decreto 0888 de 2024:** Del 16 de julio a 15 de octubre de 2024 (sólo con el autodenominado Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte, Comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes FARC-EP). Este último Cese fue establecido mediante el Acuerdo de las Delegaciones del Gobierno nacional y el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte, Comandante Jorge Suarez Briceño y Frente Comandante Raul Reyes FARC-EP.

2. Ejército de Liberación Nacional (ELN)

a. **Decreto 2657 de 2022:** Del 01 de enero al 30 de junio de 2023 (incluida suspensión del CFBTN establecida en el Decreto 04 de 2023 desde el 04 de enero de 2023 y hasta tanto fueran aprobados los protocolos que se suscriban entre el Gobierno nacional y el ELN).

b. **Decreto 117 de 2023:** Del 03 de agosto de 2023 al 29 de enero de 2024. Este Cese fue establecido mediante:

- El Acuerdo No. 10. Acuerdo de Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal el Gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional - ELN (Segundo Acuerdo de Cuba) del 09 de junio de 2023.
- Protocolo sobre el Rol de la Mesa de Diálogos de Paz en el Cumplimiento del Acuerdo de Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal - CFBNT y su relación con el Mecanismo de Monitorio y Verificación (MMV) del 13 de julio de 2023.

- El Cese fue prorrogado mediante el Acuerdo No. 18. Acuerdo sobre la prórroga del Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal del 17 de diciembre de 2023.
- c. **Decreto 104 de 2024:** Del 06 de febrero al 03 de agosto de 2024, pactado mediante el Acuerdo 23. Prórroga del Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal, del 05 de febrero de 2024.

3. **Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN)**

- a. **Decreto 2659 de 2022:** Del 01 de enero al 30 de junio de 2023. El Cese se estableció considerando que las ACSN, el 30 de diciembre de 2022, luego de reuniones de exploración con la OACP expresaron su disposición a un cese unilateral de fuego, y manifestaron su decisión de participar activamente en un mecanismo de dialogo socio jurídico, nombrando y a sus voceros y delegados.

4. **Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)**

- a. **Decreto 2658 de 2022:** Del 01 de enero al 30 de junio de 2023 (incluida suspensión del CFBTN establecida en el Decreto 380 de 2023 desde el 19 de marzo de 2023). El Cese se estipuló en virtud de que el 30 de diciembre de 2022, luego de tres reuniones de exploración con facilitadores designados por la OACP y una reunión sostenida con la OACP en presencia de delegados internacionales, las AGC reiteraron su disposición a un cese unilateral de fuego, y manifestaron su decisión de participar activamente

5. **FARC - Segunda Marquetalia (FARC SM)**

Decreto 2660 de 2022: Del 01 de enero al 30 de junio de 2023, lo anterior en virtud de:

- El 30 de diciembre de 2022, el autodenominado grupo armado Segunda Marquetalia anunció públicamente su disposición al inicio de conversaciones, luego de la fase de exploración sostenida con la OACP.
- Que en desarrollo de la fase de exploración con mandos de este movimiento armado y la OACP en presencia de delegados internacionales y la iglesia, este movimiento expresó motu proprio su acatamiento al DIH y por acuerdo con el gobierno una de medidas de aplicación del DIH en sus regiones de operación.

8. ***¿Qué impacto ha tenido el cese al fuego en el tráfico de drogas y otras actividades ilegales en las zonas controladas por el ELN y las disidencias?***

De manera respetuosa, se indica que en virtud del Decreto 2647 de 2022 en su artículo 23, la Consejería Comisionada de Paz no es competente para responder este requerimiento.

En este sentido, dando cumplimiento al Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, modificado y adicionado por la Ley 1755 del 2015, se dio traslado del requerimiento al Ministerio de Defensa Nacional para los trámites pertinentes, mediante OFI24-00211431.

9. ¿Cómo se está abordando la desmovilización y reintegración de los combatientes del ELN y las disidencias en la sociedad civil?

La desmovilización y reintegración puede ser individual o colectiva. En el caso de la desmovilización individual, se aplica lo establecido en la ruta de desmovilización regulada por el Decreto 128 de 2003. En cambio, la desmovilización colectiva obedece a los acuerdos parciales que se hayan determinado para tal efecto y a lo establecido en la normativa jurídica, especialmente en la Ley 2272 de 2022. En el proceso colectivo, una vez se realice la dejación de armas, la concentración y otras acciones necesarias para la desmovilización, se inicia el proceso de reintegración, en el cual intervienen diferentes entidades y programas, siendo la Agencia para la Reincorporación y Normalización un actor clave en este proceso.

Teniendo en cuenta lo establecido en el Acuerdo de México sobre la Agenda de la Mesa de Diálogos de Paz, el punto V sobre el Fin del Conflicto contiene, dentro del mismo, la determinación sobre la resolución de la situación jurídica de los combatientes del ELN, así como las condiciones necesarias para su tránsito a la legalidad y su participación política. Por lo tanto, el abordaje del mismo se dará en cuanto se evacúen los puntos 2 a 4, que actualmente no han sido discutidos en la Mesa de Diálogos de Paz.

10. ¿Qué planes tiene el gobierno para fortalecer la presencia del Estado y las instituciones en las áreas afectadas por el conflicto para evitar un resurgimiento de la violencia y controlar las actividades de las disidencias?

La actuación del gobierno nacional está mediada por el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial para la Vida”, tanto en sus bases como en la ley aprobada por el Congreso (Ley 2294 de 2023). En estos documentos se consigna la hoja de ruta del gobierno y las diferentes estrategias orientadas a la consolidación de la paz total. Este proyecto de gobierno, centrado en el cambio, implica diversas intervenciones del Estado y pone en el centro los derechos de la población, especialmente de aquella que ha sido marginada

política y económicamente. El remedio ante la violencia es la transformación territorial, y los procesos de paz son un mecanismo para alcanzar tal fin.

Dentro de este plan se encuentra una baraja de políticas y herramientas orientada para tal fin, que se pueden consultar y que suponen esfuerzos interadministrativas e interinstitucionales. Pero en el marco de la Consejería Comisionada de Paz son particularmente relevantes las que establece el artículo 23 de la ley 2294 de 2023, que incluyen el programa de Acuerdos Parciales para la Paz y las regiones de paz actualmente en reglamentación. Por supuesto, también se encuentran las Maquetas de Paz que son intervenciones tempranas del Estado para avanzar en la transformación territorial.

Establece la Ley 2272 de 2022, conocida como Ley de Paz Total, mediante la cual se prorrogó y modificó la Ley 418 de 1997 (conocida como Ley de Orden Público), que la paz total es una política de Estado, con las siguientes características:

"(...) Será prioritaria y transversal en los asuntos de Estado, participativa, amplia, incluyente e integral, tanto en lo referente a la implementación de acuerdos, como con relación a procesos de negociación, diálogo y sometimiento a la justicia. Los instrumentos de la paz total tendrán como finalidad prevalente el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos; estándares que eviten la impunidad y garanticen en el mayor nivel posible, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación."

Así mismo, la política de paz total se relaciona con el concepto de seguridad humana, el cual consiste en lo siguiente:

*"(...) La seguridad humana consiste en proteger a las personas, la naturaleza y los seres sintientes, de tal manera que realce las libertades humanas y la plena realización del ser humano por medio de la creación de políticas sociales, medioambientales, económicas, culturales y de la fuerza pública que **en su conjunto brinden al ser humano las piedras angulares de la supervivencia, los medios de vida y la dignidad.***

El Estado garantizará la seguridad humana, con enfoque de derechos, diferencial, de género, étnico, cultural, territorial e interseccional para la construcción de la paz total. Para ello, promoverá respuestas centradas en las personas y las comunidades, de carácter exhaustivo y adaptadas a cada contexto, orientadas a la prevención, y que refuercen la protección de todas las personas y todas las comunidades, en especial, las víctimas de la violencia. Asimismo, reconocerá la interrelación de la

paz, el desarrollo y los derechos humanos en el enfoque de seguridad humana.

La cultura de Paz Total es un concepto especial de Seguridad Humana, para alcanzar la reconciliación dentro de la biodiversidad étnica, social y cultural de la nación a efectos de adoptar usos y costumbres propias de una sociedad sensible, en convivencia pacífica y el buen vivir.” (negrillas fuera del texto original).

Es en tal sentido, que la política pública de Paz Total es una política estatal de carácter transversal, que irriga todo el accionar de las entidades del Estado y que se dirige a garantizar la paz, entendida en su triple naturaleza constitucional como valor, principio y derecho fundamental, según lo conceptúa la Corte Constitucional en sentencia C-630 de 2017. Esta transversalidad es ratificada en el Plan Nacional de Desarrollo, tal como lo señala el numeral 1 del artículo 4 de la Ley 2294 de 2023, cuando señala lo siguiente:

*“1. Paz total. Entendida como una apuesta participativa, amplia, incluyente e integral para el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos; con estándares que eviten la impunidad y garanticen en el mayor nivel posible los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. **Esto implica que el centro de todas las decisiones de política pública sea la vida digna, de tal manera que los humanos y los ecosistemas sean respetados y protegidos.** Busca transformar los territorios, superar el déficit de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, y acabar con las violencias armadas, tanto aquellas de origen sociopolítico como las que están marcadas por el lucro, la acumulación y el aseguramiento de riqueza. Este eje tendrá presente los enfoques de derechos de género, cultural y territorial.” (negrilla y subrayado fuera del texto original).*

En este sentido, la política pública de paz total privilegia el uso del diálogo y las conversaciones como herramienta de superación de los conflictos y manifestaciones armadas, no sólo como estrategia estatal sino como obligación constitucional, la cual se impone al presidente de la República como Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, según las facultades constitucionales señaladas en los numerales 3 y 4 del artículo 189 de la Constitución Política. Este mecanismo de solución pacífica de los conflictos ha sido reiteradamente avalado en sede de constitucionalidad por la Corte Constitucional, como lo ha señalado en sentencia

C-048 de 20014, C-579 de 2012, C-630 de 2017, C-069 de 2020 y, recientemente, en la sentencia C-525 de 2023.

Es en tal sentido que el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 – Colombia Potencia Mundial de la Vida, establece que es el diálogo el que permite "(...) *identificar las causas y motivaciones de la violencia, para afrontarlas y transformarlas en el marco del Estado Social y Ambiental de Derecho.*"^[1] Este diálogo no se desarrolla bajo cualquier condición, o sin exigencia alguna. Tal como se señala en este mismo documento, se establecen cuatro principios fundamentales en cada uno de los procesos de paz:

*"Todos los grupos que quieran participar en la Paz Total deberán asumir, como punto de partida, el respeto a la vida: **no torturar, no desaparecer, no matar y evitar confrontaciones armadas letales, entre ellos y con la Fuerza Pública.** En el mismo sentido, la exigencia también será el respeto a las fuentes de vida: aguas, bosques y los ecosistemas. De igual manera, se deberá garantizar el aporte progresivo a la verdad, la reparación y garantías de no repetición para las víctimas; así como los derechos de los niños, las niñas, los jóvenes y de las mujeres."* (Negrilla fuera del texto original)

A través del diálogo el Gobierno Nacional busca lograr acuerdos y condiciones que permitan superar la violencia como un mal endémico, restablecer el ejercicio de la justicia, garantizar la seguridad humana y lograr las transformaciones sociales, políticas, culturales y ambientales para que la paz se convierta en un estado natural en los territorios, especialmente en aquellos históricamente excluidos.

La Paz Total es la transformación de los territorios y de las economías ilegales, en conjunto con las poblaciones, para alcanzar un Estado social y ambiental de derecho. En las transformaciones necesarias para la construcción de paz, además de las territoriales, está la de los actores armados ilegales en actores sociales y políticos legales por medio de procesos de diálogo y de sometimiento a la justicia. La Paz Total busca la armonización entre la implementación del Acuerdo Final de Paz con las FARC, con la implementación de los acuerdos generados en las nuevas mesas de diálogos de paz.

Algunos de los elementos fundamentales de la política de Paz Total son:

- **Territorialización**, tiene tres aspectos que deben estar coordinados: los actores armados que están en los territorios; los diálogos territoriales que están impulsando los mandatarios regionales y locales con las

comunidades; y las transformaciones territoriales en las áreas de influencia de los grupos armados.

- **Celeridad**, implica llevar a cabo los procesos atendiendo a la necesidad sentida de las comunidades en los territorios, que reclaman los cambios para que la violencia no siga imperando, para lo cual es necesario crear una dinámica irreversible hacia la terminación de las violencias.
- **Integralidad en la paz**, significa que el Estado, en todas sus expresiones, llegue a los lugares en los que hay para-Estados dominados por actores armados. Esto implica el cumplimiento por parte del Estado, incluidas las administraciones regionales y locales, que deben concurrir en la presencia estatal; además de ofertas sociales, el acceso a la justicia y la garantía de la seguridad por parte del Estado son temas clave.

Este enfoque se busca garantizar a través de dos tipos de acciones, en materia de paz, principalmente: i) las maquetas de paz, las cuales son intervenciones del Gobierno Nacional en articulación con autoridades locales y territoriales, donde confluyen distintos instrumentos de planeación y con la finalidad de construir proyectos de impacto rápido que generen transformaciones territoriales. A la fecha, se han estructurado las maquetas de paz del Bajo Calima (bajo liderazgo del Departamento Nacional de Planeación) y de la región de Abades (Nariño), a cargo de esta Oficina de Paz; y, ii) los acuerdos parciales, que buscan generar condiciones de transformación territorial, como el plan de acción acordado el 13 de octubre de 2024 en el marco de la Mesa de Diálogos de Paz con el Estado Mayor de los Bloques y un frente, que se constituye como un banco de proyectos de impacto rápido en sectores que han sido afectados por la violencia, donde hace presencia este actor armado, y se requiere una intervención estatal.

Ahora bien, en relación con la intervención prioritaria que ha adelantado el Gobierno Nacional en el marco del “Plan Cauca”, lugar donde hacen presencia los bloques del Estado Mayor Central de las FARC-EP, consideramos respetuosamente que quienes deben dar cuenta de esta intervención son la Unidad Administrativa de Reparación Integral para las Víctimas, la Dirección de Sustitución de Cultivos de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Educación Nacional y la Unidad de Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD), a quienes se traslada la solicitud.

^[1] Departamento Nacional de Planeación. Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia Potencia Mundial de la Vida. Disponible en

<https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Publicaciones/plan-nacional-de-desarrollo-2022-2026-colombia-potencia-mundial-de-la-vida.pdf>.

Respuesta a traslado del Ministerio de Defensa Nacional mediante EXT24-00167629.

4. ¿Qué motivó a continuar con el cese al fuego y qué medidas tomarán contingencia en el caso de un ataque armado?"

La motivación principal para continuar con los ceses al fuego en los diferentes procesos que adelanta el Consejero Comisionado de Paz es el imperativo constitucional que establece el artículo 22 de la Carta, según la cual, la Paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. La Consejería es la entidad encargada del desarrollo de procesos de paz, en los términos que establece la ley 2272 de 2022, y los ceses al fuego son un instrumento para que, de forma temprana en estos procesos, se puedan salvaguardar los derechos de la ciudadanía y garantizar los principios del DIH, en especial el principio de distinción. Esa siempre ha sido la motivación de fondo y el sentido mismo de pactar ceses al fuego.

Si el cese al fuego se vulnera por un ataque armado y esto se revisa según el caso, la reacción de las Fuerzas Armadas y del gobierno nacional, como se ha establecido en todos los casos, es la reanudación de las operaciones militares ofensivas y de operaciones especiales de la policía para asegurar el orden público. Estas acciones responden ante los riesgos que puedan generarse y buscan mantener el orden público.

Respuesta a traslado del Ministerio del Interior mediante EXT24-00168686.

9. Indique quienes conforman el mecanismo de Veeduría, monitoreo y verificación o también llamada como la "mesa de contingencia"

De antemano, es necesario anotar que la pregunta resulta un poco ambigua toda vez que no especifica a cuál Mecanismo hace referencia. En ese sentido, nos referiremos al equipo especial de contingencias del Decreto 1640 de 2023 y al Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV) del cese al fuego estipulado en el Decreto 888 de 2024.

Por un lado, mediante el Decreto 1640 de 2023, el Ministerio de Defensa ordenó la creación del equipo especial de contingencias. Este equipo estuvo conformado por un representante del Ministerio de Defensa Nacional, un representante de las Fuerzas Militares, un representante de la Policía Nacional, un representante de la delegación del Gobierno nacional en los diálogos de paz, un representante de la delegación del Estado Mayor Central de las FARC-EP en los diálogos de paz. El objetivo de este equipo era hacer monitoreo a la suspensión de las

operaciones militares ofensivas y las operaciones especiales de Policía y prevenir incidentes entre las partes.

Asimismo, en el decreto se indicó que se invitaría a participar a la Misión de Verificación de Naciones Unidas, la Misión de Apoyo al proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA), la Conferencia Episcopal de Colombia y el Consejo Mundial de Iglesias. Este equipo de contingencias estuvo vigente hasta las 24:00 horas del día 16 de octubre de 2023.

Por otro lado, mediante el Decreto 888 de 2024 se decretó el Cese al Fuego Bilateral y Temporal con respeto a la población civil sobre la base de los acuerdos para el respeto de la población civil entre el Gobierno Nacional y el autodenominado Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte, Comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes FARC - EP a partir de las 00:00 horas del día 16 de julio de 2024 hasta las 24:00 horas del día 15 de octubre de 2024.

Asimismo, se ordenó el establecimiento del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV) del cese al fuego y disposiciones de respeto a la población civil como instancia técnica. Este Mecanismo está integrado por: (i) el Gobierno Nacional, representado por los delegados del Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, y la Oficina del Consejero Comisionado de Paz; (ii) el autodenominado Estado Mayor de los bloques y estructuras mencionados en el artículo 1 de este decreto; (iii) la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia, sujeto a la decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; y (vi) la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos MAPP OEA.

Elaborado por el Equipo de Gestión Jurídica de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz.